

El Informe África 2026 de Fundación Alternativas se centra en los retos y oportunidades que plantea un nuevo modelo de financiación al desarrollo a resultas de factores como la retirada de EEUU del sistema de la ayuda, con el desmantelamiento de la USAID y de las agencias de Naciones Unidas; la presencia creciente de China a través de su proyecto de la Franja y la Ruta; o nuevas prioridades en Europa como el aumento del gasto en defensa.

Este Informe ofrece un estudio en profundidad que reflexiona y elabora propuestas en torno a un nuevo modelo de financiación del desarrollo sostenible. Estamos en un momento crítico donde la UE y España deberían contribuir a la articulación de un nuevo modelo, más horizontal, participativo, y eficaz. Sucesivamente se abordan cuestiones como el estado actual de la deuda y el desarrollo en África: el nexo seguridad y desarrollo; las tensiones entre las agendas externas y los intereses africanos en el Sahel y África Occidental; el nuevo escenario de la cooperación española y europea; el papel del sector privado, o las perspectivas para el desarrollo africano tras la IV Cumbre de Financiación de Sevilla.

Informe *África* 2026

África y la nueva financiación al desarrollo. Retos y oportunidades.



Informe África 2026

Informe *África* 2026

África y la nueva
financiación al desarrollo.
Retos y oportunidades.

Coordinación

Andrea Chamorro

Autores

Jaume Portell, Andrea Chamorro,
Romeo Gbaguidi, Agossa Paul Ogboya,
Olga Namasembe, Jose Javier Sastre Aparisi,
Pablo Martinez Oses y Luis García Blanch

FUNDACIÓN ALTERNATIVAS

Informe

No. 07/2026

Índice

Prefacio	9
<i>por Étienne Fakaba Sissoko</i>	
Prólogo	15
<i>por Diego López Garrido</i>	
CAPÍTULO 1	
Gastar menos, gastar mejor. Ayuda, deuda y desarrollo en el continente africano	23
<i>por Jaume Portell</i>	
CAPÍTULO 2	
El nexa seguridad y desarrollo en el paradigma actual: el caso del Sahel	41
<i>por Andrea Chamorro</i>	
CAPÍTULO 3	
Tensiones entre agendas externas e intereses africanos en el Sahel y África Occidental	55
<i>por Romeo Gbaguidi y Agossa Paul Ogboya</i>	
CAPÍTULO 4	
África Subsahariana: deuda, gobernanza y desarrollo inclusivo	71
<i>por Olga Namasembe</i>	
CAPÍTULO 5	
El desafío africano ante el nuevo escenario para la cooperación española y europea	87
<i>por Jose Javier Sastre Aparisi y Pablo Martínez Osés</i>	
CAPÍTULO 6	
El papel de la empresa privada y el sector privado en África	103
<i>por Luis García Blanch</i>	

Epílogo	117
<i>por</i> Vicente Palacio	
Biografías	122

Prefacio: Deuda y desarrollo en África: transformar la limitación

por Étienne Fakaba Sissoko

INTRODUCCIÓN: UNA NUEVA ERA EN LA FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO

En África, la cuestión de la deuda pública vuelve hoy a ocupar un lugar central en el debate mundial. Tras una década de expansión económica, las sucesivas crisis provocadas por la pandemia, la inestabilidad geopolítica y las crisis energéticas y climáticas han cambiado las reglas del juego. Los Estados han aumentado su endeudamiento para proteger a sus poblaciones, mantener los servicios esenciales y amortiguar la caída de los ingresos.

Pero detrás de las cifras se esconde una realidad más profunda: la deuda se ha convertido tanto en una herramienta de resiliencia como en un símbolo de fragilidad. El verdadero reto ya no es el volumen de la deuda, sino su calidad, su destino y el valor que genera. Una deuda bien concebida puede construir carreteras, electrificar pueblos y formar profesores; una deuda mal orientada, por el contrario, puede comprometer el futuro.

En este nuevo ciclo, África debe superar la lógica de la carga para afirmar la lógica de la responsabilidad compartida: una gestión más rigurosa a escala nacional y una cooperación más equitativa a escala mundial.

1. LA DINÁMICA DE UNA DEUDA EN TRANSFORMACIÓN

La estructura de la financiación del desarrollo africano ha cambiado profundamente.

En primer lugar, se han multiplicado las fuentes de capital. A los donantes tradicionales se suman ahora los bancos regionales, los fondos soberanos, los inversores privados y los nuevos socios del Sur global. Esta diversidad amplía las posibilidades de financiación, pero exige una gestión mucho más sofisticada: África ya no solo necesita dinero, sino también control financiero.

En segundo lugar, las condiciones internacionales se han vuelto más exigentes. El aumento de los tipos de interés, la volatilidad de las divisas y la competencia mundial por el capital encarecen el coste de los préstamos. Hoy en día, muchos países deben elegir entre el reembolso de la deuda y la inversión social. Esta tensión revela una verdad simple: sin un crecimiento inclusivo, ninguna deuda es sostenible.

Por último, el continente está cambiando de rostro. Una población joven, urbana e inventiva reclama infraestructuras, energía y empleo. El desarrollo de estas capacidades productivas — educación, innovación, industria— es la clave para una trayectoria de deuda viable. En otras palabras, cuanto más invierta África en su propio potencial, menos riesgo supondrá la deuda y más se convertirá en una palanca.

2. DE LA DEUDA SUFRIDA A LA DEUDA ESTRATÉGICA

La deuda no es un error económico: es una promesa de futuro. Pero es necesario que financie el futuro.

Con demasiada frecuencia, los préstamos públicos se han utilizado para cubrir déficits inmediatos en lugar de para construir activos duraderos. El reto de los próximos cinco años será pasar de una deuda reactiva a una deuda transformadora.

Hay tres condiciones que hacen posible esta transición:

1. Inversión productiva: cada préstamo debe financiar un proyecto con un rendimiento económico o social identificable: energías renovables, agricultura resiliente, conectividad digital, capital humano. Son estos proyectos los que generan los ingresos futuros necesarios para el reembolso.
2. Transparencia y disciplina presupuestaria: una información clara sobre el saldo, las condiciones y el uso de la deuda refuerza la confianza tanto de los ciudadanos como de los inversores. La sostenibilidad no es solo una cuestión de ratios, sino también de credibilidad.
3. Cooperación regional: la integración financiera africana, a través de los mercados de bonos regionales y los proyectos transfronterizos, permite mutualizar los riesgos y reducir los costes.

La deuda se convierte así en un vector de unidad, no en una carga aislada: un instrumento colectivo de desarrollo al servicio de objetivos comunes.

3. EL NUEVO ROSTRO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

El paradigma del desarrollo también está cambiando. La ayuda clásica, centrada en la transferencia unidireccional de recursos, está dando paso a un enfoque de coinversión sostenible.

Los donantes públicos, las instituciones multilaterales y el sector privado están explorando actualmente instrumentos híbridos: garantías parciales, financiación mixta, bonos verdes o sociales. Esta arquitectura permite atraer capital privado sin perder la orientación pública: crecimiento, equidad, clima.

Europa tiene un papel decisivo que desempeñar en esta transición. Por su proximidad geográfica e histórica, sigue siendo el principal socio del continente. Pero su in-

fluencia se medirá ahora por su capacidad para acompañar a África en la creación de valor, no para compensarla.

España, en particular, cuenta con ventajas singulares: una reconocida experiencia en cooperación descentralizada, conocimientos especializados en energías renovables, gestión del agua y economía azul. Apoyándose en estas competencias, puede convertirse en un eje de la cooperación euroafricana moderna, orientada hacia la sostenibilidad, el empleo y la seguridad alimentaria.

La deuda africana, situada en este contexto, ya no es un problema que hay que resolver, sino una oportunidad que hay que aprovechar: la de una alianza económica basada en la reciprocidad y la confianza.

4. LAS CONDICIONES PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

Transformar la deuda en motor de prosperidad supone abordar varios frentes internos.

- Aumentar los recursos internos: reforzar las administraciones fiscales, reducir las exenciones y valorizar los sectores con alta rentabilidad local (minería, telecomunicaciones, propiedad inmobiliaria).
- Mejorar la eficacia del gasto público: planificar, evaluar, mantener; evitar que los proyectos de infraestructura se deterioren por falta de mantenimiento.
- Estabilizar el clima macroeconómico: controlar los déficits, preservar la moneda, fomentar el ahorro y los mercados de capitales locales.
- Anclar la gobernanza en la responsabilidad: auditar, publicar, rendir cuentas.

Estas reformas exigen valor político, pero ofrecen a cambio lo más valioso: la soberanía financiera. Una África capaz de gestionar su deuda según sus propias prioridades será una África capaz de elegir libremente sus alianzas.

5. CONCLUSIÓN: CONVERTIR LA DEUDA EN UNA APUESTA POR EL FUTURO

África entra en un periodo decisivo. Su crecimiento demográfico y sus necesidades de inversión son inmensas, pero sus márgenes presupuestarios siguen siendo estrechos. Entre la restricción y la oportunidad, la deuda será el revelador de su modelo de desarrollo. Si se destina a financiar escuelas, energía verde e infraestructuras que conecten los territorios, la deuda será un motor. Si se pierde en el consumo corriente, se convertirá en una trampa.

La diferencia no dependerá de la coyuntura, sino de la gobernanza. En el mundo que se avecina, el reto no es endeudarse menos, sino endeudarse mejor: transformar cada obligación en inversión, cada reembolso en crecimiento, cada compromiso financiero en proyecto social. Solo así África podrá convertir la deuda, durante mucho tiempo símbolo de dependencia, en una herramienta de soberanía y desarrollo compartido.

Prologo: África entre el desarrollo y la deuda

por Diego López Garrido

DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN ALTERNATIVAS

Cómo nos recuerda David Pilling (Financial Times, August 19), John Mahama, durante su primer mandato al frente de Ghana, lanzó la idea de “trade not aid”. Fue en 2016.

Hablando ante la Asamblea General de Naciones Unidas, dijo: “África no necesita vuestra simpatía o la asistencia al desarrollo”. En vez de ello, necesita una verdadera posibilidad de comerciar con el resto del mundo, e incrementar las relaciones comerciales e inversoras dentro del continente africano.

Una década después, el mundo se ha tomado las palabras de Mahama al pie de la letra. Donald Trump ha adoptado el mantra “comercio, no ayuda”, a la que considera creadora de una “cultura de la dependencia” inútil y antiamericana. Así en febrero de 2025, Elon Musk - entonces en Washington- hizo desaparecer la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Un año después del desmantelamiento de USAID, los efectos en el África subsahariana han sido devastadores, produciendo más muertes y enfermedades.

Estados Unidos aportaba más de dos tercios de la ayuda bilateral para la sanidad pública en el África subsahariana.

Como señala Jeremy Nel, médico sudafricano experto en HIV, la ayuda norteamericana para la salud en África había convertido a EEUU en la “nación indispensable”, aportando fondos decisivos para países como Somalia,

Sudán del Sur, Malawi, Uganda, Liberia, Mozambique, Tanzania o Sierra Leona (The Economist, nov. 2025).

Estados Unidos era, asimismo, el principal donante para el Fondo Global para la lucha contra AIDS, Tuberculosis y Malaria, y para agencias de Naciones Unidas como UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y el Programa Mundial de Alimentos. Estas contribuciones han colapsado.

La retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en enero de este año ha causado un shock enorme. EEUU ha sido, no sólo uno de los miembros fundadores de la OMS, sino el que ha aportado más fondos, el 15% de su presupuesto.

Esta retirada a quien más afecta es precisamente a África, donde el gasto de la OMS se invierte en gran medida en la lucha contra las enfermedades contagiosas y el fortalecimiento de los frágiles sistemas de salud (Deutsche Welle).

A lo anterior se añade que la política tarifaria de Trump y su incertidumbre implícita ha golpeado a las economías africanas y su fuerte dependencia exportadora, poniendo en peligro la experimentada tras la Covid- 19.

No solo Estados Unidos ha cortado súbitamente sus ayudas a África. Otros programas han sido suprimidos. El Reino Unido ha acabado con el Departamento para el Desarrollo Internacional, diluyéndolo en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo más importante: ha anulado el compromiso de mantener la cooperación exterior en el 0,7% del PIB, reduciéndolo al 0,3%.

Tengamos en cuenta que los países occidentales- donantes a África- están en estos tiempos sumergidos en aumentar los gastos de defensa, que van a producir un encogimiento de los presupuestos.

Esto explica en parte que el Reino Unido haya cortado por la mitad los fondos destinados a la ayuda al desarrollo.

Otros países europeos, como Francia o Países Bajos han seguido el mismo camino. La propia Naciones Unidas está enfrentando un esfuerzo financiero notable.

Lo peor es que esta situación ha dado a algunos gobiernos africanos el pretexto perfecto para no proveer de recursos a las políticas de sanidad o educación.

El efecto es dramático. Un artículo del fondo Lancet afirma que, si los recortes de fondos norteamericanos no

se revirtieran, 14 millones de personas, una tercera parte niños y niñas, morirán en todo el mundo desde hoy a 2030.

Paul Collier, profesor de economía en la Universidad de Oxford, advierte que, ante todo, África necesita inversión y desarrollo sostenido, incluyendo más capital riesgo para empresas que creen empleo.

Stefan Dercon, antiguo economista jefe del hoy desaparecido Departamento para el Desarrollo Internacional, dijo que lo que la mayor parte de los países africanos necesitan es el tipo de crecimiento sostenido que sacó a miles de millones de personas fuera de la pobreza en Asia. Para ello es importante la movilización de capital privado, tema abordado en este Informe por Luis García Blanch.

Recordamos que la Unión Africana señaló como objetivo de la Agenda 2063 un crecimiento anual del PIB del 7% y duplicar el PIB de África para 2040. Objetivo difícil de alcanzar en medio de lo que Peter Fuster llama la “tormenta perfecta” que sufren los países más pobres golpeados por las ayudas internacionales empequeñecidas y las tarifas de Trump (F. Times, 30 June, 2025, p. 4), en un continente que es crónicamente dependiente de las cadenas de valor externas, aunque tiene inmensos recursos. A pesar de ser rica en minerales, petróleo y tierras agrícolas, África- señala Zicora Ibeh- captura solamente el dos por ciento del comercio global.

Nigeria y Angola, son ejemplo de ineficiencias a causa de la corrupción institucional (IPS, 04.07.2025).

A los problemas estructurales que lastran el desarrollo africano se añade el coste del servicio de la deuda, herencia neta de la época colonial, que en estos momentos ha alcanzado su mayor nivel desde los comienzos del siglo XXI. Hay una urgente necesidad, afirma Patricia Njoroge, de un alivio de la deuda, que va más allá del esquema país por país del G-20, tal como se reconoció en la reciente conferencia de Sevilla sobre el desarrollo. Evento que, sin embargo, en opinión de José Segura, Director General de Casa África, no ha sido capaz de plantear medidas audaces que pongan fin a una realidad palmaria: que más del 75% de los países de bajos y medianos ingresos del mundo dedican más al servicio de la deuda que a la sanidad.

Por primera vez en África la reunión del G.20 de jefes de Estado y de Gobierno (con la ausencia de Estados Unidos), fue celebrada en Johannesburgo el 22 y 23 de noviembre pasado. La cuestión de la deuda ocupó un lugar preferente. La presidencia de África del Sur dió una victoria diplomática a África y al Sur Global y envió a Trump un mensaje claro. Pretoria destacó la prioridad de los países en desarrollo en la declaración aprobada. Dentro de ella aparece la gran cuestión de la sostenibilidad de la deuda y la renovación del apoyo a la cooperación multilateral.

Es este un asunto al que le dedicamos varios capítulos del Informe África 2026. Jaume Portell lo aborda desde el punto de vista de los déficits comerciales estructurales en cuanto generadores de deuda externa, configurando un canal adicional de salida de divisas desde las economías africanas (100.000 millones de dólares, de los que alrededor del 50% se destinará a acreedores privados). Cantidad que se ve algo contrarrestada por iniciativas endógenas como las remesas de la diáspora africana (por ejemplo, la comunidad senegalesa que vive y trabaja en España).

En el Informe, Romeo Gbagoidi y Agossá Paul Ogboya miran la deuda como un instrumento de dominación en el Sahel y África Occidental (en particular, Malí, Níger y Burkina Faso).

En 2024 el continente acumulaba una deuda pública externa estimada en 1.86 billones de dólares, mientras que el servicio de la deuda absorbía en torno al 50% de los ingresos públicos. Lo que evidentemente, reduce la autonomía estratégica de los Estados.

También se estudia el problema de la deuda en el Informe, a cargo de Olga Namasembe. La cifra es escandalosa. Según el FMI, la deuda pública regional pasó de cerca del 30% del PIB en 2013 a casi el 60% en 2022, con riesgo muy elevado de sobreendeudamiento. Los pagos de intereses de la deuda externa alcanzarán en 2027 un 3,4 % del PIB regional. Con un impacto fuerte en la desigualdad.

Naturalmente, afrontar los retos económicos, sociales y tecnológicos de África requiere la fortaleza y la estabilidad de los regímenes políticos. Y esto es un desafío más en la enorme agenda política de los países africanos, que, junto a los países que formamos la Unión Europea,

representan el 40 % de los Estados miembros de Naciones Unidas. Y hay que reiterar que quienes viven en los países africanos “también tienen derecho a la democracia” y los derechos humanos.

Esto es compatible con la autonomía y la independencia del antiguo colonialismo o actual neocolonialismo de los países occidentales.

De hecho, la mayoría de los Estados africanos han realizado en el presente siglo un especial esfuerzo por diversificar sus alianzas (China; Rusia; Estados del Golfo; India;

Turquía; Brasil). Y, dentro del continente, surge la dinámica de relación interregional, en muchos ámbitos: La migración intraafricana - mayor que hacia el exterior de África-; la relación comercial a través de la African Continental Free Trade Area (AFCFTA);

el partenariado energético de los Estados norteafricanos con Europa, etc. Es posible que África se convierta en escenario de competición entre rivalidades (EEUU, China, UAE, Arabia Saudita, Turquía) respecto a intereses tan determinantes como el cambio climático, la deuda, la gobernanza tecnológica y la cooperación en seguridad.

Para progresar en esos ámbitos, África ha de moverse en una dirección más integradora en su interior y respecto al exterior, compatible con la evidente multiculturalidad continental. Siempre orientada hacia la evitación de un eclipse democrático, que ha podido temerse tras la sucesión de golpes de Estado que ha sufrido la zona del Sahel en los últimos años.

Europa, y España como parte de ella, han de trabajar en esa dirección, respetando la soberanía de las naciones africanas, pero siendo conscientes de que posee en África el mayor volumen de inversiones extranjeras, como observa Chistophe Chatelot (Le Monde Afrique) (Le Monde, 6 février 2026).

Al papel de la cooperación española y europea le dedicamos un capítulo del Informe, del que son autores, Pablo Martínez Uses y José Javier Sastre Aporisi.

La declaración final de la VIII cumbre UE- UA celebrada en Luanda los días 24 y 25 de noviembre refuerza el multilateralismo y la preocupación por el aumento de vulneraciones del Derecho Internacional.

España pretende llegar al 0,7% PIB en cooperación al desarrollo en 2030. La estrategia España-África 2025-2028 marca una etapa, porque se amplía a todo el continente más allá del África Subsahariana, y presta atención a la vecindad africana de España en África occidental y el Norte de África. La Unión Europea da un paso con la estrategia Global Gateway.

Sabemos que los cuatro países más seguidos por los análisis politológicos son Senegal, Nigeria, Sudáfrica y Kenia. Pero no puede prescindirse del conjunto de un continente muy joven que es el único que crece demográficamente en el planeta. Y que tiene una gran movilidad a través de migraciones interiores (las más) y hacia otros continentes.

Dentro de la fragilidad institucional característica de los Estados de África hay que observar con atención las elecciones realizadas en África Subsahariana en 2025 y en el comienzo de 2026. Gabón, Guinea, República Centroafricana, Costa de Marfil, que han seguido una línea autoritaria, lo mismo que Camerún y Guinea-Bissau.-. Quedan por observar otros procesos electorales en 2026: República del Congo; Djibouti; Gambia; Zambia; Somalia; Etiopía.

Como contraste a este panorama lleno de dificultades, demos presencia a la esperanza con las palabras de Ramaphosa en la intervención de cierre de la última cumbre del G-20: “La mayor oportunidad de prosperidad para el siglo XXI se halla en África”.

1

Gastar menos,
gastar mejor. *Ayuda,
deuda y desarrollo*
en el continente
africano.

por JAUME PORTELL

“Hay una compensación para el pobre para que tenga una casa y un hogar, pero eso no transforma la vida del pobre”, declaró Carlos Lopes en una entrevista en junio de 2025. Lopes, un economista de Guinea-Bissau con años de experiencia en Naciones Unidas, ejerció de negociador de la Unión Africana con la Unión Europea desde 2018 hasta 2023. Su objetivo era lograr unas nuevas relaciones bilaterales entre la Unión Europea y el continente africano, pero muchos de sus objetivos quedaron lejos de cumplirse. Lo contó en un libro que publicó el verano de 2024. Su libro (Lopes, 2024) introduce el concepto del autoengaño como elemento central en las relaciones entre Europa y África de las últimas décadas¹. Y no dudó en hablar de las raíces cristianas de Europa cuando describía la situación de la ayuda al desarrollo: para Lopes, esta se trata de la segunda pata de un discurso occidental que suele moverse de forma pendular entre el catastrofismo y la caridad.

Para Lopes la ayuda, más allá de sus resultados o su efectividad, era una máscara que servía para evitar discusiones mayores. Discusiones como las que él había intentado tener con sus homólogos europeos sobre la gestión migratoria, el cambio climático o la política económica. Una frase lapidaria resume como fueron las conversaciones con los europeos: “Cuando se habla de industrialización, es como si se hablara de la luna. Se dice que no hay condiciones, que no hay infraestructura. No se invierte en infraestructura... pero China sí que lo hace”. Siguiendo

la estela de algunos de los comentarios de Lopes, junto a los de otros pensadores, este artículo analizará los últimos movimientos de la ayuda al desarrollo, que en pocos meses ha pasado – brevemente- al primer plano de la actualidad por los anuncios llegados desde Washington; pero también buscará poner encima de la mesa algunos de los debates que se han dejado atrás mientras se hablaba de cooperación internacional².

1. UNA SERPIENTE DE VERANO DE MEDIO SIGLO

En el gremio periodístico, una “serpiente de verano” alude a temas que cobran protagonismo durante periodos de menor actividad informativa. El debate sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo constituye una ‘serpiente de verano’ de horizonte temporal muy extenso, que se remonta a los años posteriores a las independencias africanas.

“En Francia, durante los años setenta, ya se publicaron libros muy críticos con el sector de la cooperación, con títulos como “De l’aide a la recolonisation”, de Tibor Mende, publicado en 1972; o “Les colonies de vacances”, de François de Negroni, en 1977. En ambos casos se compartía un mensaje que despertó el interés de los lectores franceses: los cooperantes, lejos de fomentar el desarrollo en África, perpetuaban el estilo de vida de los colonos. En el peor de los casos, directamente eran una herramienta para favorecer la recolonización del continente.

En España, cuya trayectoria en cooperación es históricamente más breve, estos debates han sido más recientes. Un título en catalán, “Blanc bo busca negre pobre” (Nerín, 2011) (Blanco bueno busca a negro pobre), de Gustau Nerín, es uno de los ejemplos más destacados de la crítica a la cooperación. Publicado en 2011, en un contexto de recortes a la cooperación, la obra recibió fuertes críticas por considerar que atacaba al sector en su momento más vulnerable. Algunas de sus observaciones, sin embargo, siguen vigentes más de una década después: “En África todo el mundo sabe que las políticas de cooperación no funcionan o, como mínimo, que no sirven para lo que se supone que deberían servir. Pero este secreto de dominio público no llega a Occidente, donde la acción humanitaria se presenta como la solución a todos los problemas africanos (...) los periodistas, en la televisión y en la radio, presentan a los cooperantes como eficientes emisarios de un Norte solidario que cada día salva a los negros. La población del Norte traga. En realidad, la mayoría de los ciudadanos no sabe nada de lo que pasa en África, y no lo sabe, básicamente, porque no le importa demasiado”.

Poco antes, el mundo anglosajón vio como se hizo popular, en 2009, el libro “Dead Aid” (Moyo, 2009) escrito por la economista zambiana Dambisa Moyo. En él, Moyo hablaba del inmenso despilfarro de la cooperación en África, a la que acusaba de haber contribuido a alimentar una cultura de la corrupción entre los gobernantes. Desprovistos de la

necesidad de gestionar bien sus países, estos se habían lanzado hacia los fondos que los países del Norte les cedían para solidarizarse con las necesidades de los pobres. Para documentar su tesis, Moyo citaba el caso del Zaire de Mobutu, que había seguido recibiendo fondos aun cuando algunos de los prestamistas sabían que no había diferencias entre la cuenta del banco central de Zaire y la cuenta personal de Mobutu. Tanto Moyo como Nerín coincidían en señalar que la cooperación se había convertido en una especie de producto de consumo para los ciudadanos de los países del Norte.

William Easterly, un economista estadounidense, también publicó un libro crítico en 2006, cuyo título se inspiraba en el poema más célebre del escritor inglés Rudyard Kipling: “The White Man’s Burden” (Easterly, 2006) (La carga del hombre blanco). Easterly, en su obra, contrastaba la diferencia entre las buenas intenciones y los pocos – o malos – resultados de la cooperación internacional. Se trata de un debate que, aunque recurrente en los países donantes, rara vez ha logrado traducirse en cambios profundos en las políticas de cooperación. Los defensores del sistema han reprochado a estas críticas que allanan el camino para recortes presupuestarios, al tiempo que señalan que las voces más lúcidas suelen surgir, precisamente, de entre quienes han trabajado dentro del mismo sector de la cooperación.

Estas discusiones han existido en la academia y en los medios de comunicación, pero pocas veces han marcado la

agenda política de una forma significativa. Hasta que un acontecimiento político de gran envergadura devolvió el tema a la primera línea: la decisión de la administración estadounidense de cancelar gran parte de los programas de USAID en 2025. Antes de analizar ese punto de inflexión, resulta necesario examinar la trayectoria específica de la cooperación española en África.

2. LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN ÁFRICA

Desde 2009, cuando la inversión de la cooperación española en África tocó techo (1.360 millones de dólares), las sumas dedicadas al continente han ido a la baja (Gráfico 1). Tocaron fondo en 2015 y después se recuperaron levemente para situarse alrededor de los 160 millones de

dólares. Se trata de una cifra que representa poco más de una décima parte de lo que se dedicó a la cooperación hace 17 años. Dependiendo del color político que haya en el gobierno –y del contexto económico del país–, la cooperación en España oscila entre ser un gasto amenazado por los recortes, en momentos de crisis, o una muestra del rol creciente de España en el orden multilateral global, en momentos de bonanza. Más allá del número, raramente se plantea un enfoque más cualitativo: ¿a qué se dedica la cooperación?

Antes de entrar en materia, hay que preguntarse qué se considera cooperación. Las cinco categorías a considerar suelen ser las siguientes:

- Donaciones (o grants) a fondo perdido. Se diferencian de los préstamos que deben devolverse al cabo de unos años, muchas veces con intereses.

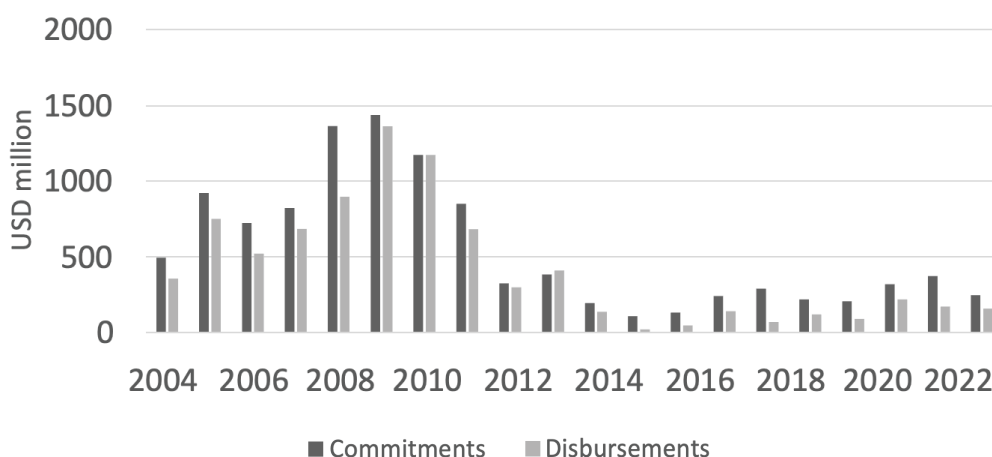


Gráfico 1: España AOD. Dinero anunciado vs dinero gastado en África (2004-2023).

Fuente: OCDE.

En este caso, se trata de la donación directa de dinero sin necesidad de ser devuelta.

- Cooperación técnica: incluye la formación de cuadros africanos en las universidades o centros educativos del país donante. Incluye también los pagos a técnicos o especialistas del país donante en el país que recibe la ayuda.
- Ayuda alimentaria.
- Ayuda humanitaria.
- Cancelación de la deuda.

Según los datos de la OCDE, los años de mayor desembolso de dinero de cooperación en África fueron entre 2005 y

2011, coincidiendo con los años de crecimiento económico de mediados de los 2000. En total fueron más de 6.000 millones de dólares, de los cuales se destinó al norte de África el 29% y el 71% restante al resto de África. De esta cifra, el 36% se gastó en solo dos partidas: cooperación técnica (19%) y alivio de la deuda (17%). En esta última partida se pueden encontrar dos ejemplos diáfanos. La República Democrática del Congo y la Costa de Marfil son dos países que han estado lejos de ser grandes focos de la cooperación española, si se examinan los datos publicados por la OCDE (Gráfico 2). En la mayoría de años, entre 2004 y 2023, apenas llegan a superar los 40 millones de dólares anuales entre los dos países.

Solo hay tres años en los que, de forma excepcional, se dispara la Ayuda Oficial al Desarrollo hacia estos dos paí-

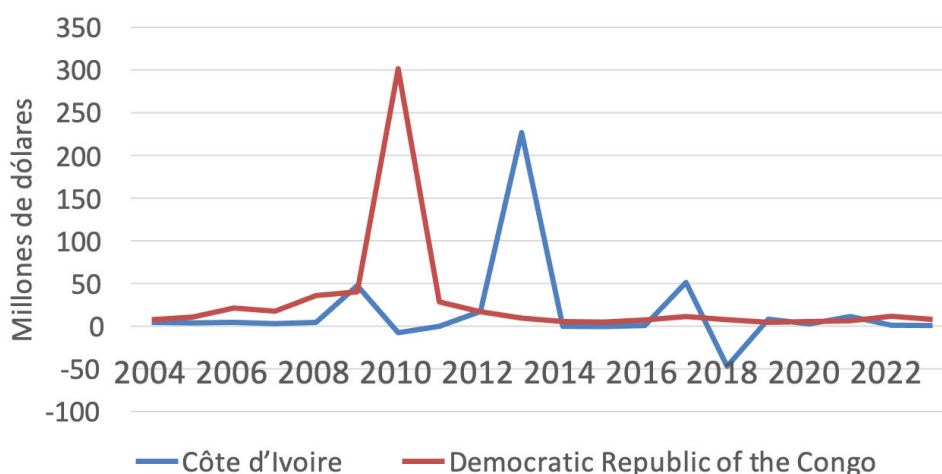


Gráfico 2: Ayuda Oficial al Desarrollo de España hacia la Costa de Marfil y la RD del Congo (2004-2023).

Fuente: OCDE.

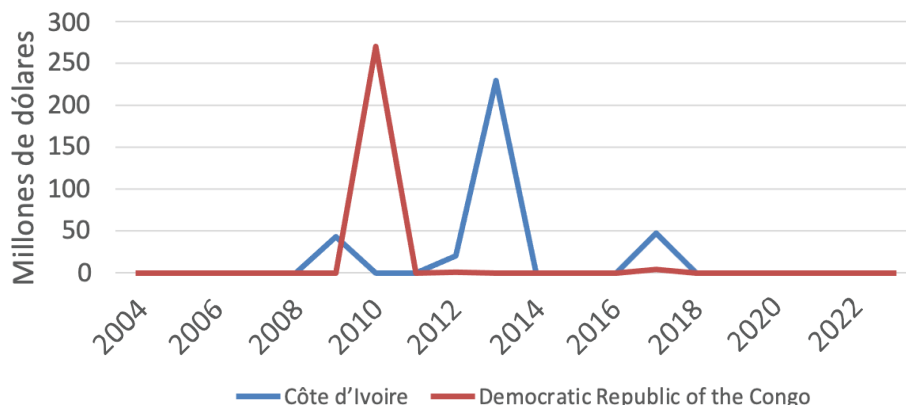


Gráfico 3: Cancelación de la deuda marfileña y congoleña. España. (2004-2023).

Fuente: OCDE.

ses: 2010, 2013 y 2017. En esos casos, las cifras se disparan hasta rondar los 300 millones, 230 millones y 51 millones respectivamente. Cabe preguntarse si es que, de forma excepcional –y solamente durante un año– la cooperación detectó un problema especialmente acuciante en el Congo o una crisis urgente por resolver en la Costa de Marfil. Y, en caso de ser así, como puede ser que toda esa ayuda desapareciera tan rápidamente como llegó. La respuesta está en el siguiente gráfico de cancelación de la deuda de esos países con España (Gráfico 3).

Pese a que la cancelación de la deuda es una buena noticia económica para ambos países –al dejar de tenerla, ahorrar millones de dólares en principal y en intereses–, cabe preguntarse hasta qué punto esta deuda no es el resultado de políticas que han beneficiado previamente al país donante. Desde hace años, la propia OCDE señala la política de

tied-aid –ayuda ligada– que practican los países donantes. España, en lo que respecta a la ayuda ‘no ligada’ (untied aid), es de los países que mejores parámetros presentaba en 2020, con un porcentaje del 89%. Lo que significa que todavía hay un 11% de contratos de ayuda ligada. En el mejor de los casos, las donaciones se gastan en productos, servicios o maquinaria del país donante. De esta forma, cabría discutir hasta qué punto esta ‘ayuda al desarrollo’ no es realmente un subsidio a las exportaciones de ese mismo país donante. En el peor de los casos, estas inyecciones no son donaciones, sino préstamos: el país que recibe la ayuda paga la compra del producto y se queda con la deuda. La empresa del país donante gana un nuevo mercado –aunque sea temporalmente, durante la construcción de una gran obra. Si el país es insolvente, años después la deuda podrá cancelarse –a cambio, habitualmente,

de nuevas concesiones: la privatización de una empresa pública, la apertura de ciertos mercados o exenciones de impuestos a nuevos inversores –incluidos los del país que ha perdonado la deuda. Se trata de un funcionamiento que, en casos como los de Zambia –que privatizó sus grandes minas de cobre justo antes de un periodo de precios altos de esta materia prima a cambio de recibir el alivio de la deuda– provoca pérdidas millonarias y es el punto de partida de nuevos ciclos de endeudamiento, inducidos en buena parte por las fugas de capital (Fischer, 2020). La deuda reaparece, precisamente, por el hecho de no haber logrado un cambio estructural en el país africano al que se lleva años ayudando. Aunque no sea responsabilidad del país donante lograr un cambio estructural en el país africano en cuestión –que tiene sus propias instituciones y políticos que deben garantizar esta cuestión–, es necesario preguntarse si el sistema de ayuda ha contribuido a perpetuar estos sistemas disfuncionales –y beneficiar, en el proceso, a los países donantes.

La relación entre los flujos de ayuda al desarrollo y el servicio de la deuda externa adquiere una relevancia crítica para los países receptores. En sus balances macroeconómicos, la disparidad entre los ingresos y egresos en divisas, particularmente en dólares, ejerce una presión directa sobre el tipo de cambio de la moneda local. Este desbalance estructural se ilustra en el caso de las relaciones financieras entre España y África durante el periodo 2014-2024. Mientras

que los desembolsos de ayuda oficial española hacia el continente mostraban una tendencia a la baja, estabilizándose en un promedio anual aproximado de 110 millones de dólares, las transferencias por concepto de servicio de deuda hacia entidades crediticias e instituciones españolas registraron un incremento sostenido. De hecho, en el mismo decenio, los flujos financieros netos dirigidos desde África hacia España –principalmente en forma de amortización e intereses de la deuda– alcanzaron los 566 millones de dólares. (Banco Mundial). En consecuencia, durante la última década, por cada dólar desembolsado por España en concepto de ayuda al desarrollo hacia África, se produjo un flujo inverso de cinco dólares en pagos de deuda desde el continente africano hacia España. Las proyecciones hasta 2032, según datos de la misma institución citada, indican que España y sus entidades financieras recibirán un promedio anual de 346 millones de dólares en concepto de servicio de deuda. A menos que los flujos de ayuda española aumenten considerablemente, la balanza de capitales entre África y España mantendrá un saldo neto negativo para el continente africano en el futuro previsible. Estas salidas sostenidas de divisas, un fenómeno común a medio plazo en la mayoría de las economías africanas, contribuyen a la depreciación de las monedas locales. Dicha depreciación cambiaria tiene repercusiones adversas para la población, ya que, a medio plazo, eleva el costo de los bienes importados esenciales, como maquinaria, alimentos

y fertilizantes. Este incremento en los precios afecta tanto a la producción alimentaria local, que depende de insumos importados, como al costo directo de los alimentos importados.

Frecuentemente, tras la manifestación de estas consecuencias —como el aumento en el precio de los alimentos o el agravamiento de la malnutrición— se implementan campañas de ayuda alimentaria o programas de “empoderamiento” patrocinados por países del Norte. No obstante, estas intervenciones a menudo no abordan suficientemente los factores estructurales, como los desequilibrios financieros descritos, que originaron dicha situación de vulnerabilidad.

3. EL TERREMOTO DE USAID

El pasado 1 de julio, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, publicó un comunicado que marcaba la agenda definitiva de Estados Unidos en lo que respecta a la cooperación internacional (Departamento de Estado de los EE UU, 2025). Tras varias suspensiones, durante el invierno, de programas en marcha para evaluar su utilidad, Rubio publicó las conclusiones definitivas en verano: el dinero se había malgastado y Estados Unidos haría marcha atrás de manera definitiva. En su nota, Rubio dejaba muy claras cuales debían ser las prioridades de la cooperación internacional, un gasto de décadas cifrado en “más de 700 000 millones de dólares” que se habían utilizado “más como caridad que como

un instrumento para favorecer la política exterior de los Estados Unidos”.

En lo que respecta a África, recriminaba que la región había recibido 165.000 millones de dólares desde 1991 y que los países del continente solo hubieran votado a favor de las resoluciones de Estados Unidos en la ONU en el 29% de los casos. La noticia fue un terremoto para todo el sector de la cooperación internacional. En cuestión de días empezaron a publicarse estudios y noticias sobre las consecuencias: the Lancet estimó que los programas sanitarios patrocinados por USAID habían contribuido a salvar a 91 millones de personas en los últimos veinte años (Cavalcanti et al, 2025). Si estos programas eran interrumpidos de forma definitiva, 14 millones de personas podrían morir de aquí a 2030, incluidos 4.5 millones de niños. Es improbable que Washington revierta su postura, dado que la reducción de fondos destinados a USAID y la eliminación de programas considerados afines ideológicamente al Partido Demócrata cuentan con un respaldo significativo en su base electoral. Además, en el actual orden multilateral, ningún actor parece poseer la capacidad de influencia necesaria para modificar sustancialmente esta posición.

La sustitución de los fondos de USAID y de la cooperación estadounidense, a nivel global, es un reto de dimensiones considerables. En 2024, la ayuda oficial al desarrollo de los países del DAC (24 países ricos que incluyen a la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Australia y Estados Unidos) fue de

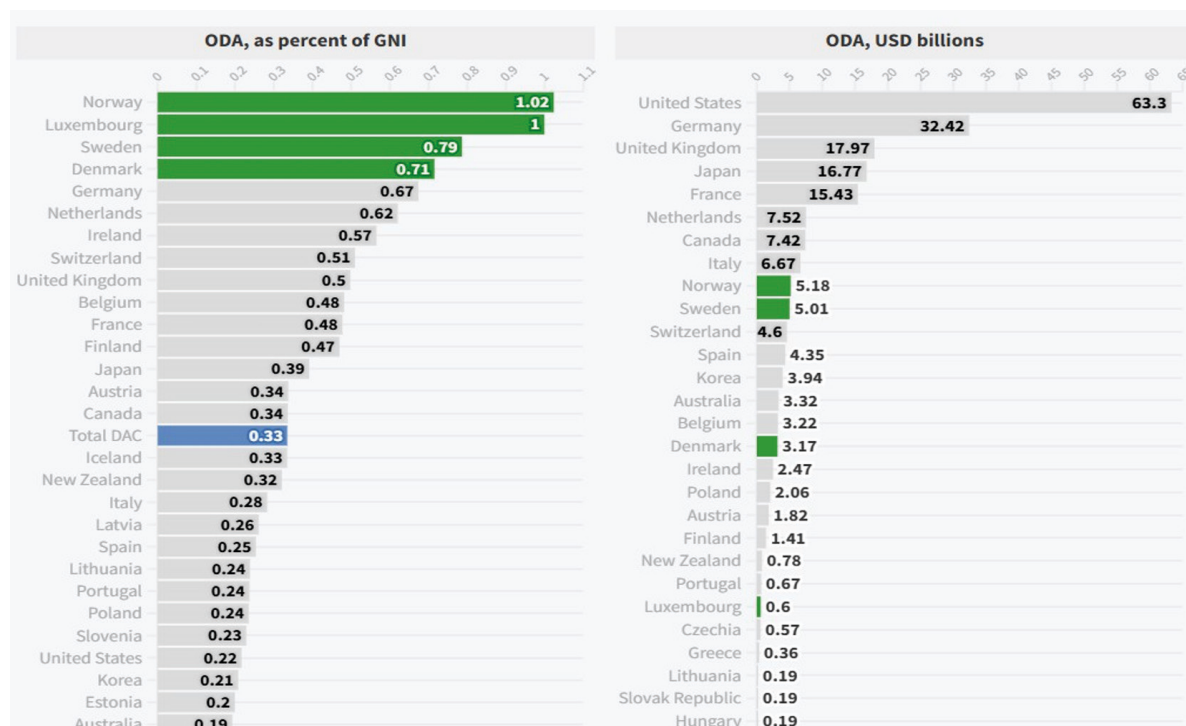


Gráfico 4: Official Development Assistant (ODA) in 2024, by members of the Development Assistance Committee (preliminary data).

Fuente: OCDE.

212.000 millones de dólares (OCDE). Estados Unidos superó por mucho (Gráfico 4) al resto de países (63.000 millones de dólares), aportando 3 de cada 10 dólares de ayuda. Alemania (32.000 millones), Reino Unido (18.000 millones), Japón (16.770 millones) y Francia (15.430 millones) quedan lejos. Ya muy por debajo quedan Países Bajos (7.520 millones), Canadá (7.420 millones) e Italia (6.670 millones). España aportó 4.350 millones de dólares. En un caso hipotético donde Estados Unidos llegara a cero, Alemania debería doblar su presupuesto, el Reino Unido multiplicarlo por 3.5 o Países Bajos multiplicarlo por 8.4. Otra

salida, más concertada, sería repartirse el agujero entre todos los países: de esa manera, un aumento ponderado de cada socio permitiría mantener los proyectos en marcha y salvar millones de vidas.

La gran pregunta es si hay el espacio político suficiente para lograr apoyo para estas medidas en momentos de austeridad fiscal y un incremento en popularidad de las ideas de extrema derecha. También hay que tener en cuenta que un aumento de la ayuda no tiene por qué impactar al continente africano o a los países ayudados, tal y como ha sucedido en el pasado: el aumento en la cantidad de ayuda de muchos países europeos en

2023, por ejemplo, se debió a las políticas de acogida de refugiados procedentes de Ucrania y otros países. En otras palabras: cuando se piensa en la ayuda, se tiende a creer que se está ayudando a los países de origen a progresar económicamente o resolver problemas, pero en este caso realmente se estaban haciendo políticas de acogida que implicaban un gasto público que se acababa quedando en los propios países que daban la ayuda. En 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, los costes de acoger refugiados imputados como ayuda al desarrollo fueron de 33.240 millones de dólares –más que toda la ayuda destinada al África subsahariana, que fue de 30.270 millones de dólares, y está estancada desde 2006. De esta cifra, casi la mitad del dinero (unos 14 000 millones de dólares) procedió de Estados Unidos.

Para algunos países africanos, la cancelación de USAID es una cuestión vital: en Somalia y Sudán del Sur, el 9% de la economía eran esos fondos. De los diez países más afectados por esos recortes, cinco son africanos. Programas sanitarios dedicados al combate contra la SIDA o a la distribución de vacunas están en juego. Son momentos en los que incluso los críticos con la ayuda internacional reconocen su importancia, pero cabe recordar en este sentido las palabras de Binyavanga Wainaina, cuando en una entrevista en la revista de viajes *Altaïr* dijo que los países africanos no pueden actuar en base a emergencias. Aunque un saco de comida sea necesario para paliar una hambruna, la única solución

a largo plazo es tener un sistema agrícola funcional. Cuando a Wainaina le recordaban que sin esas políticas de emergencias morirían niños, el escritor keniano respondía agriamente: hacía sesenta años que esos niños morían en su país, motivo por el cual había que buscar, precisamente, soluciones estructurales.

4. CAMBIOS ESTRUCTURALES: DIÁSPORA, DEUDA, FINANCIACIÓN

En 2014 el economista senegalés Ndong Samba Sylla escribió un libro sobre el comercio justo. Las etiquetas Fair Trade se han convertido, durante las últimas décadas, en uno de los paradigmas de la lucha contra la pobreza en los países del Sur global. Su tesis es bien sencilla: si aumentarían los ingresos de los productores de cacao, café o té, estos podrían vivir mejor. Lo único que hace falta es que haya consumidores dispuestos a pagar un poco más en el supermercado para poder garantizar este desenlace. Es una idea sencilla y bondadosa que Ndong Samba Sylla, después de haber trabajado en una organización vinculada al movimiento Fairtrade, se encarga de desmontar en “The Fair Trade Scandal”. Según la tesis de Samba Sylla, el Fair Trade excluye a los que más lo necesitan y en algunas ocasiones beneficia a los elementos más ricos de la cadena. En un momento del libro, el autor cita una contradicción irresoluble. Cuando algunos de los productores asociados a las iniciativas de etiquetado de comercio

justo recibían precios más altos en otra parte, preferían vender sus productos fuera. Al no venderlos dentro del círculo ‘comercio justo’, los organismos de Fair Trade se quedaban sin algunas fuentes de suministro –y no podían certificar sus productos como Fair Trade en el Norte:

“Nos hallamos en un contexto peculiar donde el alza de los precios de las materias primas no favorecía a las iniciativas de etiquetado. Si bien esta situación debería beneficiar a los productores, tiende a reducir las fuentes de financiación de las organizaciones de Comercio Justo. Sin duda es dentro de esta perspectiva donde debemos analizar el apoyo de las iniciativas de etiquetado al proyecto del G20 que pretende ‘regular’ el precio de las materias primas. De hecho, si los precios de las materias primas siguen aumentando, el Comercio Justo podría tener los días contados (...) Por el contrario, si disminuyeran, como ha ocurrido en el pasado, el mensaje del Comercio Justo mantendría su vigencia y sería difícil de ignorar (...) los intereses de los pequeños productores y los del Comercio Justo no siempre coinciden: los primeros desean obtener buenos precios por sus productos, mientras que lo ideal para los segundos sería contar con precios medios y estables. Huelga decir que se trata de una forma muy peculiar de luchar contra la pobreza.”

El ejemplo de este libro es esencial para culminar este artículo. Al seguir atrapados por ciertos conceptos o ideas –como la del comercio justo–, en Occidente se pierden de vista las oportunida-

des disponibles y existentes para la gente a la que supuestamente se quiere ayudar. Se corre, de esta manera, el peligro de caer en la historia única que tanto criticó Chimamanda Ngozi Adichie (Adichie, 2016). Pese a que la ayuda concentre –en algunos casos, merecidamente– un espacio en el debate sobre el futuro de África, raramente se menciona que la ayuda pesa menos que los pagos de deuda externa del continente. O que la ayuda pesa menos que la fuga anual de capitales del continente. O que, en muchos países, las remesas que envía la diáspora ya superan a toda la ayuda internacional. Al enfocarse en cómo ayudar más, se olvida que el entorno de los países con los que se quiere cooperar, en algunos aspectos, ya está cambiando.

En el marco de las relaciones comerciales entre los países africanos y el resto del mundo, persisten dinámicas estructurales heredadas del periodo colonial. Las economías africanas se especializan predominantemente en la exportación de materias primas sin procesar, lo que las sitúa en una competencia intrasecamente desventajosa y en una posición de deterioro secular de los términos de intercambio. En un ejemplo hipotético ilustrativo, la venta de productos primarios por un valor de 1 dólar y la importación de manufacturas por 3 dólares genera un déficit crónico de 2 dólares, el cual debe ser cubierto mediante financiamiento externo. Este endeudamiento acumulado no solo comporta una transferencia de recursos al exterior, sino que también restringe la soberanía política de los Es-



Gráfico 5: Aluminum global price vs China's payments to Guinea for its bauxite (2015-2025).

Fuente: FMI y GACC (la aduana china).

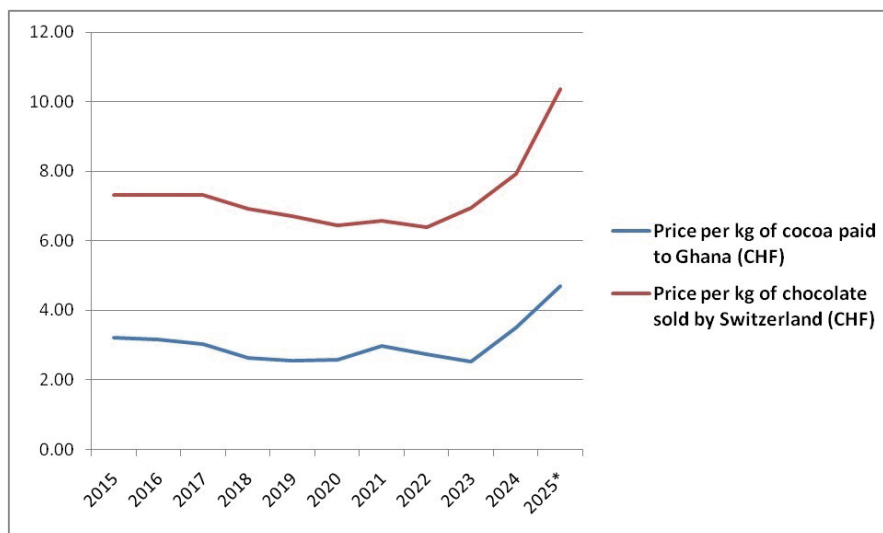


Gráfico 6: Comparativa de precio por kilogramo pagado a Ghana y precio por kilogramo vendido por Suiza (2015-2025).

Fuente: Comtrade y la aduana suiza (SwissImpex).

tados y compromete la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Históricamente, las reformas impulsadas desde organismos internacionales han insistido en una mayor apertura comercial y en el abandono de políticas industriales activas. El resultado observable es la parálisis del sector manufacturero en la mayoría de las economías africanas y la consolidación —e incluso intensificación— de una monodependencia exportadora de recursos primarios. El resultado se puede ver en patrones comerciales como el de Guinea Conakry con China (Gráfico 5) (General Administration of Customs of the People's Republic of China) o el de Ghana con Suiza (Gráfico 6) (Comtrade).

En ambos casos analizados se observa un patrón estructural parecido. La materia prima presenta un valor significativamente inferior al del producto procesado, diferencia que se explica por los costes adicionales inherentes al proceso de transformación: consumo energético, integración de tecnología y aplicación de mano de obra cualificada. Esta fase de procesamiento, al generar actividades de valor agregado, es crucial para la creación de empleo, la generación de rentas y el dinamismo del consumo interno, activando así efectos multiplicadores en la economía local. Por el contrario, la mera extracción y exportación de recursos primarios genera escasos encadenamientos productivos y una limitada transferencia de beneficios a la economía doméstica, situación que se agrava en contextos de precios bajos y volátiles.

En el caso concreto de la bauxita y el aluminio, en la relación comercial entre Guinea y China, se muestra una marcada desconexión en la evolución de los precios. Mientras el aluminio refinado puede superar los 3.500 dólares por tonelada, el precio de la bauxita se mantiene relativamente inalterado, fluctuando típicamente entre los 50 y 90 dólares por tonelada, lo que refleja la captura del valor en la fase transformadora. Por su parte, en la relación entre Ghana y Suiza respecto al cacao y el chocolate, la dinámica de precios presenta una mayor sincronía, ajustándose el precio final del chocolate a las variaciones en el coste de la materia prima. No obstante, esta correlación no impide que los márgenes de beneficio más sustanciales se sigan reteniendo en la fase de manufactura, distribución y comercialización en el país importador, consolidando así una asimetría en la distribución de los beneficios a lo largo de la cadena global de valor.

En ambos casos, la distancia entre los países africanos y sus socios muestra el abismo que separa las economías de la pareja comercial. ¿Cuántos empleos se generarían en Guinea y Ghana si ese aluminio o ese chocolate se produjeran en su territorio?, ¿qué problemas generaría para los productores chinos y suizos no poder contar con la bauxita y el cacao de sus socios africanos? Son preguntas que raramente se hacen cuando se habla de cooperación al desarrollo. Incluso la conversación sobre el comercio justo no tiene en cuenta las relaciones de poder existentes: ¿sería más justo si Guinea, en

lugar de cobrar 90 dólares por kilo de bauxita cobrara 130? No señalar la distancia entre los países productores de materias primas y sus socios industrializados es, de facto, ignorar las raíces de la pobreza –de la que surgen todos los males que luego se intentan paliar con algunos proyectos de desarrollo.

Los déficits comerciales estructurales constituyen un mecanismo generador de deuda externa, configurando así un canal adicional de salida de divisas desde las economías africanas. De acuerdo con las proyecciones del Banco Mundial, se estima que entre 2024 y 2028 el servicio anual promedio de esta deuda ascenderá aproximadamente a 100 000 millones de dólares, de los cuales alrededor del 50% se destinará a acreedores privados. De esta manera se consolidará una transferencia neta de recursos hacia el exterior durante los próximos años. Frente a este panorama emergen iniciativas endógenas orientadas a contrarrestar estos flujos negativos. Un caso relevante es el de la diáspora senegalesa, cuyas remesas alcanzaron los 3750 millones de dólares en 2024, el equivalente al 10% del PIB nacional. De esta cifra, 550 millones proceden específicamente de la comunidad residente en España. No obstante, estos flujos se ven mermados por los costos de transacción más altos del mundo, un obstáculo particularmente crítico en un contexto de crisis de deuda. Un proyecto de desarrollo efectivo podría alinearse con los esfuerzos de las diásporas para reducir dichos costos. Esta medida tendría un impacto transformador, redirigien-

do millones de dólares desde los intermediarios financieros hacia los hogares receptores, un modelo potencialmente replicable en todos los países africanos receptores de remesas.

Paralelamente, se está evaluando una segunda línea de acción, como lo demuestra la exploración por parte del gobierno senegalés de la emisión de bonos de la diáspora con tasas de interés más bajas que las del mercado privado. En este ámbito, España podría desempeñar un papel de colaboración, a través de su sector financiero, para facilitar el acceso de la diáspora senegalesa y de otras nacionalidades a dichos instrumentos de inversión. El consiguiente ahorro en el pago de intereses permitiría a Senegal reorientar recursos hacia proyectos agrícolas, generando encadenamientos productivos internos y reduciendo la factura de importaciones de alimentos—una vulnerabilidad estructural en muchas economías de África occidental. A un horizonte de dos décadas, iniciativas de este tipo podrían contribuir a reducir la propensión al endeudamiento externo, incrementar la soberanía alimentaria y sentar las bases de una economía más resiliente y orientada a la satisfacción de las necesidades de la población. Este planteamiento invita a una reflexión final sobre la eficacia de la cooperación al desarrollo: la cuestión central no radica necesariamente en incrementar el volumen de la ayuda, sino en optimizar su impacto mediante la potenciación de los flujos y mecanismos financieros ya movilizados por los propios actores africanos.

1. “La caridad es el opio de los privilegiados”, “Hormigueros de la sabana” de Chinua Achebe, escritor nigeriano
2. Cada dólar que gastamos, cada programa que financiamos y cada política que aplicamos deben justificarse con la respuesta a tres sencillas preguntas ¿Hace a Estados Unidos más seguro? ¿Hace a Estados Unidos más fuerte? ¿Hace a Estados Unidos más próspero?” Marco Rubio, Secretario de Estado de EE.UU., en su audiencia de confirmación en el Senado el 15 de enero de 2025.

Bibliografía

Banco Mundial. (s.f.). *Data Bank. World Bank. International Debt Statistics*. Recuperado el 21 de 9 de 2025, de <https://databank.worldbank.org/source/international-debt-statistics>

Cavalcanti et al. (2025). Evaluating the impact of two decades of USAID interventions and projecting the effects of defunding on mortality up to 2030: a retrospective impact evaluation and forecasting analysis. *The Lancet*, 12.

Comtrade. (s.f.). *UN Comtrade Database*. Recuperado el 17 de 10 de 2025, de <https://comtradeplus.un.org/>

Departamento de Estado de los EE UU. (1 de 7 de 2025). *statedept.substack.com*. Recuperado el 19 de 10 de 2025, de Making foreign aid great again: <https://statedept.substack.com/p/making-foreign-aid-great-again>

Easterly, W. (2006). *The white man's burden: why the West's efforts to aid the rest have done so much ill and so little good*. Penguin Paperbacks.

Fischer, A. M. (24 de 11 de 2020). *developingeconomics.org*. Recuperado el 01 de 10 de 2025, de <https://developingeconomics.org/2020/11/24/haemorrhaging-zambia-prequel-to-the-current-debt-crisis/>

General Administration of Customs of the People's Republic of China. (s.f.). GACC. Recuperado el 13 de 11 de 2025, de <http://english.customs.gov.cn/>

Lopes, C. (2024). *The self-deception trap. Exploring the economic dimensions of charity dependency within Africa-Europe relations*. Palgrave Macmillan Cham.

Moyo, D. (2009). *Dead aid: why aid is not working and why there is a better way for Africa*. New York: Farrar, Strauss and Giroux.

Nerín, G. (2011). *Blanc bo busca negre pobre*. Barcelona: Edicions la Campana.

OCDE. (s.f.). OECD. Recuperado el 4 de 11 de 2025, de Official Development Assistance: <https://www.oecd.org/en/topics/official-development-assistance-oda.html>

Sylla, N. S. (2014). *The Fair Trade Scandal*. Londres: Pluto Press.

2

El *nexo seguridad y desarrollo* en el paradigma actual: el caso del Sahel.

por ANDREA CHAMORRO

1. INTRODUCCIÓN

En 2025 Estados Unidos ha anunciado la retirada de USAID y con ella la retirada de la mayor parte de los fondos de ayuda a nivel mundial. Este repliegue ocurre en un contexto de transformación internacional en el que la multipolaridad obliga a repensar conceptos clave como el desarrollo, la seguridad y el vínculo que los une.

El concepto de desarrollo no comenzó a estudiarse hasta después de la Segunda Guerra Mundial y la posterior competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética por la hegemonía mundial. Estados Unidos impulsó programas de modernización y ayuda como una manera de limitar la influencia del bloque soviético, mientras que por su parte la URSS promovió modelos de desarrollo alternativos basados en la planificación centralizada y la solidaridad socialista. En unos primeros momentos, este concepto se aplicaba a principios mayoritariamente económicos donde se buscaba que los países tuvieran la mayor eficiencia posible. No obstante, con el paso del tiempo se hizo notable que sólo atender a los indicadores macroeconómicos era insuficiente para un desarrollo pleno.

Al mismo tiempo, en sus primeros momentos, el concepto de seguridad se limitaba a ámbitos estatales como la defensa nacional, la seguridad fronteriza, conflictos entre Estados, amenazas externas etc.

Los cambios en la conceptualización y las políticas relativas al desarrollo cambiaron como consecuencia en parte del

fin de la Guerra Fría. Durante la década de 1990 los conceptos de seguridad y desarrollo se ampliaron y consolidaron gracias a los debates impulsados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su Informe sobre Desarrollo Humano de 1994. El documento tuvo importantes consecuencias en la conceptualización de la seguridad.

La seguridad pasó a incluir ámbitos como el medioambiente, la seguridad humana, seguridad económica etc. Por su parte, el desarrollo dejó de leerse en términos meramente económicos, y comenzaron a tenerse en cuenta factores como la capacidad de elección de los individuos o el desarrollo social. Fue ante estos cambios cuando se empezó a poner encima de la mesa el nexo entre seguridad y desarrollo, en el que la inseguridad obstaculiza el desarrollo, y al mismo tiempo su ausencia genera conflictos.

La lógica del nexo seguridad-desarrollo se articula de manera que ambos factores se influyen y retroalimentan. Cuando un país carece de desarrollo y presenta factores como instituciones débiles, pobreza, exclusión social o mala gobernanza, ello puede desembocar en conflictos e inestabilidad. Esto hace que se cree una suerte de círculo vicioso que es complicado de romper, pero el nexo entre seguridad y desarrollo tiene un papel fundamental en el ámbito de la cooperación al desarrollo, y en escenarios en los que es necesaria la estabilización y la reconstrucción. Este enfoque se ha incluido en las políticas exteriores de actores internacionales como la Unión

Europea, en el caso del Global Strategy de 2016.

Durante la década de los 90 se empezó a aplicar en los contextos de reconstrucción postconflicto que se dieron durante el periodo de la Guerra Fría. Algunos de los ejemplos más llamativos fueron Afganistán e Irak, en los que la comunidad internacional intentó aplicar este concepto, pero el desarrollo quedó relegado por contexto el bélico, mientras que en el continente africano destaca el caso de Somalia o República Democrática del Congo.

La retirada de USAID plantea numerosas incógnitas sobre el futuro de la ayuda al desarrollo. La mayor parte de ellas pivotan sobre qué actor internacional estaría dispuesto a ocupar ese vacío, donde se observa atentamente la futura actuación de grandes potencias como China, o medianas como es el caso de la Unión Europea. Al mismo tiempo, hay importantes reclamaciones desde el Sur Global que llaman a una reconfiguración de las dinámicas del desarrollo.

2. CRÍTICAS

No obstante, el concepto de desarrollo no está exento de carga política. Tras la Segunda Guerra Mundial comenzaron los procesos de descolonización, en especial en el continente africano. El problema residía en que los nuevos Estados heredaron países que tenían su infraestructura centrada en la explotación de recursos naturales que posteriormente

eran exportados al exterior. Los países africanos siguieron dependiendo de las materias primas y posteriormente en los años 80 se pidieron préstamos para financiar el desarrollo de la industria, lo que desembocó en una crisis de deuda. En este contexto, el bloque occidental vio una gran oportunidad para conservar y aumentar su poder y presencia en el Sur Global, mediante la ayuda al desarrollo. La ayuda al desarrollo proveniente de occidente ha ido acompañada en numerosas ocasiones de condicionantes políticos, económicos o ideológicos. A su vez, instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional han vinculado la concesión de sus ayudas a programas de reforma estructural que en muchas ocasiones suponían una liberalización de la economía y la retirada de las ayudas. Al mismo tiempo su retirada se ha utilizado como un arma de poder duro cuando los países receptores se alejaban de los intereses de los países donantes.

En este ámbito, una de las mayores críticas de los países del Sur Global es la falta de participación de las comunidades a las que van destinados los proyectos. La principal consecuencia es la falta de adaptación de estos a las necesidades reales. Desde los enfoques poscoloniales, este funcionamiento se denuncia como una práctica paternalista debido a que reproduce dinámicas de poder, dependencia y subordinación del colonialismo, en la que se asume, de manera más o menos consciente, que los países del norte global son mejores conocedores

de las necesidades de la población que las propias comunidades. Para neutralizarlo se ha buscado llegar a una cooperación horizontal, pero todavía necesitará un amplio desarrollo.

Desde enfoques poscoloniales se han criticado las dinámicas políticas de la cooperación internacional y en especial la ayuda al desarrollo. Estas perspectivas sostienen que, lejos de ser un mecanismo neutral o puramente altruista, la ayuda reproduce estructuras de poder heredadas del colonialismo y limita la capacidad de actuación de los países. Al existir condicionantes económicos, políticos y sociales a la concesión de la ayuda, los países donantes refuerzan una relación de dependencia que perpetúa las jerarquías existentes en el sistema internacional. A su vez, es importante analizar de qué actores proviene la ayuda al desarrollo, ya que en un mundo globalizado las situaciones de los otros estados se han vuelto más relevantes que nunca. La ayuda al desarrollo puede estar promovida por intereses de los países donantes en su propia estabilidad interna.

La cuestión de la seguridad suele llevar unida la militarización para tratar de garantizarla. Los Estados y los actores internacionales han recurrido habitualmente a estrategias centradas en la fuerza o en el control territorial, bajo la premisa de que la estabilidad política y social sólo puede alcanzarse una vez restablecido el orden mediante medios coercitivos. Una de las preocupaciones que existen en lo referente al nexo seguridad-desarrollo es que las lógicas del

desarrollo, que se encuentran basadas en la inclusión, la equidad y la mejora de las condiciones de vida, pasen a estar subordinadas a las lógicas de la seguridad. La práctica ha demostrado, especialmente en la región del Sahel, que una solución mayoritariamente militar en contextos marcados por la pobreza estructural, la desigualdad y la falta de oportunidades económicas no es eficaz a largo plazo. La solución militar sin un componente sólido de desarrollo humano y gobernanza inclusiva ha influido en que se perpetúe el ciclo de desigualdad que alimenta la expansión de los grupos armados. Como hemos apuntado anteriormente, uno de los casos más llamativos a nivel internacional es el Sahel. La zona de África Occidental, en especial el Sahel, agrupa algunos de los países más pobres del mundo. Según el Índice de Desarrollo Humano de 2025, Mali ocupa el puesto 188 de 193 países, Níger el 189 y Burkina Faso el 186. Estos países poseen una serie de graves problemáticas estructurales como ausencia del Estado en diversas zonas, pobreza extrema y falta de servicios que hace aún más complicado su acceso al desarrollo.

A su vez, existe una brecha entre la retórica del nexo seguridad-desarrollo y su implementación sobre el terreno. A pesar de que los actores internacionales insisten en la importancia de integrar la seguridad y el desarrollo de manera simultánea, en la práctica se ve obstaculizada por diversos factores. Uno de los principales problemas es la propia estructura de la ayuda al desarrollo, caracteri-

zada por la participación de una amplia variedad de actores como pueden ser Estados, organismos multilaterales, ONG, empresas privadas y entidades locales. Cada uno de ellos posee intereses, prioridades y tiempos de actuación diferentes. Esta situación implica tensiones y contradicciones entre agendas que dificultan la coherencia de las intervenciones, lo que se traduce en políticas fragmentadas, solapamiento de proyectos y un uso ineficiente de los recursos disponibles.

Como resultado de estas deficiencias en la implementación, los esfuerzos por vincular seguridad y desarrollo suelen quedarse en declaraciones formales o en proyectos aislados, sin lograr un impacto estructural.

En el caso de África, en numerosas ocasiones se ha implementado una política de seguridad basada principalmente en una lógica militarista, una doctrina basada en parte en la seguida por Estados Unidos durante la época de la “Guerra contra el Terror”. Este enfoque ha priorizado la respuesta armada para tratar de contrarrestar la inestabilidad y la insurgencia en el continente africano en detrimento del desarrollo y el fortalecimiento institucional.

Durante la conferencia de Naciones Unidas celebrada en Sevilla, una de las advertencias que se hizo en relación con este tema fue en relación a la disminución de las partidas para la ayuda al desarrollo debido a una priorización del gasto militar. Esta redistribución de los recursos podría suponer una merma en la capacidad de los países para gestionar

sus propios problemas internos y lograr un desarrollo duradero. La dependencia de estrategias de seguridad externas y la concentración de esfuerzos en la dimensión militar tienden a debilitar las instituciones locales, a disminuir la confianza ciudadana y a perpetuar la inestabilidad.

El nexo seguridad-desarrollo ha demostrado la necesidad de su aplicación en contextos complejos, especialmente en aquellos marcados por conflictos prolongados, fragilidad institucional y desigualdad estructural. No obstante, no se encuentra exento de críticas por las posibilidades de instrumentalización por parte de los donantes o porque pueda llegar a reproducir dinámicas neocoloniales. Uno de los grandes retos de los próximos años será la construcción de estrategias de seguridad y desarrollo que sean verdaderamente eficaces, inclusivas y sensibles a los contextos locales, fomentando la participación comunitaria y la soberanía de los Estados receptores

3. EL CASO DEL SAHEL

Situación general

La zona del Sahel es una amplia región que atraviesa el continente africano de este a oeste, desde Senegal hasta Eritrea, y que se caracteriza por ser un espacio de transición ecológica, política y social entre el norte y el África subsahariana. Sin embargo, para la cuestión concreta sobre el nexo seguridad-desarrollo nos centraremos en el caso concreto del Sa-

hel occidental. Los países de Mali, Níger y Burkina Faso atraviesan una compleja situación política, social, económica y securitaria por la que se encuentran estrechamente interrelacionados y se influyen mutuamente.

A nivel político, existe una notable ausencia del Estado en amplias zonas de los territorios nacionales, especialmente en las regiones periféricas y rurales. Esta debilidad estatal se explica parcialmente por la configuración de fronteras heredadas del periodo colonial ya que no responden a las dinámicas históricas, sociales y culturales de las poblaciones locales. A ello se suma el impacto de los programas de ajuste estructural impulsados por instituciones financieras internacionales, que obligaron durante décadas a una reducción significativa de los presupuestos públicos, provocando la retirada o el debilitamiento de servicios básicos como la educación, la sanidad o la seguridad. Actualmente los tres países se encuentran en un proceso de transición ya que desde el año 2020 han tenido lugar en ellos sucesivos golpes de Estado.

Los cambios de gobierno son importantes a la hora de entender la situación securitaria y de desarrollo en estos territorios.

En el ámbito económico los países tienen un importante sector primario en el que prevalece la agricultura y la ganadería de subsistencia, y a su vez existe una fuerte presencia de exportación de productos primarios dentro de la economía. Esta configuración genera una elevada vulnerabilidad frente a los

mercados internacionales, ya que los ingresos nacionales y la capacidad de actuación del Estado quedan estrechamente ligadas a la fluctuación de los precios de las materias primas. A su vez, los beneficios derivados de la explotación de los recursos naturales no se distribuyen de manera equitativa entre la población, lo que contribuye a la persistencia de altos niveles de pobreza, desempleo y desigualdad social. La economía de los Estados del Sahel ha sufrido importantes complicaciones en los últimos años debido a la inseguridad. La erosión de las economías locales se podía observar en la inseguridad de las rutas comerciales o el cierre de los mercados semanales, lo que supone un incremento del precio de los productos. A su vez, las inversiones privadas desaparecen debido a la inestabilidad, el comercio se dificulta y a su vez aumenta la dependencia de las economías ilícitas. En el año 2025 la capital maliense, Bamako, fue bloqueada por el grupo yihadista JNIM. Esto supuso la escasez de bienes esenciales como el combustible que alimenta a vehículos y generadores eléctricos. Las escuelas y universidades se vieron obligadas a cerrar debido a la falta de electricidad. En este momento se pudo ver como la inseguridad afecta directamente al desarrollo y al normal funcionamiento de la economía. La dificultad del normal funcionamiento de la economía tiene un efecto directo en la actuación y presencia del estado ya que se encuentran importantes impedimentos a la hora de recaudar impuestos, lo que redundaría di-

rectamente en la provisión de servicios básicos e inversiones estatales.

El malestar político y económico viene aparejado a una tensa situación social. La compleja situación económica y social constituye otro factor clave para entender la capacidad de atracción de estos grupos. La región se enfrenta a desafíos como la falta de provisión de servicios básicos, la alta presión demográfica y el cambio climático, que llevan a una escasez de recursos que se acentúan con el paso de los años. Para una parte de la población joven, integrarse en los grupos armados se percibe como una vía para obtener ingresos y protección. Los grupos obtenían tradicionalmente sus recursos económicos a través de los secuestros, contrabando y tráfico de personas. No obstante, en los últimos años la región del Sahel se ha convertido en una de las principales zonas de tráfico de drogas que tienen como destino Europa. Esto le ha dado a los grupos armados una mayor capacidad económica, convirtiéndolos en un foco de atracción para la juventud. A nivel social, la falta de oportunidades laborales, especialmente para la juventud y en las zonas rurales, unida a la pobreza estructural y a la exclusión social, genera un terreno fértil para el reclutamiento. Los grupos armados tienen una importante capacidad de entrelazarse con el tejido social de las zonas en las que operan. Una parte de sus efectivos provienen de las mismas y a través de estrategias como matrimonios logran insertarse activamente en las sociedades. A su vez, en la zona del Sahel

existen tensiones entre diversas etnias debido a la competencia por unos recursos cada vez más escasos. Uno de los casos más llamativos son los conflictos entre ganaderos y agricultores. A su vez, en la región del Sahel ha existido una situación de marginalización histórica de ciertas etnias de los centros de poder y decisión, y los grupos armados utilizan estas tensiones para aumentar su capacidad de actuación.

La cuestión securitaria es uno de los principales puntos de análisis y objetivo de políticas públicas en la región del Sahel. No obstante, en diversas ocasiones se ha analizado desde el punto de vista de la defensa, sin darle el peso que realmente tienen la situación política económica y social. Los países de Mali, Níger y Burkina Faso se han configurado como una de las zonas más afectadas por el yihadismo a nivel mundial. En el año 2025 hemos podido ver como la capital de Mali, Bamako, se encontraba sitiada por el yihadismo, lo que cortaba los suministros de productos esenciales a la ciudad. Burkina Faso por su parte ha sido durante dos años el país con más muertos por terrorismo según el Global Terror Index. A su vez, conviene destacar la existencia de enfrentamientos entre comunidades por recursos cada vez más escasos, como el agua o los terrenos fértiles. Paralelamente, la ausencia del estado y las condiciones de vida de la población se han convertido en caldo de cultivo para la proliferación de redes de contrabando y tráfico. Estas han existido durante siglos, pero en los últimos años

el tráfico de cocaína proveniente de Latinoamérica ha sido un potenciador de las mismas.

4. ACTORES INTERNACIONALES EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD

Desde el año 2012 diversos actores internacionales se han desplegado en Mali, Níger y Burkina Faso para tratar de estabilizar la situación securitaria en la región. Estas intervenciones respondieron a un rápido deterioro de la seguridad marcado por la expansión de grupos armados y la debilidad de las capacidades estatales para controlar el territorio. Dichas misiones priorizaron las operaciones antiterroristas, la formación y el equipamiento de las fuerzas armadas locales así como el control territorial y la eliminación de líderes insurgentes. Durante años, Francia fue uno de los actores más destacados en el dispositivo internacional desplegado en el Sahel. La Operación Serval se creó para recuperar el territorio del norte de Mali que se había proclamado como independiente en forma del Estado de Azawad en 2012. La Operación fue calificada de éxito y fue sustituida por la Operación Barkhane, ya que los grupos armados en el país no habían desaparecido. La Operación Barkhane fue concebida como una estrategia regional de lucha antiterrorista que extendió el marco de actuación militar a buena parte del Sahel occidental. En paralelo, la Unión Europea optó por una implicación centrada en el fortalecimiento de las capacidades locales con el

despliegue de la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en Mali (EUTM Mali). Esta poseía una diferencia importante con respecto a Barkhane, ya que los efectivos europeos no entraban en combate sobre el terreno.

El deterioro de la situación política, social y económica de los países supone una gran oportunidad de crecimiento para los grupos armados. La debilidad de las instituciones estatales y la limitada capacidad de los gobiernos para ejercer un control efectivo sobre amplias zonas del territorio generan un vacío de poder que estos actores aprovechan. Esta situación se ve reforzada por el carácter poroso de las fronteras, heredadas del periodo colonial, que no se corresponden con las dinámicas sociales, económicas y culturales de las poblaciones locales. Como consecuencia, los grupos armados pueden desplazarse, replegarse y reorganizarse con relativa facilidad. A su vez, esta porosidad de las fronteras y la falta de control efectivo del territorio son un grave problema para las misiones de seguridad ya que la tarea de localizar a los grupos armados adquiere una considerable complejidad. En este escenario de fragilidad institucional, el espacio dejado por el Estado no permanece mucho tiempo vacío. Usualmente se llena rápidamente por diversos actores que incluyen desde autoridades tradicionales y liderazgos comunitarios, hasta los propios grupos armados. Estos asumen funciones de regulación, mediación de conflictos y control social lo que supone en la práctica formas paralelas de ges-

ción del territorio y de gobernanza. Frente a este contexto, para hacer frente a las misiones de seguridad los grupos armados se reorganizaron rápidamente y la violencia se desplazó a nuevas regiones, lo que hacía que el control por parte de las misiones de seguridad fuese efímero.

Las misiones de seguridad desplegadas en el Sahel desde el año 2012 tenían una parte de desarrollo, pero esta era mínima en comparación con el factor securitario. Dichas misiones realizaron avances puntuales pero los grupos yihadistas avanzan con una rapidez mayor. A su vez, existía una falta de coordinación importante entre las propias misiones de seguridad y el propio gobierno maliense. Una de las quejas del gobierno era la poca comunicación que existía en lo referente a la información sobre el espacio aéreo. Las misiones de seguridad no tuvieron el efecto esperado. No lograron estabilizar la región del Sahel y las condiciones de la población no mejoraron. Esto generó una sensación creciente de injerencia y neocolonialismo. La tensión con respecto a la inseguridad y falta de desarrollo ayuda a explicar la finalización de la cooperación securitaria con Francia y la posterior retirada de otras misiones de seguridad, así como el ascenso de discursos soberanistas y militaristas en la región. La retirada o reducción de la ayuda internacional tradicional agrava aún más este problema, ya que deja a los Estados sahelianos con menos recursos para responder a las demandas sociales de sus poblaciones, aumentando el riesgo de colapso institucional.

5. LA SEGURIDAD BLOQUEA EL DESARROLLO

En el Sahel, el nexo entre desarrollo y seguridad no es una cuestión abstracta. La violencia e inseguridad cotidiana desarticulan los mecanismos básicos del desarrollo. Uno de los efectos inmediatos de la inseguridad son los desplazados internos. De acuerdo con los datos de ACNUR, en torno a 2,5 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el Sahel central debido a estos fenómenos. Esto tiene efectos directos en el desarrollo, como el abandono de tierras agrícolas y ganado. El desplazamiento no solo supone una crisis humanitaria sino un bloqueo al progreso de las comunidades locales. Se dan fenómenos como la pérdida de ingresos y autosuficiencia alimentaria, ya que la población muchas veces se ve obligada a huir sin apenas medios de subsistencia o sin ninguno. A su vez, la movilización de población puede crear tensiones en las comunidades de acogida ya que se crea una sobrecarga en comunidades receptoras que ya se encuentran empobrecidas. La cuestión de los desplazados en la región del Sahel es una cuestión que ha afectado directamente a Europa y en concreto a España. Una parte importante de la población migrante que llegaba a la isla canaria de El Hierro estaba conformada por población de Mali, Níger y Burkina Faso que habían huido.

Por otra parte, la inseguridad provoca el cierre o funcionamiento precario de los servicios básicos. Las escuelas, los

centros sanitarios y las administraciones ven imposibilitado su funcionamiento normal y en ocasiones son utilizados incluso por los propios grupos armados como bases de operaciones. En diversas zonas rurales los docentes y los sanitarios no pueden o no quieren desplazarse a ellas, lo cual implica que la población queda fuera de estos servicios, rompiendo círculos de escolarización y atención primaria. La falta de servicios básicos tiene importantes efectos a largo plazo, como la pérdida de capital humano y la reproducción intergeneracional de la pobreza, lo que vuelve a la población más vulnerable al reclutamiento armado.

A su vez, la violencia limita la actuación de las organizaciones no gubernamentales, agencias internacionales o programas estatales de desarrollo. En las zonas controladas por los grupos armados el acceso humanitario se vuelve intermitente o directamente inexistente. A su vez, la seguridad del propio personal de las organizaciones se puede ver comprometida, lo que lleva a la suspensión o abandono de los proyectos de desarrollo.

6. CONCLUSIONES

Ante un escenario de reconfiguración de la ayuda internacional, el nexo seguridad y desarrollo ha adquirido una importancia cada vez mayor en debates académicos y políticos. Ante la retirada de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos, los actores internacionales se enfrentan a la pregunta de cómo se ha re-

configurado esta ayuda y como debería ser en el nuevo paradigma mundial. En este contexto, la región del Sahel ha sido el destino de diversas misiones de seguridad, tanto bilaterales como multilaterales. Estas tenían un componente mayoritariamente securitario, en las que el objetivo era el control del territorio y reducir a los grupos armados. Estas intervenciones han priorizado el control del territorio, el fortalecimiento de las fuerzas armadas locales y la lucha contra los grupos armados no estatales, especialmente aquellos asociados al yihadismo. La lógica subyacente ha sido que la inseguridad constituye el principal obstáculo para el desarrollo y que, por tanto, la estabilización militar es una condición previa indispensable para cualquier progreso económico o social. No obstante, esta aproximación ha demostrado importantes limitaciones. La cuestión es que en una zona donde la falta de desarrollo, la precariedad económica y el malestar social son endémicas, una solución securitaria no es suficiente. En muchos casos, la presencia militar internacional ha sido percibida por las poblaciones locales como ajena o incluso hostil, lo que ha contribuido a erosionar su legitimidad y a reforzar narrativas antioccidentales. La desconexión entre la seguridad y el desarrollo ha generado una incapacidad de afrontar las causas profundas de la inestabilidad.

Actualmente resulta imprescindible repensar el nexo seguridad-desarrollo desde un enfoque más amplio, abandonando la visión que subordina el desarrollo a la seguridad, y recono-

cer su interdependencia. La seguridad duradera no puede lograrse sin mejoras tangibles en las condiciones de vida de la población, del mismo modo que el desarrollo sostenible requiere entornos mínimamente estables. En el caso concreto del Sahel, el desafío actual consiste en articular políticas de seguridad y desarrollo de manera simultánea, lo que supondría colocar a la población en el centro de la estrategia y superar las lógicas prioritariamente militares, que han demostrado patentemente su ineficacia.

Bibliografía

ACNUR. (2023, 15 junio). *¿Qué está pasando en el Sahel central? Claves para entender la crisis en la región*. eAcnur. <https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/que-esta-pasando-en-el-sahel-tesis>

Criollo, F. J., Barahona, A. M. C., Segura, W. J., Murciego, Á. C., Calderón, F. S., & Figueroa, M. Á. (2009). *Elementos sobre la historia del concepto de desarrollo según los economistas Theotonio dos Santos y Gilbert Rist*. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3641987>

Eustat. (2025). *Índice de desarrollo humano por indicadores según países*. En *Tablas estadísticas*. https://www.eustat.eus/elementos/ele0013500/ti_indice-de-desarrollo-humano-por-indicadores-segun-paises-2019/tbl0013566_c.html

Institute for Economics & Peace. (2025, 5 de marzo). *Global Terrorism Index 2025*. ReliefWeb

Mateos Martín, O., Rentería Cornejo, J., & Torrella Llauger, L. (2024). *La unión europea en el Sahel: Repensando su papel más allá de la seguridad* (Notes internacionales CIDOB, n.º 312, pp. 1–7). CIDOB.

Mesa B. (2024). *El fracaso de Occidente en África: La nueva amenaza que no queremos ver*. Almuzara.

Mesa, B. (2022). *Los grupos armados del Sahel: Conflicto y economía criminal en el norte de Mali*. Los Libros de la Catarata.

Moral Martín, P. (2020). *El nexo seguridad-desarrollo y la resiliencia: Hacia una aproximación integrada*. *Relaciones Internacionales*, 43. <https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/article/view/relacionesinternacionales2020.4.3.004>

Stockholm International Peace Research Institute. (2015). *Security and development*. En *SIPRI Yearbook 2015: Armaments, disarmament and international security*.

3

Tensiones entre agendas externas e intereses africanos en el sahel y África occidental

por ROMÉO GBAGUIDI y AGOSSA PAUL OGBOYA

1. INTRODUCCIÓN

El Sahel y África Occidental constituyen un espacio estratégico atravesado por crisis multidimensionales que combinan inseguridad persistente, inestabilidad política y desafíos socioeconómicos crecientes. Durante la última década, la región ha experimentado una sucesión de golpes de Estado (Malí en 2020, Chad en 2021, Guinea en 2021, Burkina Faso en 2022, Níger en 2023 y, recientemente, Guinea Bissau en 2025) que profundizan la fragilidad institucional de esta zona geopolítica (Jacquemot, 2025). Como consecuencia, numerosos flujos de ayuda internacional fueron suspendidos o reducidos, revelando la vulnerabilidad financiera de los Estados oesteaffricanos - particularmente sahelianos - frente a mecanismos externos de asistencia. Esto ilustra también que la ayuda externa a dichos Estados funciona como un somnífero porque, lejos de reforzar la autonomía genera, paradójicamente, una gran dependencia.

Para entender estos desequilibrios, resulta imprescindible recordar el legado histórico que estructura las relaciones actuales. Thomas Sankara (1983-1987) insistía en que la deuda africana debía analizarse desde su origen, porque aquellos que prestaban dinero son los mismos antiguos colonizadores. Esta denuncia evidencia que el endeudamiento no es un proceso neutral, sino un instrumento heredado de lógicas de dominación. Asimismo, varios autores apuntan que la permanencia de prácti-

cas neocoloniales, visibles en dispositivos como el franco CFA o la influencia persistente de antiguas potencias en sectores estratégicos, continúa condicionando la capacidad de decisión de los Estados africanos (Sulitzer, 2009; Traoré, 2005; Dumoulin, 1997).

Al mismo tiempo, el escenario contemporáneo se caracteriza por una rivalidad creciente entre actores tradicionales (Unión Europea y sus miembros, Estados Unidos) y potencias emergentes como China, Rusia, Turquía, India y Arabia Saudita. Aunque la cooperación internacional pretende apoyar el desarrollo, llega a menudo muy condicionada. Según Sogge (2003, p. 95), “la ayuda vinculada (...) reduce considerablemente la eficacia de la cooperación internacional”. En este sentido, Schiere, Ndikuma y Walkenhorst (2011) observan que las intervenciones chinas privilegian infraestructuras económicas en detrimento de sectores sociales e institucionales, generando un desfase respecto a las prioridades africanas.

Conviene preguntarse, pues, ¿cómo armonizar los intereses africanos con agendas externas diversas, evitando reproducir dependencias y promoviendo un desarrollo autónomo y sostenible? A continuación, con un enfoque analítico-comparado, confrontaremos agendas externas y prioridades africanas, integrando análisis histórico, económico y geopolítico. Presentaremos algunos casos destacando una breve evaluación del posicionamiento de la Alianza de los Estados del Sahel.

2. BREVE MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL

La comprensión de las dinámicas de poder, dependencia y desarrollo en el Sahel y África Occidental requiere un marco conceptual sólido que articule los conceptos de deuda, cooperación internacional, ética, soberanía y neocolonialismo. Este enfoque permite analizar cómo las estructuras históricas y contemporáneas condicionan la autonomía de los Estados africanos y moldean sus relaciones con actores externos, así como los desafíos de desarrollo que enfrentan.

2.1. La deuda como instrumento de dominación

La deuda externa constituye un mecanismo central de subordinación política y económica. Porque, el endeudamiento no es neutral sino estratégico ya que permite a los acreedores influir en políticas fiscales, monetarias y sociales, limitando la capacidad de los Estados africanos de definir sus propias agendas de desarrollo. La deuda refuerza la dependencia estructural heredada del colonialismo y restringe la soberanía económica y política.

2.2. Asistencia técnica, ética y moral en las relaciones internacionales

La dependencia se amplifica mediante la cooperación internacional y sus mecanismos de asistencia técnica. Sogge

(2003, p. 95) destaca que “la ayuda vinculada (...) reduce considerablemente la eficacia de la cooperación internacional”. Porque, los programas de ayuda y los préstamos vinculados reproducen esquemas de dependencia al obligar a los Estados africanos a importar bienes, servicios y asesoramiento externo, a falta de disponer de los medios tecnológicos para producirlos in situ.

La dimensión ética subrayada por Sankara (1987) destacaba que entre el rico y el pobre no existe la misma moral y abogaba por unas interacciones internacionales que impliquen justicia, equidad y responsabilidad política. Los Estados africanos deben, por consiguiente, priorizar el bienestar de sus poblaciones frente a presiones externas, reforzando un desarrollo endógeno y responsable.

2.3. Corriente antineocolonialista en el Sahel, autonomía y desarrollo africano

El neocolonialismo persiste mediante estructuras económicas heredadas del colonialismo como la dependencia de monocultivos y la vulnerabilidad ante los mercados externos. Estas estructuras limitan la diversificación productiva y dificultan la consolidación de políticas de desarrollo autónomas, reproduciendo dinámicas históricas de subordinación. Frente a estas limitaciones, la autonomía es central para el desarrollo. Independencia financiera, soberanía política y resiliencia institucional permitirán

que los Estados africanos actúen como actores activos de su propio desarrollo. Integrar perspectivas éticas y estratégicas garantiza que la cooperación internacional contribuya a fortalecer y no a disminuir la capacidad de acción.

La revisión de la deuda, la cooperación condicionada, el neocolonialismo y la ética configurarían un marco analítico clave para diseñar estrategias de desarrollo autónomo y sostenible en el Sahel y África Occidental.

3. CONTEXTO HISTÓRICO Y GEOPOLÍTICO DEL SAHEL Y ÁFRICA OCCIDENTAL

Analizar el contexto oesteaficano, en general, y saheliano, en particular, requiere comprender las estructuras históricas que configuran la dependencia política, económico-monetaria de la subregión. Desde las independencias, las antiguas potencias coloniales, Francia en particular, mantienen un control estratégico (por ejemplo, mediante la *Françafrique*), que combina influencia política, militar, económica y cultural. Como señalan Sullitzer (2009), Traoré (2005) y Dumoulin (1997), Francia asumió el papel de “gendarme de Occidente” durante la Guerra Fría, apoyando regímenes aliados, interviniendo en golpes de estado y conflictos internos, asegurando a sus empresas posiciones privilegiadas en sectores estratégicos. Esta lógica se ejemplifica en Costa de Marfil, donde asesores franceses operaban dentro de ministerios cla-

ve para preservar intereses corporativos (Traoré, 2005).

Paralelamente, la influencia monetaria constituye una herramienta esencial de control. El franco CFA, creado en 1945 y reconvertido en 1958, sigue siendo la moneda de la Comunidad Financiera Africana en África Occidental (Kebe, 2019; Kabunda, 2023). Aunque aporta estabilidad monetaria, implica la obligación de depositar reservas en el Tesoro francés y limita claramente la autonomía económica de los Estados miembros. Delage y Massiera (1994) y Nubukpo (2007) indican que este sistema fomenta la extroversión de las economías, priorizando relaciones verticales con Francia en detrimento de la integración regional y del comercio intraafricano. En la misma lógica, la francofonía funciona como herramienta de penetración cultural y comercial, reforzando la influencia política frente a competidores anglófonos (Dumoulin, 1997).

La dependencia financiera va más allá del legado colonial. Níger constituye un ejemplo emblemático, ya que su economía ilustraba que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y los préstamos condicionados sostenían su presupuesto nacional. Según Ouédraogo (2002), esta situación convierte al país en un “territorio fructífero para la renta de desarrollo” y en un “laboratorio ideal” para las políticas europeas de externalización de fronteras, debido a su subordinación financiera y política a socios europeos, especialmente Francia.

La llegada de actores emergentes diversifica, pero no reduce, las dependencias. La filosofía “ganar-ganar” de China se expresa a través de préstamos y contratos vinculados a recursos naturales. Desde los años 1960, Pekín ha financiado más de 900 proyectos en África, principalmente en infraestructuras económicas, energía, minería, telecomunicaciones y zonas económicas especiales (Schiere, Ndikumana y Walkenhorst, 2011). No obstante, estas intervenciones priorizan sectores productivos y suelen dejar de lado la consolidación institucional y social, generando un desfase respecto a prioridades africanas como la seguridad humana (Schiere et al., 2011). Otros actores, como Rusia, Turquía y Arabia Saudita, amplían aún más la complejidad regional mediante acuerdos militares, despliegues de seguridad y cooperación estratégica (Nantulya, 2024; Rubio Hernansáez, 2024).

En este contexto, los golpes de Estado en Malí, Burkina Faso y Níger han debilitado la estabilidad política y reducido los flujos de cooperación internacional, evidenciando que las agendas externas no garantizan ni estabilidad ni desarrollo autónomo (Roca y Puig, 2019). Por eso, la creación de la Alianza de los Estados del Sahel representa una tentativa de integración política y cooperación en seguridad. Sogodogo (2024, p. 1) opina que la AES “reavivó la esperanza de una federación en África Occidental francófona”, aunque plantea retos serios respecto a su articulación con la CEDEAO y la UEMOA.

En suma, el Sahel contemporáneo resulta de la interacción entre estructuras coloniales persistentes, nuevas dependencias financieras y rivalidades geoestratégicas. Comprender este entramado es indispensable para avanzar hacia estrategias regionales coherentes y un desarrollo endógeno que refuerce la autonomía africana.

4. ACTORES, ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE AGENDAS EXTERNAS EN EL SAHEL Y ÁFRICA OCCIDENTAL

En el Sahel y África Occidental convergen intereses geopolíticos diversos.; los cuales se expresan mediante instrumentos que combinan asistencia económica, cooperación militar, inversiones en infraestructura, diplomacia cultural y control político. Por lo tanto, comprender estas agendas resulta indispensable para evaluar tanto los riesgos de dependencia como las oportunidades de desarrollo sostenido.

4.1. Actores occidentales principales

Francia continúa siendo un actor predominante, especialmente en África Occidental francófona. Su influencia se articula a través de mecanismos militares, económicos y culturales. La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y empresas francesas mantienen posiciones privilegiadas en la ejecución de programas, lo

que confirma la continuidad de prácticas neocoloniales. Se estima que, de 495 contratos financiados en África, 320 fueron adjudicados a empresas francesas, y casi 80% de los préstamos concedidos por la AFD en 2020 incluyeron condiciones que favorecían la contratación de compañías francesas. Este modelo consolida una dependencia estructural, particularmente visible en sectores estratégicos como la explotación del uranio en Níger.

La Unión Europea y España, por un lado, despliegan una cooperación centrada en el nexo seguridad-desarrollo. Ferré de la Peña (2023) subraya que España prioriza la seguridad marítima y energética en el Golfo de Guinea y el Sahel, respaldando misiones civiles y militares de la UE. Eso le permite obtener aproximadamente el 20% de su petróleo y el 11,44% de su gas de Nigeria, lo que explica su creciente presencia diplomática en la subregión africana. Paralelamente, la UE anunció un plan de inversión de 150.000 millones de euros destinados a la transición ecológica, la digitalización, la creación de empleo y la seguridad alimentaria, para mantener su relevancia estratégica en África contrarrestando la influencia china.

Por otro lado, Estados Unidos combina un enfoque económico y militar articulado por AFRICOM. A través de operaciones multinacionales como FLINTLOCK o TSCTI, Washington busca profesionalizar fuerzas africanas y fortalecer capacidades en la lucha contra el terrorismo, la piratería y el tráfico ilícito

(Silverio, 2023; IEEE, 2024). Así consolida Estados Unidos vínculos estratégicos con países clave, asegurando su presencia geopolítica en la región.

4.2. Actores emergentes

China mantiene una presencia constante desde los años 60 mediante la financiación de más de 900 proyectos en infraestructura, minería, energía y telecomunicaciones (Schiere, Ndikumana y Walkenhorst, 2011). Su estrategia actual plasmada en el plan FOCAC 2024-2027 se articula con la Agenda 2063, el PIDA y la ZLECA. Además, la Iniciativa de Seguridad Global (ISG) proyecta normas de seguridad favorables a los intereses estratégicos chinos (Nantulya, 2024). Aunque su filosofía “ganar-ganar” se basa en rapidez y resultados visibles, la cooperación china se caracteriza por escasa transparencia y limitadas transferencias de conocimiento, generando riesgos de dependencia financiera.

Simultáneamente, Rusia, Turquía y Arabia Saudita incrementan su presencia a través de acuerdos militares, despliegue de mercenarios y alianzas económicas. Estas estrategias, menos institucionalizadas que las occidentales o la china, introducen nuevas dinámicas de competencia y, a menudo, mayor volatilidad (Rubio Hernansáez, 2024; Nantulya, 2024).

4.3. Comparación funcional y filosófica

Desde un punto de vista funcional, las agendas occidentales priorizan la gobernanza, los derechos humanos y la condicionalidad institucional, utilizando como instrumentos la AOD, las donaciones y los programas de alivio de deuda. En cambio, China privilegia la estabilidad, la infraestructura y la no injerencia política mediante préstamos concesionales y asociaciones público-privadas (Schiere et al., 2011). Estas diferencias implican que Occidente apuesta por fortalecer instituciones, pero avanza lentamente, mientras China ofrece rapidez y visibilidad, pero sin fomentar necesariamente un desarrollo endógeno.

En suma, las agendas externas combinan intereses económicos, militares y diplomáticos que condicionan tanto la soberanía como la autonomía estratégica. Por eso, la gestión equilibrada de estas relaciones resulta crucial para promover un desarrollo verdaderamente soberano, sostenible y alineado con las prioridades africanas.

5. INTERESES PRIORITARIOS Y DESAFÍOS DE LA SUBREGIÓN OESTEAFRICANA

Los Estados del Sahel y del África Occidental enfrentan un entorno configurado por la superposición de agendas externas y presiones geopolíticas. En este contexto, resulta imprescindible de-

finir con claridad sus intereses nacionales y regionales, que se giran en torno a cuatro ejes fundamentales: seguridad y soberanía, diversificación económica y control de recursos estratégicos, desarrollo social y, cohesión regional. Cada uno de estos ejes refleja, en definitiva, la tensión entre autonomía africana e influencia externa.

5.1. Seguridad y soberanía

Defenderse frente a interferencias externas constituye un imperativo estratégico. Traoré y Foka (2024) afirman que los recientes golpes de Estado no deben entenderse como acciones arbitrarias, sino como medidas excepcionales destinadas a preservar la soberanía frente a presiones externas. En Burkina Faso, por ejemplo, la movilización patriótica se ha convertido en un elemento decisivo para enfrentar amenazas, singularmente de los terroristas que atacan ese país.

La intervención de fuerzas externas de apoyo no siempre genera resultados efectivos. Porque muchos opinan que la llegada de diferentes misiones militares no ha ayudado a combatir el avance terrorista en la zona. Varios Estados optan desde luego por diversificar sus alianzas militares recurriendo a Rusia u otros socios que no imponen condicionalidades políticas. Sin embargo, estas relaciones también presentan límites ya que Rusia tampoco dispone del equipamiento que desean comprar los países en guerra contra los terroristas, siendo lo que

ofrece en un 80% material ruso (Traoré y Foka, 2024). En efecto, denuncian que los socios tradicionales restringen el acceso a sistemas armamentísticos clave, bloqueando licencias y acceso a ciertas armas. Esta situación demuestra la necesidad de equilibrar independencia estratégica y realidades operativas.

5.2. Diversificación económica y control de recursos estratégicos

Un pilar central de los intereses africanos es la gestión soberana de sus recursos naturales. Burkina Faso y Malí destacan en oro; Níger controla cerca del 8% del uranio mundial, crucial para la energía nuclear francesa; Nigeria y el Golfo de Guinea figuran como polos petroleros (Kordblun, 2023; Jacquemot, 2025). Pero, los flujos financieros ilícitos (FFI) estimados entre 50 y 150 mil millones de dólares anuales debilitan las economías locales. Existen prácticas ilícitas relacionadas con diamantes, oro, uranio y productos energéticos (Jacquemot, 2025).

Por su parte, Kordblun (2023) subraya la paradoja del uranio nigerino; porque, pese a su importancia para Europa, el 83% de la población de Níger carece de electricidad y el 40% de su presupuesto nacional depende de asistencia externa. Por lo tanto, es imprescindible impulsar políticas que promuevan diversificación económica, valor añadido local y control de recursos nacionales.

5.3. Desarrollo social, movilización y cohesión regional

El desarrollo social es fundamental para garantizar legitimidad política y sostenibilidad. Algunos autores recomiendan priorizar salud, educación, infraestructura, seguridad alimentaria, gobernanza y medioambiente (Jacquemot, 2025; Casa África, 2025). Estos sectores refuerzan la resiliencia social y reducen la dependencia frente a actores externos que priorizan intereses estratégicos propios. Una integración regional soberana aparece, en consecuencia, como herramienta clave para fortalecer seguridad y estabilidad. La creación de la Alianza de los Estados del Sahel (AES) en septiembre de 2023 que integran Malí, Burkina Faso y Níger, constituye un paso decisivo hacia una arquitectura de cooperación autónoma. Para Sogodogo (2024), la AES busca coordinar políticas públicas, fortalecer la confianza entre pueblos y enfrentar conjuntamente terrorismo y el crimen organizado.

A pesar de resistencias internas y presiones externas, los Estados miembros impulsan esta alianza como mecanismo de resiliencia frente a crisis crecientes. La afirmación de intereses africanos exige combinar, por lo tanto, soberanía, control de recursos, desarrollo y cohesión regional para reducir vulnerabilidades y reforzar la autonomía estratégica.

6. TENSIONES ENTRE AGENDAS EXTERNAS E INTERESES AFRICANOS

Las interacciones entre actores externos y Estados del Sahel generan tensiones estructurales que reflejan contradicciones profundas entre los discursos de cooperación y las realidades de dependencia, fragmentación e ineficacia en seguridad y desarrollo. Estas tensiones no son coyunturales. Constituyen la prolongación de relaciones históricas asimétricas que, bajo nuevas formas financieras, militares y geoeconómicas, continúan condicionando la autonomía africana. Por eso, el análisis de la deuda, la ayuda internacional y las agendas de seguridad permite comprender cómo los intereses africanos suelen quedar subordinados a prioridades externas alejadas de las realidades locales.

6.1. Dependencia financiera y pérdida de autonomía

La dependencia generada por la deuda y la ayuda internacional representa una de las tensiones más persistentes entre agendas externas e intereses africanos. En 2024, el continente acumulaba una deuda pública externa estimada en 1,86 billones de USD, mientras que el servicio de la deuda absorbía en torno al 50 % de los ingresos públicos, con más de la mitad de los países en alto riesgo de sobreendeudamiento. Este contexto reduce la autonomía estratégica de los Estados, cada vez más influenciados por acreedo-

res privados cuya participación pasó del 25 % a finales de los años 2000 a casi la mitad en 2024 (Jacquemot, 2025).

Estas dinámicas fueron tempranamente denunciadas por Sankara (1987), quien calificó la deuda como «un mecanismo de dominación» y «neocolonialismo donde los colonizadores se han transformado en asistentes técnicos». Su análisis subrayaba que la deuda no es solo un instrumento financiero, sino también vector de influencia geopolítica que condiciona las decisiones económicas y políticas. Por eso, denunciaba que la ayuda recibida, lejos de liberar, crea nuevas formas de dependencia.

Aún hoy, dicha denuncia se evidencia en qué buena parte de la AOD regresa a los países donantes mediante asistencia técnica, consultorías o compras obligatorias, reduciendo su impacto real y perpetuando una paradoja estructural de décadas de cooperación sin mejoras en desarrollo humano o lucha contra la pobreza.

6.2. Fragmentación y falta de coordinación entre donantes

Por consiguiente, la fragmentación del sistema internacional de la ayuda agudiza las tensiones. La ayuda extranjera refleja más los intereses de quienes la otorgan que las necesidades de los beneficiarios (Sogge, 2003). Por eso, los actores externos multiplican programas, fondos e iniciativas que operan con escasa coordinación, generando superposiciones administrativas, competencia

institucional interna y dispersión del esfuerzo público.

Además, la ayuda vinculada refuerza la dependencia técnica y tecnológica, mientras que - como advertía Sankara - «desorganiza y desestabiliza el espacio económico y político africano».

6.3. Influencia de las agendas de seguridad externas: el caso de Malí

La disociación entre prioridades africanas de seguridad y estrategias externas se observa claramente en Malí. Las operaciones internacionales desplegadas desde 2013 - MINUSMA, Barkhane u otras iniciativas europeas - privilegiaron un enfoque antiterrorista sin abordar las causas profundas de la crisis: gobernanza local, tensiones comunitarias y desigualdades regionales. Como señalan Roca y Puig (2019), pese a años de intervención, dichas agendas no han logrado estabilizar ni pacificar las zonas más afectadas.

6.4. Contradicciones entre desarrollo material y necesidades sociales

La presencia de actores como China muestra tensiones entre la construcción de infraestructura y las prioridades africanas en servicios sociales. Schiere, Ndikumana y Walkenhorst (2011) advierten que, sin control adecuado, los proyectos pueden responder a favoritismos políticos más que a necesidades reales. Así, la modernización material no siempre im-

plica transformación social, industrialización ni fortalecimiento institucional.

7. BREVE ANÁLISIS DEL CASO DE LOS MIEMBROS DE LA AES

El análisis comparado de casos nacionales permite observar cómo las tensiones entre agendas externas e intereses africanos se manifiestan en distintos contextos. Cada país refleja las contradicciones entre dependencia estructural, soberanía económica y búsqueda de modelos de desarrollo, mostrando que las dinámicas geopolíticas actuales no pueden comprenderse sin considerar legados coloniales, asimetrías económicas y la recuperación de imaginarios de emancipación.

7.1. Níger: soberanía energética, uranio y renuncia parcial a la ayuda externa

Níger ilustra la paradoja entre recursos estratégicos y pobreza estructural. Aunque produce alrededor del 8 % del uranio mundial, el 83 % de su población no tiene acceso a la electricidad. Esta contradicción, calificada por Kornblum (2023) como “una distopía increíble”, evidencia patrones históricos de extracción y dependencia. En 2024, la junta militar anunció la renuncia parcial a la ayuda internacional - aproximadamente 40 % del presupuesto, unos 2.200 millones de dólares (New York Times, 2023) -, con-

fiando en que la explotación soberana del uranio compensaría la reducción de la AOD. Rubio (2025) opina que la ayuda internacional sería innecesaria si Níger pudiera vender su uranio a precios de mercado y no según los fijados por compañías francesas. Paralelamente, Níger negoció con Irán la adquisición de 300 toneladas de uranio por 56 millones de dólares, incluyendo generadores y apoyo agrícola, reflejando un giro estratégico hacia socios no tradicionales.

7.2. Malí: fracaso acumulado de las agencias internacionales

A diferencia de Níger, Malí evidencia las limitaciones de la cooperación centrada en seguridad. Roca y Puig (2019) señalan que las misiones internacionales no han podido ni estabilizar ni pacificar el norte y centro del país, después de casi una década de presencia. Para Jacquemot (2025) el modelo de cooperación internacional se ha derrumbado, tras sucesivos golpes de Estado recientes y la disminución de flujos de ayuda. La búsqueda de seguridad interna no sustituye a transformaciones socioeconómicas; porque, la lucha contra el terrorismo sin legitimidad local agrava fracturas internas, mientras algunos pactos con nuevos socios refuerzan dinámicas geopolíticas en detrimento de intereses nacionales.

7.3. Burkina Faso: recursos mineros, liderazgo soberanista y legado sankarista

Burkina Faso combina recursos naturales, liderazgo soberanista y memoria sankarista. Nantulya (2024) describe a Ibrahim Traoré como el ideólogo más importante de la nueva lucha anticolonial y antiimperialista en África. En la Cumbre África-Rusia 2023, denunció que los dirigentes africanos siguen mendigando ayudas y que los países del Sahel enfrentan formas bárbaras del neocolonialismo. La designación de Joachim Tambele como custodio del legado sankarista refuerza su narrativa de soberanía y diversificación de alianzas.

8. HACIA UN MODELO DE COOPERACIÓN MÁS EQUILIBRADO

La construcción de un modelo de cooperación equilibrado en el Sahel y África Occidental exige, antes de todo, cuestionar los fundamentos de la AOD. Autores críticos, particularmente Sogge (2003), demuestran que esta ayuda tiende a responder más a prioridades geopolíticas y económicas de los donantes que a las necesidades reales de los Estados receptores. Por eso, estas prácticas han consolidado relaciones asimétricas que perpetúan dependencias en lugar de reducirlas. Resulta entonces imprescindible revalorizar la apropiación local y la co-construcción de políticas públicas, de modo que los gobiernos africanos no se limiten a ejecutar agendas externas

elaboradas sin considerar sus realidades institucionales, sociales y económicas.

Porque, la ayuda pierde eficacia cuando privilegia una noción estrecha de “estabilidad” centrada en control del riesgo y contención del desorden, en detrimento de transformaciones socioeconómicas profundas. Insistir únicamente en el orden, sin desarrollo, conduce a un callejón sin salida. Además, los mecanismos de ayuda que obligan a adquirir bienes y servicios del país donante reducen la autonomía y limitan los beneficios reales de los proyectos, reforzando la posición dominante del donante. Por lo tanto, superar este paradigma implica diseñar sistemas de asistencia menos verticales, mejor adaptados al contexto africano y orientados a resultados estructurales.

Avanzar hacia un equilibrio justo requiere mayor transparencia y rendición de cuentas en la ayuda clásica y los nuevos instrumentos financieros. Según Schiere, Ndikumana y Walkenhorst (2011), la ausencia de mecanismos rigurosos de control abre la puerta a decisiones basadas en afinidades políticas más que en necesidades objetivas. Este problema también afecta a acuerdos con socios emergentes - como China - que, a menudo, se negocian de forma bilateral y con escasa divulgación pública, dificultando el conocimiento ciudadano y la evaluación técnica.

La subregión debe diversificar sus alianzas para reducir vulnerabilidades generadas por la excesiva dependencia de un número limitado de socios. En un contexto marcado por el recorte de la

AOD, el endeudamiento creciente y los flujos financieros ilícitos, es urgente reconstruir la legitimidad del sistema de cooperación mediante un nuevo marco narrativo centrado en bienes públicos globales como clima, biodiversidad y gobernanza inclusiva (Jacquemot, 2025), para generar convergencias más estables y menos dependientes. Es decir, integrar seguridad humana, empleo y desarrollo social como pilares inseparables. Ferré de la Peña (2023) recuerda que desatender estas prioridades constituiría una grave miopía estratégica. Evitar hambrunas, fortalecer sistemas sanitarios y educativos y crear empleo juvenil es esencial tanto para la estabilidad regional como para la gobernanza global.

En definitiva, construir una cooperación equilibrada exige transformar lógicas tradicionales, reforzar transparencia, diversificar alianzas y situar la seguridad humana en el centro. Así, la cooperación podrá convertirse en un instrumento real de autonomía y desarrollo sostenible para el Sahel y África Occidental.

9. CONCLUSIÓN

En el Sahel y África Occidental las tensiones entre agendas externas e intereses africanos son estructurales, producto de legados históricos, dependencia financiera, dinámicas neocoloniales y rivalidades geopolíticas crecientes. La interacción entre deuda, ayuda condicionada y presencia estratégica de actores tradicionales y emergentes ha limitado la autonomía

africana, generando paradojas como la abundancia de recursos naturales frente a pobreza estructural y modernización material sin transformación social ni fortalecimiento institucional. Casos como los de Níger, Malí y Burkina Faso buscan que la soberanía, la diversificación económica, la cohesión regional y la valorización del desarrollo humano sean pilares imprescindibles para construir modelos de desarrollo autónomos y sostenibles.

En consecuencia, se recomienda fortalecer la integración regional basándose en las prioridades locales; diversificar alianzas estratégicas, equilibrando relaciones con socios tradicionales y emergentes; promover el control de recursos naturales y políticas de valor añadido local; priorizar inversiones en educación, salud, empleo juvenil y seguridad humana; y rediseñar la cooperación internacional basada en transparencia, co-construcción de políticas y resultados estructurales. Mediante estas acciones será posible reducir la dependencia, armonizar intereses africanos con agendas externas y avanzar hacia un desarrollo endógeno sostenible, capaz de garantizar estabilidad política, resiliencia económica y emancipación estratégica en el Sahel y África Occidental.

Bibliografía

- Buffa, D. y Becerra, M. J. (Eds.) (2023). *África diversa: Cuestionando los estereotipos*. 2ª Edición. Casa África y Filosafrica.
- Giri, J. (2000). *Le Sahel demain: Catastrophe ou renaissance?* París: Karthala.
- Instituto Español de Estudios Estratégicos (2023). Cuadernos de Estrategia 220. África: la ambición de las potencias mundiales sobre el continente. Madrid: Ministerio de Defensa.
- Instituto Español de Estudios Estratégicos (2024). *Cuadernos de Estrategia 224. Geopolítica del poder militar*. Madrid: Ministerio de Defensa.
- Jacquemot, P. (2025). *Avec l'Afrique, un nouveau modèle de coopération au développement*. Fondation Jean Jaurès Éditions.
- Nantulya, P. (2024). *Repenser le rôle de l'Afrique dans les relations sino-africaines : Les leçons du FOCAC*. Centre d'Études Stratégiques de l'Afrique. Disponible en <https://africacenter.org/fr/spotlight/role-afrique-relations-sino-africaines-lecons-fo-cac-2024/>
- Roca, A. y Puig, O. (Eds.) (2019). *El Sahel de las gentes: Más allá del síndrome de la seguridad*. Monografías CIDOB 74. Barcelona: CIDOB Edicions.
- Rubio Hernansáez, L. (2024). *El Sahel y el fin de la Françafrique: Una aproximación a la agonía de un modelo neocolonial*. En L. Rubio Hernansáez y E. Menchaca Arredondo (Coords.), Reflexiones críticas sobre la supremacía capitalista actual y sus rupturas (pp. 73-92). Ciudad de México: Comunicación Científica.
- Sankara, T. (1984). *Por cierto, animamos a que nos ayuden a evolucionar sin ayuda externa*. Discurso ante la ONU. Recuperado de <https://revolucioncantonal.net.wordpress.com/wp-content/uploads/2019/01/thomas-sankara-discursos.pdf>
- Sankara, T. (1987). *Discurso sobre la deuda odiosa*. XXV Conferencia de la Organización de la Unidad Africana. Recuperado de <http://ugtg.org/spip.php?article549>
- Schiere, R., Ndikumana, L., y Walkenhorst, P. (Eds.) (2011). *La Chine et l'Afrique: Un nouveau partenariat pour le développement ?* Tunis : Banque africaine de développement.
- Sogodogo, A. (2024). *Alliance des États du Sahel: Défis et perspectives*. Bamako: Friedrich-Ebert-Stiftung/Christon Éditions.

4

África Subsahariana: deuda, gobernanza y desarrollo inclusivo

por OLGA NAMASEMBE

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, África Subsahariana (ASS) ha enfrentado un aumento sostenido del riesgo de vulnerabilidad por deuda pública, pese a sus estrategias de desarrollo, reducción de pobreza y expansión de infraestructura. Según estimaciones del FMI (Fondo Monetario Internacional), la deuda pública regional pasó de cerca del 30 % del PIB en 2013 a casi el 60 % en 2022, evidenciando la magnitud del desafío (Comelli et al., 2023). El crecimiento de las cargas de deuda, el encarecimiento del servicio de intereses, los cambios en la estructura de acreedores y la reducción del espacio macrofiscal han elevado el riesgo de sobreendeudamiento. Se prevé que para 2025 los pagos de intereses de la deuda externa alcancen unos \$20 000 millones, equivalentes al 3,4 % del PIB regional entre 2025 y 2027 (Kéfi, 2025).

En este contexto, instituciones internacionales como el Banco Mundial, el FMI, los bancos regionales de desarrollo (p. ej. el Banco Africano de Desarrollo, BAfD) y los donantes bilaterales desempeñan un rol multifacético: ofrecen financiación, asesoría técnica y política, y actúan como convocantes de reformas y garantes de credibilidad, aunque enfrentan críticas por dependencia, condicionalidades y gobernanza (Instituto Tricontinental de Investigación Social, 2025).

Este capítulo analiza su influencia en el endeudamiento de la ASS, integrando perspectivas económicas, políticas y sociopolíticas, revisando trayectoria

histórica, mecanismos institucionales, efectos económicos y sociales, y concluyendo con consideraciones de política y recomendaciones.

1.1. Principales instituciones y sus funciones

El Banco Mundial y el FMI continúan siendo actores clave en la arquitectura de deuda y desarrollo del ASS. Ambos proporcionan préstamos concesionales y no concesionales, garantías, asistencia técnica y asesoramiento en políticas, mientras que organismos subsidiarios como la AIF (Asociación Internacional de Fomento) se orientan específicamente a los países de bajos ingresos. El FMI, por su parte, ofrece supervisión macroeconómica, apoyo a la balanza de pagos, financiamiento sujeto a condicionalidades y asistencia técnica especializada. A nivel regional, bancos como el BAfD financian proyectos de inversión y aportan orientación en políticas tanto a gobiernos como al sector privado. A esto se suma el papel de los donantes bilaterales tradicionales, que contribuyen mediante ayuda al desarrollo y coordinación de políticas (Banco Mundial, 2023).

En conjunto, estas instituciones configuran una red integrada de financiamiento, fortalecimiento de capacidades, marcos regulatorios y condicionalidades. Entre los mecanismos más relevantes destaca el Debt Management Facility (DMF) del Banco Mundial, desarrollado en coordinación con el FMI, cuyo objeti-

vo es mejorar los sistemas de gestión de deuda en la ASS (Banco Mundial, 2023).

Evolución histórica de la deuda en la ASS

La trayectoria de la deuda en el ASS ha atravesado varias etapas diferenciadas. En las décadas de 1970 y 1980, el endeudamiento externo creció de forma marcada, especialmente en países con abundantes recursos naturales. Este proceso desembocó en las crisis de deuda de los años 80 y principios de los 90, que hicieron necesarias iniciativas como la HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), lanzada en 1996 por el FMI y el Banco Mundial, con el objetivo de reducir la carga de la deuda externa de los países pobres más endeudados.

A partir de 2010, la deuda volvió a aumentar con mayor rapidez, tanto interna como externa, impulsada por necesidades de infraestructura, limitaciones de financiamiento doméstico y una transformación en la composición de acreedores, con mayor presencia de actores comerciales, mercados de bonos y prestamistas no tradicionales. Para 2022, más de la mitad de los países de bajos ingresos de la región fueron clasificados por el FMI como de alto riesgo o ya en situación de sobreendeudamiento (Comelli et al., 2023).

El servicio de la deuda también se ha intensificado, pasando del 16 % de los ingresos gubernamentales en 2012 al 39 % en 2019. Este incremento responde a

una mayor dependencia de préstamos comerciales más costosos, a la expansión de la deuda interna, a la depreciación de las monedas y al bajo crecimiento económico (Kéfi, 2025). Sin embargo, según el FMI, la estabilización de la deuda sigue siendo viable si los países combinan una gestión fiscal sólida, estabilidad macroeconómica, reformas estructurales e instituciones fortalecidas (Laws et al., 2025).

2. MECANISMOS INSTITUCIONALES E IMPLICACIÓN EN EL ASS

Las instituciones financieras internacionales (IFIs) y los bancos regionales interactúan con el ASS mediante diversos mecanismos. Estos incluyen operaciones de préstamo, tanto concesionales como no concesionales, junto con apoyo presupuestario y garantías; diálogo político vinculado a condicionalidades que exigen reformas macroeconómicas, estructurales y de gobernanza; asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades en gestión financiera pública, análisis de sostenibilidad de la deuda y gobernanza económica; y programas de alivio y reestructuración de deuda, como HIPC y el Marco Común del G20. Cada mecanismo busca equilibrar las necesidades financieras inmediatas con la sostenibilidad de la deuda a largo plazo, aunque sus efectos han sido variados.

Operaciones de préstamo

El Grupo del Banco Mundial (WBG) canaliza financiamiento para proyectos de desarrollo en África a través de la AIF, su ventana concesional, y del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que ofrece préstamos no concesionales. La AIF otorga financiamiento a bajas o nulas tasas de interés y con plazos prolongados, orientado a la reducción de la pobreza y al desarrollo sostenible. En el marco de IDA20 (2022–2025), se asignaron cerca de \$ 93 000 millones a nivel global, de los cuales más del 70 % se destinó al continente africano (Banco Mundial, 2023c).

El FMI complementa este apoyo proporcionando financiamiento para la balanza de pagos a corto y medio plazo mediante instrumentos como el Fondo de Crédito Ampliado (ECF), el Fondo Ampliado (EFF) y los Acuerdos Stand-By (SBA). Tras la pandemia de COVID-19, numerosos países de la ASS recurrieron a mecanismos de emergencia como el Rapid Credit Facility (RCF) y el Rapid Financing Instrument (RFI). Entre 2020 y 2023, los desembolsos del FMI a países africanos superaron los \$ 20 000 millones para apoyar la recuperación y la estabilidad macroeconómica (FMI, 2023a).

Los bancos regionales, entre ellos el BAfD y Afreximbank, aportan financiación adicional con un enfoque en infraestructura, comercio y desarrollo del sector privado. En 2022, el BAfD desembolsó aproximadamente \$ 10 000 millones en préstamos y subvenciones

a los Estados miembros africanos, con cerca del 60 % dirigido al ASS (BAfD, 2023). A su vez, los donantes bilaterales tradicionales, como Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, Japón y Francia, actúan mediante agencias como USAID, el Fondo de Desarrollo de la UE, DFID/FCDO y JICA. Muchos de estos donantes cofinancian proyectos junto al Banco Mundial y el BAfD, conformando un ecosistema de financiación interconectado y multinivel.

Condicionalidad y diálogo político

La condicionalidad continúa siendo uno de los elementos más controvertidos en la relación del FMI y el Banco Mundial con los países prestatarios. Este mecanismo implica que los gobiernos implementen un conjunto de medidas de política a cambio de recibir financiamiento. Entre ellas suelen encontrarse la consolidación fiscal, la restricción monetaria, la liberalización comercial, la privatización y reformas de gobernanza. Las críticas sostienen que estas exigencias han limitado la autonomía política, reforzado políticas de austeridad y no han logrado impulsar un crecimiento sostenible (Mkandawire, 2010; Bond, 2019). Un ejemplo emblemático son los Programas de Ajuste Estructural (SAPs) de los años 80 y 90, que impusieron estrictas medidas fiscales y monetarias, redujeron el gasto social y contribuyeron a lo que diversos académicos describen como “las décadas perdidas” del desarrollo africano (Cheru, 1999).

No obstante, los defensores de la condicionalidad argumentan que estos programas ayudaron a corregir desequilibrios macroeconómicos, recuperar la sostenibilidad externa y atraer inversión (FMI, 2023b). En años recientes, este enfoque ha evolucionado hacia un mayor énfasis en la gobernanza, la transparencia y la protección social. La Financia-

ción de Políticas de Desarrollo (DPF) del Banco Mundial incorpora hoy requisitos mínimos de gasto social, indicadores de igualdad de género y metas de resiliencia climática. De forma paralela, los programas del FMI integran cada vez más diagnósticos de gobernanza y medidas anticorrupción desde 2022.

País	Deuda/PIB (%) 2023	Servicio de deuda/Ingresos (%) 2023	Principales acreedores (participación de la deuda externa)	Riesgo de sobreendeudamiento (FMI)
Ghana	84 %	55 %	Tenedores de eurobonos 35 %; China 12 %; Multilaterales 30 %	En sobreendeudamiento
Zambia	101 %	58 %	China 30 %; Eurobonos 25 %; Multilaterales 20 %	En sobreendeudamiento
Kenia	67 %	38 %	China 21 %; Eurobonos 17 %; Multilaterales 32 %	Alto riesgo
Nigeria	38 %	22 %	Multilaterales 45 %; Eurobonos 17 %; Bilaterales 15 %	Riesgo moderado
Etiopía	53 %	30 %	China 29 %; Multilaterales 35 %; Club de París 10 %	Alto riesgo
Mozambique	99 %	50 %	Multilaterales 40 %; Eurobonos 20 %; Bilaterales 25 %	En sobreendeudamiento
Senegal	75 %	35 %	Multilaterales 40 %; Eurobonos 23 %; Bilaterales 15 %	Alto riesgo

Tabla 1: Indicadores de endeudamiento en el ASS.

Fuente: FMI (2023), Banco Mundial (2023c), BAfD (2023)..

Marcos de alivio y reestructuración de la deuda

La Iniciativa HIPC ha representado un hito clave en la reducción de la deuda de los países más pobres. Para 2020, 30 de 36 países en el África Subsahariana habían alcanzado el punto de finalización, lo que permitió otorgar más de \$ 100 000 millones en alivio de deuda (Banco Mundial, 2021). A este esfuerzo se sumó la Iniciativa Multilateral de Alivio de la Deuda (MDRI) de 2005, que canceló el 100 % de las deudas elegibles con la AIF, el FMI y el Fondo Africano de Desarrollo del BAfD (Banco Mundial, 2023b).

Más recientemente, el Marco Común del G20 para el Tratamiento de la Deuda, introducido en 2020, ha buscado mejorar la coordinación entre acreedores oficiales y privados en los procesos de reestructuración dirigidos a países de bajos ingresos. Sin embargo, su implementación ha avanzado lentamente debido a persistentes dificultades de coordinación entre distintos grupos de acreedores, especialmente entre los miembros del Club de París y nuevos prestamistas como China (Bhattacharya & Laskaridis, 2023).

La tabla refleja varios patrones clave en la deuda de los países del África Subsahariana (ASS):

- Aumento de las ratios de deuda: Muchos países superan actualmente el umbral del 55 % deuda/PIB establecido por el FMI para la sostenibilidad.

- Creciente carga del servicio de la deuda: Varios Estados destinan más de un tercio de sus ingresos gubernamentales al pago de intereses y principal.
- Composición diversificada de acreedores: Aunque los multilaterales siguen desempeñando un papel central, los acreedores comerciales y China han ganado relevancia.
- Elevado riesgo de sobreendeudamiento: Más de la mitad de los países de la ASS están clasificados como de alto riesgo o ya en situación de sobreendeudamiento.

Interpretación

Las instituciones financieras internacionales y los bancos regionales han influido en estas dinámicas de forma directa e indirecta.

1. Influencia directa: A través del financiamiento de infraestructura y programas sociales mediante préstamos concesionales, amplían el espacio fiscal y facilitan oportunidades de desarrollo.
2. Influencia indirecta: Al establecer marcos de políticas, condicionan el comportamiento de endeudamiento interno, refuerzan la disciplina fiscal y promueven normas de gobernanza.

No obstante, estas intervenciones pueden generar riesgos de dependencia o de riesgo moral. Algunos gobiernos pueden confiar excesivamente en el endeudamiento concesional en lugar de movilizar recursos internos, mientras que la aplicación de condicionalidades puede restringir la flexibilidad política.

Según el FMI (2025), la estabilización efectiva de la deuda requiere finanzas públicas sólidas, entornos macroeconómicos creíbles y reformas estructurales, objetivos que dependen tanto de la voluntad política interna como de un diseño institucional adecuado.

3. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DEL AUMENTO DE LA DEUDA

Los altos niveles de deuda imponen límites significativos a la política fiscal al desviar recursos gubernamentales hacia el servicio de la deuda. En la ASS, los pagos de deuda pasaron de un promedio del 8 % de los ingresos gubernamentales en 2010 a más del 30 % en 2023 (FMI, 2023a). Esta presión reduce los fondos disponibles para sectores esenciales como educación, salud e infraestructura. Por ejemplo, en Ghana, el servicio de la deuda representó más del 45 % de los ingresos totales del gobierno en 2023, provocando recortes sustanciales en los gastos sociales (Banco Mundial, 2023a). De manera similar, en Kenia, los pagos de intereses absorbieron cerca del 30 % de los ingresos fiscales, limitando la capacidad del país para fi-

nanciar protección social y proyectos de adaptación climática (BAfD, 2023).

Esta compresión fiscal perpetúa un ciclo de subinversión en capital humano, afectando la productividad y el crecimiento a largo plazo, una dinámica conocida como “efecto de sobreendeudamiento” (Krugman, 1988; Pattillo et al., 2002). En este contexto, los inversores anticipan que futuros impuestos o inflación serán necesarios para atender la deuda, lo que reduce los incentivos para invertir en sectores productivos.

Inestabilidad macroeconómica y Cambio

El aumento de la deuda externa genera vulnerabilidades macroeconómicas. En economías con limitada diversificación de exportaciones, el servicio de deuda denominado en moneda extranjera expone a los gobiernos a riesgos cambiarios. Durante el período 2022–2024, varias monedas de la ASS (incluyendo el cedi ghanés, el naira nigeriano y el birr etíope) se depreciaron de manera pronunciada, encareciendo el costo en moneda local del pago de la deuda (FMI, 2024).

Las presiones inflacionarias resultantes obligaron a los bancos centrales a endurecer la política monetaria, desacelerando aún más el crecimiento. El FMI (2023b) estima que los países con ratios deuda externa/PIB superiores al 60 % experimentaron un crecimiento medio anual del PIB 1,2 puntos porcentuales

inferior al de países con niveles de deuda moderados.

Inversión, crecimiento y sostenibilidad de la deuda

La deuda puede promover el crecimiento cuando los recursos prestados financian inversiones productivas cuyos rendimientos superan los costes de endeudamiento. Sin embargo, la evidencia empírica sugiere que en la ASS la gran parte del endeudamiento ha financiado consumo o proyectos de bajo rendimiento en lugar de infraestructura transformadora. Los sistemas débiles de evaluación de proyectos, la corrupción y la excesiva dependencia de contratistas externos han reducido el impacto del desarrollo de los préstamos.

Además, muchos países de la ASS padecen “restricciones presupuestarias blandas”, donde los imperativos políticos priman sobre la disciplina fiscal. Instituciones como el FMI y el Banco Mundial buscan mitigar estas debilidades mediante leyes de responsabilidad fiscal, marcos de gestión de la deuda y métricas de desempeño. No obstante, el éxito de estas medidas varía ampliamente según la capacidad de gobernanza y los incentivos políticos.

Movilización de recursos internos y esfuerzo fiscal

La elevada dependencia de financiamiento externo puede, en ciertos casos, debilitar la movilización de ingresos internos. Según la OCDE (2022), la relación impuestos/PIB promedio en la ASS fue solo del 16 % en 2021, frente al 34 % registrado en las economías de la OCDE. El FMI (2023a) identifica “brechas de esfuerzo fiscal” que oscilan entre 4 y 5 puntos porcentuales del PIB en muchos países de la región.

En respuesta, las instituciones multilaterales han centrado sus esfuerzos en fortalecer la movilización de recursos internos. La Iniciativa Tributaria de Addis, liderada por el Banco Mundial y el FMI, promueve mejoras en la administración fiscal, la ampliación de la base impositiva y la reducción de exenciones. Estas medidas buscan fomentar un círculo virtuoso de mayor autonomía fiscal y sostenibilidad de la deuda.

4. CONDICIONALIDADES Y REFORMAS

La condicionalidad es un arma de doble filo. Por un lado, ancla reformas que promueven la estabilidad macroeconómica. Por otro, puede imponer medidas de austeridad políticamente costosas que exacerban la pobreza y la desigualdad.

Por ejemplo, la Extended Credit Facility del FMI en Ghana en 2023 exigió consolidación fiscal y medidas de in-

gresos internos. Aunque estas acciones restauraron la estabilidad a corto plazo, los críticos argumentaron que la eliminación de subsidios y la congelación de salarios profundizaron las dificultades sociales (PNUD, 2024). De manera similar, el programa del FMI en Zambia en 2021 requirió la eliminación de subsidios a los combustibles y reformas en empresas estatales, medidas que fueron rechazadas por sindicatos y grupos de la sociedad civil.

Esta tensión refleja un dilema más amplio: ¿Debería la sostenibilidad de la deuda prevalecer sobre el bienestar social? Muchos académicos abogan por una “condicionalidad pro-pobre”, en la que las medidas de ajuste se secuencian para proteger a los grupos vulnerables (Clift, 2021). El FMI ha incorporado gradualmente niveles mínimos de gasto social e indicadores de género en sus programas, aunque la implementación sigue siendo desigual.

Financiación del desarrollo y brecha de infraestructura

Se estima que la ASS enfrenta una brecha anual de financiación de infraestructura de \$ 130–170 mil millones (BAfD, 2023). Si bien las instituciones multilaterales financian parte de esta brecha, la región recurre cada vez más a los mercados de eurobonos y a prestamistas no tradicionales (notablemente China). Esta diversificación tiene beneficios, como mayores opciones de financiación, pero

también riesgos especialmente la fragmentación de la coordinación entre acreedores. Cuando coexisten múltiples acreedores con prioridades diferentes, la reestructuración se vuelve compleja, como se observó en las prolongadas negociaciones de Zambia (Bhattacharya & Laskaridis, 2023). Para abordar estos desafíos, las instituciones promueven modelos de finanzas combinadas que integran préstamos concesionales, subvenciones y capital privado. Adicionalmente, el BAfD promueve bonos verdes e intercambios deuda-por-naturaleza, como se ha probado en Gabón y Seychelles. Estas innovaciones podrían aliviar las cargas de deuda mientras impulsan la adaptación climática, una preocupación crítica para la ASS, una de las regiones más afectadas por el cambio climático (BAfD, 2024).

5. GOBERNANZA Y CALIDAD INSTITUCIONAL

La calidad de la gobernanza tiene un impacto significativo en la efectividad de las intervenciones institucionales. La debilidad en la gestión financiera pública, la corrupción y la inestabilidad política disminuyen los beneficios del financiamiento externo destinado al desarrollo. Según Transparency International (2024), el 80 % de los países de la ASS obtuvieron menos de 50 puntos en el Índice de Percepción de la Corrupción.

El Banco Mundial (2022) indica que cada incremento de un punto en su Índice

dice de Efectividad Gubernamental se asocia con una reducción de 0,7 puntos porcentuales en la ratio deuda/PIB a lo largo de cinco años. En contraste, en estados con gobernanza deficiente, los préstamos externos tienen mayor probabilidad de financiar gasto recurrente o de ser desviados para fines de captura de rentas. Reconociendo esto, las IFIs integran cada vez más diagnósticos de gobernanza en los marcos de préstamo. El Framework for Enhanced Governance del FMI de 2018 identifica la corrupción como un tema macrocrítico. La agenda Governance and Institutions del Banco Mundial promueve la transparencia presupuestaria, la capacidad de auditoría y la participación ciudadana.

Ejemplos de progreso incluyen las reformas de gestión financiera pública de Ruanda, que mejoraron la eficiencia del gasto y redujeron fugas, generando gran confianza entre los donantes (Banco Mundial, 2023b). En cambio, en países como Mozambique, los escándalos de deuda oculta con préstamos no revelados erosionaron la confianza y provocaron suspensiones de ayuda (Hanlon, 2018).

Las intervenciones institucionales interactúan con la política interna. La implementación de reformas depende de los incentivos de las élites, la política de coalición y la confianza pública. En algunos casos, los líderes utilizan los programas de los donantes para consolidar poder, aplicando reformas selectivamente para premiar a sus partidarios (Whitfield & Fraser, 2010). Esta politización explica por qué programas similares del

FMI o del Banco Mundial producen resultados divergentes en la ASS.

6. DESIGUALDAD Y DEPENDENCIA INSTITUCIONAL

Algunos críticos sostienen que la dependencia de la financiación multilateral y bilateral perpetúa la subordinación de los países y limita su soberanía de política. Estructuralistas como Rodney (1972) y Mkandawire (2010) argumentan que la integración de África en el sistema financiero global mantiene a la región en una posición subordinada, donde las instituciones externas determinan las prioridades de política.

Esta crítica se reavivó durante la pandemia de COVID-19, cuando numerosos países de la ASS se vieron obligados a recurrir al apoyo del FMI a pesar de la oposición interna. Grupos de la sociedad civil en Kenia y Nigeria cuestionaron la legitimidad democrática de las reglas fiscales impuestas desde el exterior (Bond, 2019).

No obstante, otros analistas sostienen que la vinculación con las IFIs puede fortalecer la credibilidad, atraer capital privado e imponer disciplina fiscal que de otro modo resultaría políticamente difícil de implementar (Collier, 2007). Por tanto, el desafío no radica en desvincularse de estas instituciones, sino en reequilibrar las relaciones hacia un marco de rendición de cuentas mutua.

Impacto de la desigualdad

Los estudios empíricos muestran que los programas del FMI y del Banco Mundial tienen efectos mixtos sobre la desigualdad. Por un lado, los beneficios de la estabilidad macroeconómica pueden reducir la inflación, que actúa como un impuesto regresivo sobre los países más pobres. Por otro, las medidas de austeridad pueden limitar el acceso a servicios esenciales. Episodios de consolidación fiscal en la ASS se han asociado con aumentos a corto plazo de la pobreza y la desigualdad. En contraste, los países que combinaron estabilización con gasto dirigido en protección social, como el Productive Safety Net Program de Etiopía, cofinanciado por el Banco Mundial, obtuvieron mejores resultados. Esto resalta que el diseño distributivo de los programas es crucial. Actualmente, las instituciones priorizan marcos de crecimiento inclusivo, equidad de género y redes de protección social como componentes esenciales de la sostenibilidad de la deuda.

Narrativas emergentes: hacia la agencia africana

Investigaciones recientes destacan un creciente protagonismo de los países africanos en la negociación con las instituciones financieras internacionales. Cada vez más, los Estados diversifican sus socios, incluyendo China, India, Estados del Golfo y mercados privados, lo que

les otorga mayor margen para influir en la condicionalidad de los préstamos. El BafD, además, impulsa una “voz africana” en la reforma de la arquitectura de deuda global, promoviendo mecanismos de reestructuración más equitativos y el acceso a Derechos Especiales de Giro (DEG).

Un ejemplo relevante es la Iniciativa Bridgetown de 2022, liderada por Barbados y respaldada por varios Estados africanos, que propone un nuevo pacto financiero global enfocado en la resiliencia climática y la equidad en la deuda (Mottley & Adesina, 2022). Estos desarrollos reflejan un cambio gradual de una posición de dependencia pasiva hacia una implicación más estratégica y asertiva de los países africanos.

Conclusión y Recomendaciones

El África Subsahariana está viendo crecer rápidamente su deuda pública debido a la expansión de proyectos de infraestructura, la limitada capacidad fiscal de los Estados y la frecuencia de choques externos. Aunque instituciones como el Banco Mundial, el FMI y el BafD siguen siendo fundamentales por el financiamiento y la asistencia que ofrecen, también reciben críticas por generar dependencia, imponer condiciones rígidas y provocar efectos sociales negativos. Por ello, es necesario replantear la relación entre estas instituciones y los gobiernos africanos para asegurar una deuda sostenible y un desarrollo más inclusivo y resiliente.

En materia fiscal, los gobiernos africanos podrían ampliar y diversificar su

base tributaria mediante sistemas fiscales digitales, menos exenciones y un mayor cumplimiento, lo que podría reducir la dependencia del endeudamiento externo. También es clave mejorar la transparencia en la gestión de la deuda, publicar pasivos contingentes y reforzar la supervisión parlamentaria para evitar deuda oculta y fortalecer la confianza pública.

La sostenibilidad de la deuda debe ir acompañada de políticas que protejan el gasto en salud, educación y protección social, reduciendo la desigualdad y apoyando la productividad futura. La cooperación regional y la negociación conjunta siguen siendo herramientas esenciales para mejorar la posición de los países africanos frente a acreedores públicos y privados.

Por su parte, las instituciones financieras internacionales y los donantes podrían adaptar sus condicionalidades al contexto de cada país, aplicarlas gradualmente e incorporar evaluaciones de impacto social. En la cumbre de líderes del G20 en Sudáfrica de 2025, se avanzó hacia una reforma del Common Framework, con un acuerdo preliminar para involucrar más a los acreedores privados y agilizar las reestructuraciones, lo que apunta a un sistema más transparente e inclusivo. De manera similar, en la Conferencia de Sevilla 2025 se subrayó la necesidad de una nueva gobernanza financiera basada en la corresponsabilidad, la transparencia y una representación más equilibrada. Allí se destacaron compromisos para mejorar la divulgación de datos y fortalecer el papel de los

bancos regionales de desarrollo como socios en pie de igualdad.

En conjunto, tanto la cumbre de G20 de Sudáfrica como la Conferencia de Sevilla reforzaron la urgencia de reformar la gobernanza interna de las IFIs. Además, aumentar la representación africana en la toma de decisiones permitiría crear instituciones más legítimas y políticas mejor adaptadas a las realidades económicas y sociales del continente.

Bibliografía

- Banco Mundial. (2022). *Governance indicators and debt sustainability*. Washington, DC: World Bank.
- Banco Africano de Desarrollo (BAfD). (2024). *African Green Finance Framework: Pathways to Sustainable Development*. Abidjan: AfDB.
- Comelli, F., David, A., Eyraud, L., Kovacs, P., Montoya, J., & Sode, A. (2023, September 26). *How to avoid a debt crisis in Sub-Saharan Africa*. International Monetary Fund. <https://www.imf.org/en/news/articles/2023/09/26/cf-how-to-avoid-a-debt-crisis-in-sub-saharan-africa>
- Fondo Monetario Internacional (FMI). (2025). *Breaking the trend: Debt stabilization in Sub-Saharan Africa*. IMF Notes.
- Laws, A., Lemaire, T., Pafadnam, R., Spatafora, N., & Khandelwal, K. (2025, April 25). *Breaking the trend: Debt stabilization in Sub-Saharan Africa*. International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9798229008679.068>
- Ndikumana, L., & Boyce, J. K. (2011). *Africa's odious debts: How foreign loans and capital flight bled a continent* [Las deudas odiosas de África: Cómo los préstamos extranjeros y la fuga de capitales desangraron un continente]. Zed Books.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *Revenue statistics in Africa 2022* [Estadísticas de ingresos en África 2022]. OECD Publishing.
- Ortiz, I., & Cummins, M. (2022). *Fiscal austerity, inequality and poverty in Africa* [Austeridad fiscal, desigualdad y pobreza en África]. UNICEF Working Paper.
- Pattillo, C., Poirson, H., & Ricci, L. (2002). *External debt and growth* [Deuda externa y crecimiento] (IMF Working Paper No. 02/69). International Monetary Fund.
- Rodney, W. (1972). *How Europe underdeveloped Africa* [Cómo Europa subdesarrolló a África]. Bogle-L'Ouverture Publications.
- Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index 2024* [Índice de Percepción de la Corrupción 2024]. TI Secretariat.
- van Waeyenberge, E. (2018). Debt, development and the IMF in Africa [Deuda, desarrollo y el FMI en África]. *Development and Change*, 49(2), 466–493. <https://doi.org/10.1111/dech.12375>
- Whitfield, L., & Fraser, A. (2010). Negotiating aid: The structural conditions shaping the bargaining power of African governments [Negociando la ayuda: Las condiciones estructurales que dan forma al poder de negociación de los gobiernos africanos]. *International Negotiation*, 15(3), 341–366. <https://doi.org/10.1163/157180610X524151>
- World Bank. (2021). *Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative and Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI): Status of implementation* [Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) e Iniciativa de Alivio de la Deuda Multilateral (IADM): Estado de implementación]. World Bank.
- World Bank. (2023b). *Debt Management Facility annual report 2023* [Informe anual 2023 del Mecanismo de Gestión de la Deuda]. World Bank.

5

El desafío africano ante el nuevo escenario para la cooperación española y europea

por PABLO MARTÍNEZ OSES *y* JOSÉ JAVIER SASTRE APARISI

1. INTRODUCCIÓN

África es el segundo continente más grande del mundo tanto en superficie como en población, con una gran abundancia de recursos naturales y la población más joven y de más rápido crecimiento del mundo (doblará su población en 2050 hasta 2.500 millones de personas). Sin embargo, a pesar de este potencial, alberga a una parte significativa de las personas más pobres del mundo. Actualmente, 571 millones de personas africanas viven en pobreza multidimensional y dos de cada tres personas en el mundo afectadas por la inseguridad alimentaria habitan el continente.

La pobreza en África es un problema complejo, con dimensiones sociales, políticas e históricas que requieren una comprensión profunda y un compromiso conjunto de sus estados, la comunidad internacional y el resto de actores para erradicarla. La pobreza no se puede entender sin analizar sus causas subyacentes interrelacionadas, entre las que se encuentran la crisis climática y los conflictos que afectan a la seguridad y protección de la población. Pero, sobre todo, no se puede desvincular de la crisis de desigualdad que azota al continente. Este no es sólo un reto económico contemporáneo, sino un legado histórico que sigue configurando el panorama socioeconómico, fruto de estructuras coloniales y poscoloniales que han facilitado un acceso desproporcionado a la propiedad, el capital, los mercados y el espacio político, lo que ha permitido a unos po-

cos acumular una riqueza extraordinaria y ha relegado a la mayoría a la periferia económica (Anthony, K., C Christian, H., 2025). África alberga 10 de los países más desiguales a nivel mundial (con una concentración en el sur de África) y casi la mitad de los 50 más desiguales, mientras que desde 2020, los ingresos medios del 1 % más rico de África han aumentado cinco veces más rápido que los del 50 % más pobre.

Una África sin pobreza ni desigualdad es posible y es una opción elegible. La Agenda 2063 de la Unión Africana (UA) es una gran oportunidad para África y su población, tiene como objetivo el desarrollo inclusivo y sostenible, además de ser una manifestación concreta del impulso panafricano por la unidad, la autodeterminación, la libertad, el progreso y la prosperidad colectiva que se persigue en el marco del panafricanismo y el renacimiento africano, incluido el auge del feminismo africano. Igualmente, el compromiso de la Unión Africana de reducir la desigualdad en un 15 % durante la próxima década representa una esperanza para la región.

2. ÁFRICA Y LA AOD EUROPEA Y ESPAÑOLA

El continente africano ha sido históricamente un gran receptor de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD). La Unión Europea (UE) y sus Estados Miembros han venido actuando como importantes donantes a la región. Si consideramos la

cooperación de la Comisión Europea, la del Banco Europeo de Inversiones, y la de los Estados Miembros, se aglutinan 29 donantes distintos. En su conjunto, es el donante más importante a escala global y también un actor político crucial, con una gran influencia sobre las agendas políticas internacionales. Según los datos reportados a la OCDE, de manera agregada se destinaron del 2011 al 2023 163.000M€ al continente africano, por delante de lo destinado a Asia (106.000M€) o a América (30.700M€), convirtiéndose en el mayor donante mundial en la región.

Europa es conocedora de la interdependencia y conexión de su futuro y el de África. El continente africano tiene un inmenso potencial económico, una gran influencia geopolítica (por ejemplo, sus países controlan más del 40 % de los votos en la ONU) y experimenta un importante crecimiento demográfico, por lo que su alianza es esencial para abordar retos comunes como el desarrollo humano, el crecimiento inclusivo y sostenible, el cambio climático y la degradación medioambiental, la migración y movilidad, así como la promoción de la gobernanza, la democracia y los derechos humanos. A su vez, la región del Sahel, a las puertas de Europa, considerada como prioritaria, se encuentra sumida en una crisis multidimensional, en la que confluyen los conflictos, los eventos climáticos extremos, los desplazamientos forzados, la falta de seguridad alimentaria y los riesgos de protección.

La orientación política de la UE y sus Estados Miembros se cimienta en el Consenso Europeo sobre Desarrollo (2017), que define su visión política y objetivo principal, que pasa por erradicar la pobreza y aplicar la Agenda 2030. La Asociación África – Unión Europea se constituye en el año 2000. La declaración final de la VII cumbre UE-UA, celebrada en Luanda los días 24 y 25 noviembre 2025, refuerza su compromiso con el multilateralismo expresando su preocupación “por el incremento de violaciones del derecho internacional humanitario”.]La Cumbre refuerza el vínculo estratégico con el Plan África 2063 y “llama a una ambiciosa agenda post2030”. Las áreas de prosperidad compartida, paz, seguridad y gobernanza democrática, y una alianza reforzada para las migraciones y la movilidad constituyen los ejes estratégicos birregionales.

El actual compromiso financiero de la UE con la región quedó plasmado en el Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (NDICI - Global Europe), aprobado en junio del 2021. En el período 2021-2027, la región de África Subsahariana ha sido a la que se le asignó un mayor presupuesto con un total de 29.181M€ sobre el total del 79.500M€.

España por su lado, destinó a la AOD 3.880 y 4.350 millones de dólares en 2023 y 2024 respectivamente, y se espera un notable incremento en los próximos años para alcanzar el 0,7% de AOD/RNB en 2030, mandato establecido por su nueva legislación (Ley 1/2023). Las

proyecciones cifran el 0,7% para 2030 en torno a los 14.000M€, de los que, de mantenerse la distribución geográfica actual (16,1% de la AOD bilateral se destina a África) tendríamos cerca de 2.000M€ de AOD española para África. Esto significa multiplicar diez veces la ayuda actual (251,2M\$ en 2023). Dado que España acaba de concluir la reforma legal y estructural de su sistema de cooperación, es razonable esperar que en los próximos años se recuperen las cifras de AOD destinadas a África en el periodo 2008-2010 por encima de los 1.200M U\$.

Durante los primeros años del siglo XXI, la cooperación española con África estuvo marcada por una expansión geográfica y temática más pragmática.

A partir de la década de 2010, la cooperación española evoluciona hacia un modelo más estratégico y técnico como se observa en el III Plan África (“España y África: desafío y oportunidad”), que busca no solo ayuda tradicional sino también apoyo a la paz, la gobernanza democrática y la integración regional. Asimismo, España intensifica sus líneas de cooperación con la Unión Africana /AUDA-NEPAD, contribuyendo a pilares de desarrollo económico, social y de seguridad. Los Marcos de Asociación País (MAP) —como el firmado con Etiopía para 2022- 2027 que se suma al anterior con Senegal— pretenden reflejar una cooperación más alineada con las políticas nacionales africanas.

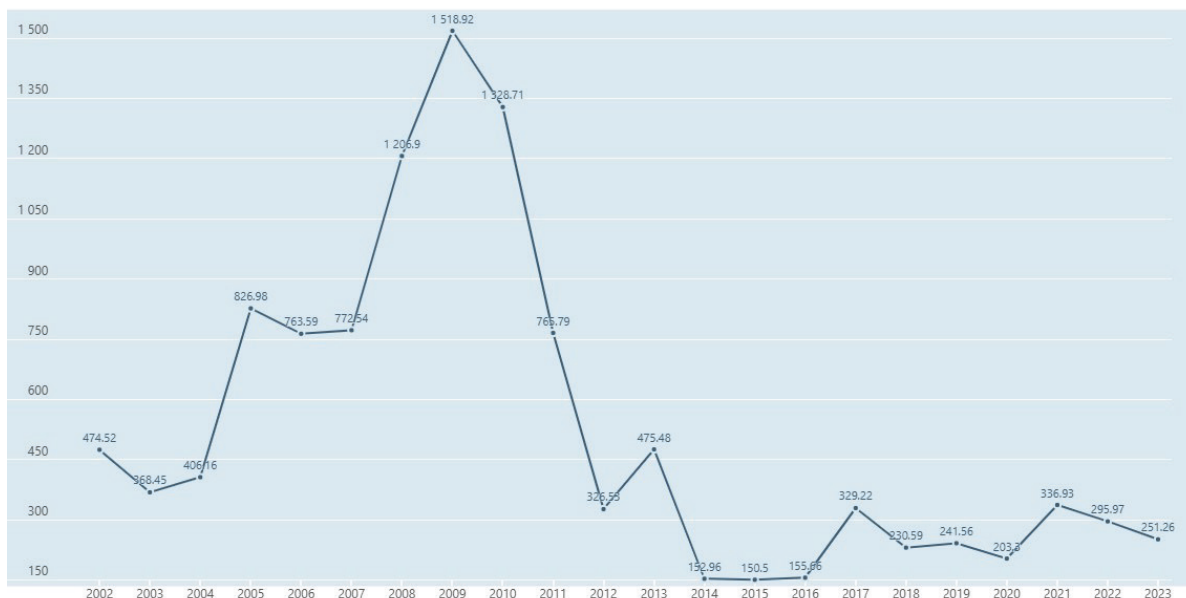


Gráfico 1: CRS: Creditor Reporting System (flows).

Fuente: OECD.

Con el lanzamiento de la Estrategia España-África 2025-2028, quiere marcar una nueva etapa: no solo cooperación al desarrollo, sino una relación estratégica amplia basada en cinco pilares (“reforzar, crecer, conectar, proteger y convivir”) y 100 líneas de acción concretas. Se busca enfatizar el desarrollo inclusivo centrado en la juventud, la seguridad, la migración ordenada, y la gobernanza democrática. La nueva estrategia ha asumido las principales críticas estructurales del III Plan África, especialmente en cuanto a la delimitación geográfica y la coordinación interministerial, al tiempo que alinea la acción exterior con los nuevos enfoques transversales (feminismo, clima) que el Instituto de Evaluación de Políticas Públicas (IEPP) recomendó reforzar (IEPP, 2022).

Mientras que los planes África anteriores, se limitaban principalmente a África Subsahariana, la nueva Estrategia 2025-2028 abarca por primera vez todo el continente africano. Este nuevo enfoque responde a la necesidad de un tratamiento unitario dada la interdependencia y la evolución política del continente, prestando una atención especial a la vecindad africana de España, compuesta por África Occidental y el Norte de África. Su debilidad más notable reside en la financiación. No destinar los recursos necesarios socavaría los objetivos de la estrategia, evidenciando que la AOD sigue siendo percibida como una “aportación voluntaria y generosa de los donantes” en lugar de una obligación reparadora (Nocerino, S., 2025)

orientada estratégicamente a las prioridades de los socios.

Un segundo déficit se encuentra en el reto estructural de descolonizar la cooperación y transformar las relaciones de poder, un debate que el III Plan África anterior omitía explícitamente, pero que se reconoce como un camino pendiente en el sistema de cooperación español reformado por la nueva Ley de 2023 (Martínez Osés, 2025). La nueva Estrategia, a pesar de buscar una asociación basada en la “igualdad y el respeto mutuo”, y promover el diálogo con la afrodiáspora y la sociedad civil, opera dentro de un sistema que tradicionalmente privilegia las visiones e intereses de los donantes del Norte global. Además, el Consejo de Cooperación (2024) ya había advertido que la incorporación de la perspectiva decolonial debe implicar una revisión sistemática y profunda de todo el sistema de cooperación y de las relaciones de poder. Por lo tanto, el problema radica en que, a pesar de la retórica de un “partenariado renovado”, la nueva estrategia corre el riesgo de mantener las estructuras de poder verticales y coloniales preexistentes, donde el Norte sigue definiendo prioridades y manteniendo el control sobre la mayor parte de los recursos.

3. LA REDUCCIÓN DE LA AOD Y SUS IMPACTOS: ROL DE LA UNIÓN EUROPEA Y ESPAÑA

La UE se enfrenta a un contexto mundial en rápida evolución, marcado por la rivalidad geopolítica, la incertidumbre económica, los riesgos climáticos y el debilitamiento del sistema multilateral. La UE se ha caracterizado por ser un socio estable, capaz de impulsar valores como la democracia y los derechos humanos y de promover el desarrollo sostenible (Veron, 2025). Sin embargo, los múltiples acontecimientos en los últimos años, han provocado cambios significativos en el modelo de presencia: la recuperación tras el COVID-19, la guerra en Ucrania, el impulso de los procesos soberanistas en el Sahel (particularmente en Mali, Burkina Faso y Níger) que se ha traducido en la ruptura de la CEDEAO y la salida de Francia de la región, la reafirmación de la presencia de grandes potencias (China, Rusia, Turquía) y el reciente desmantelamiento de USAID.

El 20 de enero de 2025, primer día de mandato del presidente Donald Trump, el Gobierno de Estados Unidos congeló su ayuda exterior bajo el argumento de que no se alinea con sus intereses y su agenda “America First” y que, en muchos casos, es incluso contraria a los valores del país. Cuatro días después, se dio la orden de suspensión de actividades. En consecuencia, organizaciones dependientes de sus fondos, muchas de ellas locales, se han visto abocadas a la reducción drástica de su trabajo o incluso a su desaparición.

Mientras tanto, los grandes donantes europeos, como Alemania, Reino Unido o Francia han reducido su AOD en el 2024, año en el que ésta ha caído un 9% en términos netos, y además anuncian nuevos recortes para 2025, cuando la OCDE prevé una caída de entre el 9% y el 17% de la AOD (OCDE, 2025). Otros países como Bélgica, Suecia, Finlandia, Austria, Suiza o Países Bajos se suman al anuncio de recortes para el período 2025-2027 (Birkwood, 2025). Así, la OCDE prevé que en 2027 la AOD retroceda a los niveles de 2020. Estas medidas han de enmarcarse en el contexto de la emergencia de propuestas políticas y discursivas de naturaleza renacionalizadoras y negacionistas, aunque se justifiquen por necesidades de control del déficit o por la necesidad de aumentar el gasto militar (Oxfam Intermón, 2025).

África Subsahariana podría sufrir una caída de entre el 16% y el 28%, viéndose especialmente afectada como región junto a los Países Menos Adelantados (33 de los 46 países del África subsahariana son PMA), donde la inversión extranjera es escasa y la AOD representa una parte importante de la Renta Nacional Bruta y del presupuesto nacional, representando la mayor parte de los flujos financieros internacionales.

En este contexto internacional, lo verdaderamente preocupante son las necesidades que se quedan por cubrir a nivel global en términos humanitarios y de desarrollo. Esta reducción presupuestaria se produce en un momento en que la desigualdad, la inestabilidad,

el hambre y los retos humanitarios están aumentando y el sistema mundial para hacerles frente ya está sobrecargado (Oxfam, 2025) y tendrá un impacto directo sobre los países más pobres y los servicios esenciales que, de mantenerse, se traducirá en el sufrimiento de millones de personas.

El debate internacional se centra en cómo cubrir esta importante brecha. Desde distintos países receptores e instancias de la sociedad civil y del sistema multilateral, se esperaría que la UE y sus Estados Miembros siguieran siendo un motor internacional en la financiación de la Ayuda Oficial al Desarrollo y la defensa de los valores. Pero lo cierto es que el impacto de la guerra en Ucrania, la aceleración de la inflación y la crisis del costo de vida en muchos países, y el impulso a la agenda de defensa (Ahmar C Bergogné, 2025) unido a la complejidad geopolítica y a la falta de una visión común en el seno de la Unión Europea y sus instituciones, ha impedido que se haya adaptado el presupuesto actual para dar pasos firmes en esta dirección.

Por el contrario, en los últimos años, la UE ha querido dar un paso más hacia un nuevo paradigma respecto a su acción exterior, que permita alinearla de manera más activa a sus propias ambiciones e intereses geopolíticos. En este sentido se concibe la estrategia Global Gateway, que busca movilizar hasta 300.000 millones de euros de inversión entre 2021 y 2027 en cinco áreas prioritarias (sector digital, clima y energía, transporte, salud, y educación e investigación). con

la aspiración de atraer capital privado, aunque lo cierto es que a día de hoy su principal fuente de financiamiento es el presupuesto de cooperación para el desarrollo de la UE.

La UE ha evitado nombrar la creciente presencia geopolítica y económica de China, pero es un secreto a voces que busca con esta nueva orientación promoverse como una alternativa sostenible (o una oferta positiva, como la llamó la Comisaria Von der Leyen) y basada en los valores europeos, que pueda competir de manera directa con la Iniciativa de la Franja y la Ruta china, asegurando las oportunidades para las empresas europeas.

El actual dilema de la UE es poder compatibilizar sus propios intereses económicos y sus objetivos de política exterior, con impacto en términos de desarrollo en sus países socios. Las acciones de la UE para implementar la Global Gateway corren el riesgo de contradecir sus propios compromisos de mantener altos estándares de derechos humanos, sociales y laborales, crear asociaciones entre iguales en lugar de dependencias y ofrecer una agenda de inversión democrática. Existen serias dudas que deben abordarse sobre si una estrategia que parece estar construida sobre la base de los intereses geopolíticos, económicos y corporativos de la UE puede realmente cumplir sus objetivos de desarrollo (Counter Balance, Eurodad C Oxfam, 2024) y sobre cómo esto puede afectar a su credibilidad.

Desde julio de 2025, cuando la Comisión Europea ha presentado su pri-

mer borrador para el próximo Marco Financiero Plurianual que cubrirá el período 2028-2034, se han iniciado las conversaciones para acordar el nuevo presupuesto. Cabe celebrar la propuesta de aumentar sustancialmente la financiación destinada a la acción exterior, aunque preocupa la priorización de las partidas para la Ampliación y Vecindad, Oriente Medio, Norte de África y el Golfo, sean en detrimento a la financiación asignada al África subsahariana, donde las necesidades son mayores. Esta inquietud se ve reforzada por el hecho de que, según el principio de flexibilidad que plantea la Comisión, la financiación podría transferirse fácilmente de una región a otra, lo que perjudicaría la previsibilidad de la financiación.

Por su lado, España ha destacado, junto a un grupo reducido de países donantes, no sólo por declararse en contra de los recortes de AOD ante la actual policrisis, sino que se ha mostrado muy activa en posicionar su apuesta por el multilateralismo y la cooperación internacional como principal vía para enfrentar los problemas y desafíos comunes. En este sentido, España ha destacado por su labor como anfitriona de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo y por mostrar su compromiso para avanzar medidas concretas coherentes con una mayor justicia económica internacional en diversas propuestas en el marco de la Plataforma de Acción de Sevilla. Tanto en el ámbito de la justicia fiscal, lanzando junto con Brasil y Sudáfrica la iniciativa para esta-

blecer un impuesto a los millonarios, como en el ámbito de la deuda externa promoviendo mecanismos avanzados para su gestión, así como reforzando y poniendo en valor la recientemente culminada reforma de su sistema de cooperación internacional que supone una renovación del compromiso del 0,7% de la RNB para la AOD, y de aumentar la Acción Humanitaria hasta el 10% de la AOD, ahora como mandato legal.

4. MIGRACIONES Y CLIMA: AGENDAS TENSIONADAS EN DOS PRIORIDADES AFRICANAS

La inestabilidad política, la profunda desigualdad económica y la crisis climática en África, han intensificado la migración y la crisis de los refugiados, convirtiéndola en una preocupación humanitaria fundamental. Como afirma la UA, África representa el 14 % de la población migrante mundial, en comparación, por ejemplo, con el 41 % de Asia y el 24 % de Europa. Esto hace necesario volver a contar la historia, que trata en gran medida de la migración intraafricana, en contraposición a las narrativas negativas que se tienen de la migración irregular desde África hacia Europa. Aun considerando la grave crisis humanitaria que conlleva la migración de muchas personas, hay historias positivas que contar sobre la migración tanto dentro como fuera de África, centradas en la transferencia de capacidades dentro de África, y la recepción de remesas. Duran-

te la última década, los flujos de remesas se duplicaron, alcanzando los 100.000 millones de dólares en 2022, superando los fondos recibidos a través de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y la Inversión Extranjera Directa (IED).

En este marco, cabe recordar que, en ocasiones, la UE ha medido el éxito de sus intervenciones en función de la reducción de los flujos migratorios hacia su territorio, en lugar de por los resultados de desarrollo de las comunidades locales (Oxfam, 2020). Cuando la política de desarrollo se vincula a los objetivos de los asuntos internos europeos, se socava la resiliencia, el desarrollo económico y la movilidad humana, factores que podrían contribuir a mejorar la vida de las personas en África.

En este sentido, la Unión Africana y la UE deben colaborar más estrechamente para mejorar la cooperación en materia de migración y movilidad como proceso legítimo, aumentando las oportunidades de migración legal y las políticas migratorias humanas y justas. Además, tanto la UE como España tienen entre sus compromisos en materia de coherencia de políticas, el de conocer, evaluar y minimizar los impactos de sus políticas que sean contrarios a los principios del desarrollo sostenible.

En este momento, en el que algunos discursos anti-inmigración de carácter xenófobo se van abriendo camino, resuena con fuerza la idea de condicionalidad de la ayuda vinculada a la cooperación en términos de readmisión de personas a los países donde ostentan la naciona-

lidad. Esta condicionalidad no sólo puede erosionar la confianza, fomentando relaciones asimétricas entre la UE y sus socios, sino que es reprochable en términos de empleo de los fondos de AOD, y podría redundar en una menor influencia geopolítica y atractivo como socio de la UE. En este sentido, la UE debe imponerse un límite máximo de su presupuesto de Acción Exterior para las políticas migratorias, a fin de evitar que los vaivenes políticos impongan esta agenda por delante del resto de objetivos. La declaración final de la VII Cumbre UE-AU recoge la voluntad de ambas partes de “reforzar la cooperación” para “prevenir la migración irregular, combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas”. También apunta a la necesidad de “fortalecer la capacidad de gestión fronteriza y mejorar el retorno, la readmisión y la reintegración sostenible”, todo ello en el marco de los derechos humanos y las obligaciones internacionales.

En este mismo sentido, la AOD destinada a clima para África está lejos de cumplir los compromisos adoptados y las cifras adecuadas. Sin entrar aquí en la consideración sobre la adicionalidad de los fondos climáticos, no hay duda de la transversalidad de los desafíos climáticos en África. La relación con su desigualdad, así como la urgencia para lograr transiciones justas del modelo energético son imperativos que trascienden las capacidades y el poder efectivo de las naciones africanas, precisando acuerdos que regulen las acciones y evalúen los impactos de actores internacionales

estatales y no estatales. Las emisiones derivadas de las inversiones de 308 mil millones alcanzaron un total de 586 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2024, una cantidad superior a las emisiones conjuntas de 118 países; si estas personas fuesen un país, serían el decimoquinto más contaminante del mundo, por delante de Sudáfrica (Dabi et al, 2025).

Por su parte, la financiación climática internacional de España muestra un sesgo notable hacia objetivos de inversión comercial. En un estudio publicado recientemente se observa que, entre 2017 y 2023, la mayoría (70%) se ha compuesto de mecanismos financieros destinados a facilitar la inversión en proyectos de infraestructuras energéticas y de transporte en países de renta media y alta, con fuerte implicación de grandes empresas españolas. Estos proyectos incluyen infraestructuras de transporte metropolitano en grandes capitales, algunas africanas, (entre ellas El Cairo, Casablanca, Tel Aviv), inversiones ferroviarias en Egipto o grandes plantas renovables en países como Marruecos o Angola (Martín Casas, 2025). Los mecanismos principales incluyen préstamos no concesionales, seguros de crédito a la exportación y avales financieros, algunos de los cuales pueden no llegar a desembolsarse. Esta práctica representa una instrumentalización de la financiación climática española, orientada más a generar oportunidades de negocio para empresas privadas que a prioridades como la adaptación y la compensación

por pérdidas y daños en los países más empobrecidos.

En este caso, el nuevo contexto geopolítico internacional marcado por las presiones competitivas y el incremento del gasto en defensa y armamento, tensionan las agendas de transición energética y ecológica que habían protagonizado parte de los impulsos políticos europeos hasta ahora, con un alto riesgo de aplazamiento y dilución de los objetivos de descarbonización e incorporación de criterios de sostenibilidad medioambiental en todas las fases de los procesos de producción.

5. PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES PARA LA JUSTICIA GLOBAL EN ÁFRICA

África es mucho más que una región con atractivos recursos primarios para las disputas geopolíticas entre grandes potencias. Tras décadas de colonialismo y neocolonialismo hay políticas de cooperación que pretenden refundar las relaciones mutuas en una lógica basada en los intereses comunes y los bienes públicos regionales y globales, antes que servir a los intereses privados de actores con relevancia global. Estas políticas de cooperación en proceso de renovación, que pretenden situar en el centro las visiones y preferencias de los territorios y comunidades más vulnerables tampoco están exentas de riesgos, presionadas por un contexto mundial de auge de los autoritarismos, estrechamiento del es-

pacio cívico y debilitamiento del multilateralismo democrático.

La cooperación de la UE y sus Estados Miembros puede ser la herramienta más potente para promover la estabilidad, prosperidad y el respeto a los acuerdos internacionales en el continente africano. El presupuesto en acción exterior es clave para hacer frente a las múltiples crisis interconectadas que vive el mundo actual. En este sentido, tanto en el proceso de negociación del próximo MFF europeo, como en el prometido incremento de AOD en el caso español, será fundamental mantener la vigilancia y la influencia para que se aumenten eficazmente los presupuestos destinados a desarrollo humano y sostenible para África.

En relación al MFF 2028-2034, será clave lograr un equilibrio entre la flexibilidad necesaria para adaptarse a imprevistos y crisis sobrevenidas, y la predictibilidad que asegure la estabilidad y sostenibilidad de las intervenciones acordadas en base a las prioridades regionales y globales junto a los Estados Miembros y el Parlamento Europeo, para asegurar la predictibilidad de los fondos que permitan planificar las intervenciones y asegurar la sostenibilidad de las organizaciones que las impulsan.

Será igualmente de suma importancia garantizar que una parte ambiciosa y fija de la financiación se ajuste a las normas de la ayuda oficial al desarrollo (AOD). Es preocupante, por otro lado, la falta de objetivos de gasto que garanticen que la financiación se destine a ámbitos fundamentales para lograr el

desarrollo sostenible: desarrollo humano, igualdad de género, desigualdad, clima y biodiversidad.

Tanto la cooperación europea como la española deben mostrar resultados medibles y duraderos, asegurando que cada euro invertido contribuye al desarrollo sostenible, a la resiliencia, paz y estabilidad, y la prosperidad compartida, a la vez que promueve los valores europeos; pero para ello la UE se tiene que comprometer a que su acción exterior tenga como máxima prioridad la AOD y contribuya al alivio de la pobreza y la reducción de desigualdades, asegurando que responde a las prioridades del Parlamento Europeo y de los Estados Miembros.

Por su parte, la nueva estrategia española habrá de ejecutarse teniendo muy presentes la necesidad de soporte financiero suficiente para la misma y la transversalización de los ejes climático, de igualdad de género y de fortalecimiento de la institucionalidad para la estabilidad y la garantía de derechos.

La financiación europea y española no sólo han de ser suficientes en cantidad, sino que han de garantizar en sus modalidades la coherencia con los respectivos principios programáticos y los objetivos de las políticas de cooperación. En este sentido, por un lado, es preciso superar las dificultades que en la actualidad la sociedad civil se ha encontrado para acceder a financiación y participar de manera activa en iniciativas como Global Gateway y las Team Europe Initiatives.

La UE debe asegurar que la sociedad civil contribuya a sus programas de al-

cance geográfico y temático, de manera que logren seguir implementando su trabajo, aprovechando las redes y experiencia en el terreno, y desarrollando nuevos aprendizajes y evidencias que mejoren la acción exterior europea. En un continente joven como el africano, será necesario considerar a las personas jóvenes como agentes clave del cambio y permitir que desempeñen un papel más activo en los espacios de toma de decisiones.

El proceso de elaboración de la estrategia Global Gateway no deja buen sabor de boca por su escasa transparencia y porque se aprecian serios riesgos de contradecir en la práctica los principios que inspiran el consenso europeo sobre desarrollo, generando impactos negativos en materia de derechos humanos y medio ambiente. En este sentido, será crucial establecer mecanismos que permitan y faciliten el escrutinio público y parlamentario del Global Gateway, tanto en Europa como en los países africanos que sean destino de la financiación.

De igual forma, ante el contexto de una cooperación debilitada por otro tipo de intereses, España junto con la OCDE pueden ofrecer espacios para alianzas estratégicas atractivas para otros países miembros de la UE, con impulsos financieros para proyectos y acciones coherentes con el Plan 2063 y con las prioridades de la cooperación internacional, que puede contribuir enormemente a reducir las desigualdades. Existe un amplio consenso en torno a que la reducción de las desigualdades constituye un requisito para el éxito de las iniciati-

vas dirigidas a acabar con la pobreza, lograr la justicia de género y combatir con éxito el cambio climático. Para que este círculo virtuoso funcione, también es imprescindible reequilibrar la toma de decisiones en materia de ayuda, garantizando que se lleve a cabo de una manera inclusiva priorizando la participación de la sociedad civil y de los Gobiernos del Sur Global.

Si se confirman los temores de que Global Gateway responda principalmente a intereses geoeconómicos, será debido a la influencia principalmente del sector privado, alejándose de los compromisos con el desarrollo liderado localmente y abandonando modelos transformadores y centrados en las personas. Tanto la AOD como el resto de financiación destinada a África pueden resultar en la búsqueda desesperada de inversiones rentables que no tengan en cuenta sus impactos en derechos y en objetivos medioambientales, por lo que es importante establecer mecanismos y reforzar capacidades para el análisis de impactos y la búsqueda de alternativas que contengan visiones basadas en derechos y en transformaciones de modelos de desarrollo a largo plazo.

A su vez, la Comisión debe comprometerse con los presupuestos anuales para ayuda humanitaria y desarrollo, y garantías concretas para asegurar que los principios humanitarios y los objetivos de desarrollo —y no las prioridades políticas— sean el punto de partida de toda la acción exterior con el Consenso Europeo sobre Desarrollo y a sus principios y compromisos como uno de sus

principales marcos rectores. Además, un nuevo Marco de Fragilidad integrado debería orientar las intervenciones en contextos frágiles y afectados por conflictos, permitiendo a la UE esbozar claramente cómo desplegará un enfoque diferenciado y permitiendo un trabajo más coordinado entre las acciones humanitarias, de desarrollo y de paz.

Por otra parte, el gobierno español debe definir objetivos ambiciosos para la financiación climática concesional y basada en subvenciones, asegurando que el progreso de sus objetivos sea medido en forma de equivalente en subvención y excluya la financiación no concesional. De esta manera se establecerían las deseadas complementariedades entre la AOD y la financiación climática para África con el objetivo de lograr impactos y transformaciones.

Con el propósito de desvincular los objetivos comerciales de los objetivos de financiación climática internacional, España y Europa deberían jugar un papel en las negociaciones internacionales, abogando por una implementación ambiciosa del Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado de Financiamiento Climático (NCQG), incluyendo la definición de escenarios claros sobre cómo aumentar la financiación pública dentro de los 300 mil millones prometidos para 2035. Ello debe basarse en una Hoja de Ruta con metas e indicadores ambiciosos que prioricen las subvenciones y logren un equilibrio 50:50 entre la financiación de la mitigación y la adaptación, al tiempo que se garantice una financiación ade-

cuada para abordar las pérdidas y daños. Ser un actor vocal en revertir la tendencia actual hacia la “privatización” de la financiación climática internacional. Para ello debe abogar por que, en lugar de primar una lógica de mercado, beneficios comerciales de las empresas del Norte Global y colonialismo verde, se priorice una lógica basada en las necesidades, vulnerabilidades y desigualdades en los países y las comunidades locales.

En términos generales, dadas las tensiones a las que se ven sometidas las relaciones de cooperación internacional, tanto para los fondos de AOD como para la financiación climática, de igual forma para Europa como para España y el resto de los Estados miembros, sirve el principio general de mantener la financiación concesional y desligada.

Bibliografía

- Ahmar, S., C Bergogné, W. (2025). Opinion: The EU is an aid superpower. It just doesn't know it yet. Devez, 26 de junio de 2025 <https://www.devex.com/news/opinion-the-eu-is-an-aid-superpower-it-just-doesn-t-know-it-yet-110335>
- Anthony, K., C Christian, H. (2025). Africa's inequality crisis and the rise of the Super-Rich. Oxfam International DOI:10.21201/2025.000078
- Birkwood, Susannah (2025). How will the rest of the world respond to lights-out at USAID? Devex, 4 marzo de 2025, <https://www.devex.com/news/how-will-the-rest-of-the-world-respond-to-lights-out-at-usaid-109506>
- Consejo de Cooperación (2024) Dictamen sobre el "VI Plan Director de la Cooperación Española para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global 2024-2027", https://www.consejocooperacion.es/wp-content/uploads/2024/05/Dictamen_del_Consejo_sobre_VI_Plan_Director.pdf
- Counter Balance, Eurodad C Oxfam (2024) Who profits from the Global Gateway? The EU's new strategy for development cooperation, <https://counter-balance.org/uploads/files/GG-report.pdf>
- Dabi, N., Maitland, A., C Lewis, A. N. (2025). Climate Plunder: How a powerful few are locking the world into disaster. Oxfam International, octubre 2025 <https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621741/bp-climate-plunder-29102025-es.pdf?sequence=6>
- Instituto para la Evaluación de las Políticas Públicas (IEPP) (2022). Evaluación intermedia del III Plan África [2022], Madrid, Ministerio de Hacienda y Función Pública
- Martín Casas, Norman (2025) Financiación climática justa ¿Cómo cumple España sus compromisos? Un análisis crítico sobre el balance, la calidad y la adecuación de la financiación climática española hacia los países del Sur Global. Oxfam Intermón, noviembre de 2025 <https://www.oxfamintermon.org/hubfs/Oxfam-Website/oi-informes/financiacion-climatica-justa.pdf>
- Martínez Osés, Pablo J. (coord.) (2025) Informe de Cooperación Internacional para la Justicia Global 2025. Oxfam Intermón <https://www.oxfamintermon.org/hubfs/Oxfam-Website/oi-informes/cooperacion-internacional-justicia-global-2025.pdf>
- Nocerino, S. (2025) Algo más que objetivos. Una agenda ambiciosa para reorientar el sistema de ayuda. Oxfam International DOI: 10.21201/2025.000058
- OECD (2025), "Recortes en la ayuda oficial al desarrollo: Proyecciones de la OCDE para 2025 y a corto plazo", No. 26, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/cfea0537-es>
- OECD (2025), States of Fragility 2025, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/81982370-en>
- Oxfam (2020) The EU trust fund for Africa: trapped between aid policy and migration politics, <https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/10546/620936/1/bp-eu-trust-fund-africa-migration-politics-300120-en.pdf>
- Oxfam (2025) Courage in crisis. A collection of stories on the impact of aid budget cuts. <https://www.oxfamamerica.org/explore/research-publications/courage-in-crisis/>
- Oxfam (2025). Oxfam in Africa strategy 2025 - 2030 An Africa without inequality <https://africa.oxfam.org/latest/publications/oxfam-africa-oia-strategy-2025-2030>
- Oxfam Intermón (2025). Un futuro sin cooperación para la Justicia Global no es futuro <https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/reactivo-desmantelamiento-cooperacion-internacional.pdf>

6

El papel de la empresa y el sector privado en África

por LUIS GARCÍA BLANCH

1. INTRODUCCIÓN

El sector privado es el principal motor de crecimiento y creación de empleo en África. Representa el 70% del PIB, el 70% de la inversión y el 90% de todos los empleos, tanto formales como informales (AfDB, 2024).

Sin embargo, la inversión privada local en África es baja, promediando el 14,8% del PIB entre 2000 y 2023, por debajo del 16% de América Latina y el Caribe, y menos de la mitad que en Asia y Pacífico (AfDB, 2025). Ello es consecuencia, en parte, de las sabidas dificultades que afronta: riesgo político, infraestructura precaria, baja formación y mercados financieros poco desarrollados.

Con todo, África sufre de infrafinanciación. La brecha anual para cumplir con los objetivos de sostenibilidad y desarrollo que marcan la UNDP y la Unión Africana asciende a 670-762 mil millones de dólares (AfDB, 2025).

Aprovechar el potencial privado es, por tanto, indispensable para abordar la agenda de desarrollo. Debe hacerse atendiendo a la enorme necesidad de mejora de productividad y resiliencia, y también a la capacidad del tejido empresarial para generar beneficios sociales: diversidad e inclusión, integración regional y capacitación.

Es visible, además, la aportación y alineamiento del sector privado con varias de las 7 grandes aspiraciones reflejadas en la Agenda 2063 de la Unión Africana (African Union, s.f.):

- Una África próspera basada en el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible. En sus objetivos orientados a la transformación de la economía y el empleo, y a la mejora de la productividad agraria y de las exportaciones.
- Un continente integrado, políticamente unido. El sector privado promoverá de forma natural un mayor grado de integración entre las regiones en su búsqueda de economías de escala y menor dependencia exterior.
- Una África cuyo desarrollo esté impulsado por las personas, que aproveche el potencial del pueblo africano —especialmente de las mujeres y los jóvenes—. Materializar las iniciativas de inclusión y diversidad en el mercado laboral como ‘caso de negocio’ indispensable para el crecimiento de las empresas.
También en la estrategia del AfDB (African Development Bank Group), y a partir de los cuales se han determinado las prioridades y planes de acción para el continente en el medio y largo plazo.
- Acceso a electricidad y agua. Potenciando a través del desarrollo del tejido industrial mayor inversión en infraestructura.
- La transformación hacia una agricultura resiliente al cambio climático y de mayor productividad.

- La mejora de los niveles de industrialización para proporcionar una captura de valor de más de 11 puntos del PIB (AfDB, 2024)

A continuación analizamos los mecanismos de los que dispone el sector privado, contextualizado en la coyuntura actual, y acorde a la estructura en que se configura.

2. COYUNTURA 2025

El incipiente desarrollo digital y las consecuencias del cambio climático son factores diferenciadores que, junto con el contexto económico, permiten entender la realidad africana, y el escenario en que el sector privado debe interpretar los desafíos y oportunidades.

Contexto económico. Durante la década pre Covid-19 África disfrutó de un crecimiento sostenido en gran parte motivado por el incremento del precio de las materias primas y la inversión extranjera directa. Se redujeron los niveles de pobreza extrema del 55% en 2000 al 34% en 2020 y el empleo mejoró de 310 millones de personas en 2013 a 511 millones de personas empleadas en 2023. (AfDB, 2024).

Sin embargo, los desafíos históricos del continente (pobreza, inseguridad y conflictos), el impacto generado por el Covid y la incertidumbre provocada por el nuevo escenario internacional amenazan la sostenibilidad de los logros conseguidos.

Con todo, África seguirá creciendo al 4% en 2025 y 2026, según las previsiones del AfDB y existen factores para el optimismo: mayor crecimiento y diversificación en África Oriental, la proyección de la inflación por debajo del 10% a partir de 2026 (mínimo histórico) y el equilibrio entre deuda interna y extranjera que logra exponer menos a las monedas locales¹ (AfDB, 2025).

Existen, otros factores menos alentadores que ilustran la necesidad de transformar de manera profunda un modelo económico aún muy dependiente: la caída de ingresos de las exportaciones en el Norte de África, la disminución de la producción de hidrocarburos en África Central, y el impacto de los aranceles para el comercio de materias primas (Sur de África).

Digital. Sólo entre 2020 y 2021 el número de start-ups se triplicó hasta las aproximadamente 5.200 compañías. (Flötoto, Gold, Jeenah, Kuyoro, & Olanrewaju, 2022). En 2020, el Banco Mundial ya estimaba que la economía digital e internet aportarían alrededor de 180 mil millones de dólares al PIB de África en 2025 (Google and IFC, 2020), además de ayudar a mejorar los niveles de productividad en los sectores clave (agricultura, finanzas, educación, salud y consumo). Cuatro de cada cinco africanos ya tienen un teléfono móvil y las plataformas tecnológicas permiten tener acceso a servicios financieros y agri-tech. De hecho, África ha demostrado habilidad diferencial en la adopción de las nuevas tecnologías en varios ámbitos².

En Fintech, por ejemplo, con niveles de penetración entre el 5% y el 6% en el mercado (homologable a mercados líderes) se genera un negocio de entorno a los 13 mil millones de dólares (Kuyoro, Flötoto, & Gathinji, 2024). La ratio de crecimiento de los sub-sectores digitales es, en su mayoría, de dos cifras con una gran capacidad para atraer inversión y proporcionar una oportunidad viable a emprendedores y jóvenes con talento sin distinción de raza o sexo.

Clima y Transición Energética. África tiene un gran potencial en la lucha contra el cambio climático a escala global y como actor clave en el programa de transición energética. La gran diversidad y abundancia de fuentes de energía verde tienen la capacidad de equilibrar la huella de carbono per cápita, potenciar la autonomía energética y utilizarse de palanca para la generación de negocio. Además, los llamados ‘minerales de transición’ serán objeto de demanda global para implementar el cambio hacia una economía verde.

El cambio climático, sin embargo, ha generado un fuerte impacto negativo en la economía africana, principalmente a causa de las sequías contrayendo en un 13,6% el PIB per cápita (AfDB, 2024).

Vehicular las oportunidades de la coyuntura actual africana es el gran papel que debe desempeñar el sector privado: consolidar el cambio digital, adaptar su estrategia a la evolución de la economía y activar las palancas para la revalorización de sus recursos.

3. ESTRUCTURA DEL SECTOR PRIVADO

En este contexto, es necesario entender cómo se desarrolla y organiza la actividad privada en África, así como ubicar sus oportunidades para contribuir a la mejora de la economía.

En lo que respecta al mercado laboral, al que el sector privado aporta prácticamente el 90% de los empleos, se observan atributos propios de un mercado no maduro ((ILOSTAT), International Labour Organization, 2025):

- Una muy alta ratio de informalidad (85%) que conduce a una menor recaudación fiscal y menoscabo de los derechos de los trabajadores
- Poco valor captado del generado por el crecimiento económico, en comparación al capturado por el capital.
- Tasas bajas de empleo respecto al conjunto de la población en edad de trabajar.

La economía africana sigue limitada por una baja productividad y un consumo reducido. No obstante, el desplazamiento hacia servicios e industria —que ya emplean a más de la mitad de la población y generan más del 70% del VAB— señala un cambio estructural prometedor. Aun así, ambos sectores mantienen niveles de productividad muy inferiores a los estándares internacionales.

Es destacable, también, la gran divergencia de las economías africanas por

territorio y cómo el sector privado se desarrolla en ellos. Por ejemplo, el 40% de las empresas facturando más de

1.000 millones tiene su sede en Sudáfrica, y prácticamente el resto están diseminadas entre las otras 5 grandes economías³. La adopción de la digitalización también ha sido desigual, siendo Nigeria y Kenia pioneras. Las economías centroafricanas, sin embargo, siguen fiándose de las materias primas y acusando la volatilidad de los precios.

Es imprescindible aprovechar los mecanismos de transformación para solventar los cuellos de botella que caracterizan la estructura del sector privado, y romper barreras que lastran la productividad.

4. MECANISMOS Y CASOS DE TRANSFORMACIÓN

Existen un conjunto de elementos diferenciadores que resultan especialmente relevantes en el caso de África y su coyuntura: desarrollo de talento, inclusión y diversidad, industrialización y tecnología. Todos ellos son catalizadores para la mejora de la productividad y generan, a su vez, beneficios sociales que contribuyen a la creación de una espiral positiva de progreso:

1. Desarrollo de talento. Gestionar y desarrollar talento forma parte indisoluble de cualquier empresa que busque crecer, lo cual figura por defecto en sus objetivos. La educación terciaria en África es una de las más

bajas del mundo⁴ y la empresa no sólo ofrece la oportunidad de aprender *on the job*, sino también utilizando los mecanismos formativos acorde a la necesidad de los negocios. Invertir en formación en sus empleados es, en la mayor parte de los casos, una decisión rentable. Más allá de ello, empresas bien establecidas con dinámicas sólidas de crecimiento pueden y deben contribuir al desarrollo de talento y capacitación en las comunidades donde operan. Por ejemplo, *Saham Finances*, una empresa de seguros marroquí que desarrolló sus propias soluciones en capacitación de los empleados (Chironga, Desvaux, & Leke, 2019)⁵.

La iniciativa privada está siendo pionera, asimismo, en ofrecer alternativas formativas asequibles (al menos a coste diferencial respecto a universidades clásicas) apalancadas en la digitalización y la tecnología a través de programas online con contenidos homologables. Es el caso de ALX y otras compañías que, en su conjunto, se estima forman a más de 200.000 personas en el continente⁶. Uno de los principales efectos positivos del desarrollo de talento en África es la búsqueda de salida para los jóvenes. Se estima que en 2023 habja 53 millones de jóvenes 'NEET'⁷ (International Labour Organization, 2024).

2. Inclusión y diversidad. En términos de inclusión, y con especial foco en las mujeres y su relevancia explícita

en los objetivos de la Agenda 2063, la empresa goza de una capacidad única para fomentar la integración activa y de liderazgo de las mujeres: su indispensable aportación a la prosperidad de los negocios. No tratándose únicamente de una cuestión de justicia social (aunque éste sea en cualquier caso el fin último), la diversidad y especialmente la participación y toma de responsabilidad en los negocios por parte de las mujeres tiene el potencial de generar mejoras de los retornos de inversión en hasta un 30% (McKinsey and Company, 2023)). Existe, además, un déficit de financiación para la inclusión de la mujer en el mundo laboral al que no se puede esperar eternamente.

3. Industrialización y productividad. En primer lugar, como base del salto de madurez que los países deben efectuar para sus economías, apoyado sobre casos-ejemplo como el de Corea del Sur⁸ y su mejora de productividad y aportación al PIB. Sólo con un 12% del empleo, el sector industrial genera más del 20% del VAB en África.

Asimismo, el desarrollo industrial debe llevarse a cabo de forma competitiva y ayudándose de dos herramientas: la tecnología y el comercio. La tecnología, junto con el talento, como catalizador para la mejora de la productividad, y el comercio para dotar de escala a los negocios y profundizar en la cohesión interterritorial⁹.

Todo ello ayuda a atraer inversión privada, e incluso mejorar las infraestructuras. Un ejemplo que lo ilustra bien es el plan director aprobado para LADOL¹⁰. Un modelo de negocio que no únicamente atrae inversión pero que incluye en su plan el desarrollo de infraestructura portuaria, e incluso métodos de generación de energía renovable cuyos excedentes serán transferidos a la red pública (McKinsey and Company, 2023).

La industrialización ayuda a propiciar, además, un cambio estructural que reduzca la vulnerabilidad a la volatilidad del precio de las materias primas y que conducen a una economía cíclica e incierta en la que es más difícil atraer inversión.

También observado en el enorme potencial de la transformación hacia una economía verde: el informe de McKinsey Africa's Green Manufacturing Crossroads identifica cómo nuevos negocios verdes podrían generar hasta 700.000 puestos de trabajo (directo e indirecto) y 2 mil millones de dólares anuales de ingresos en la transición hacia una economía de cero emisiones netas hasta 2030, y a través de inversiones cada vez más rentables y con menos necesidad de apoyos o mecanismos adicionales (Jayaram, Kendall, Somers, & Bouchene, 2021).

La industria, además de ser el sector por naturaleza más productivo, es el que posee mayor potencial para la creación de puestos de trabajo y susci-

tar demanda sostenida. El crecimiento demográfico estimado en África conducirá a la necesidad de crear alrededor de 18 millones de puestos de trabajo al año para absorber la consecuente demanda de empleo.

4. Tecnología, digitalización y Venture Capital. Siendo un ejemplo paradigmático de cómo la alianza público-privada puede generar tracción combinado iniciativa empresarial con adaptación de la infraestructura. El uso de la IA, y en particular el *Machine Learning*, se doblará en los próximos 5 años, una oportunidad única para contribuir al crecimiento en prácticamente todos los sectores de la economía. Kenia ilustra bien cómo la combinación de desarrollo de infraestructura con inversión ha permitido llevar a cabo iniciativas en agricultura, salud y finanzas¹¹, además de posicionarlo como referente y líder en el desarrollo de soluciones IA. Pese a la evidente falta de recursos y el acceso difícil a áreas remotas que no permiten un despliegue rápido y a gran escala, el éxito relativo en Kenia ha generado suficiente confianza para atraer inversiones, y mayor facilidad para hacer negocios: Microsoft o IBM son un ejemplo de grandes tecnológicas que han optado para establecer *hubs* en la región (Google and IFC, 2020).

Otro efecto positivo es la capacidad de la que la tecnología y los emprendedores digitales disponen para consagrar oportunidades en el sector informal (predominante, como se ha visto anteriormente) y permitan crear redes a través de sus plataformas para captar mayores volúmenes y hacer su operativa más eficiente. Las tecnológicas son capaces de lanzar productos y servicios adaptados a las circunstancias de cada contexto local, gracias a un alto grado de flexibilidad en su diseño. Por ejemplo, en Nigeria la empresa TradeDepot está mejorando la gestión de la cadena de suministro de los vendedores al por menor en el sector informal, a través de la conexión con los productores.

Con todo, desde 2019, África está incrementando de forma exponencial la captura de capital riesgo e inversores que confían en el potencial comercial, y en la expansión del ecosistema digital.

Los mecanismos de los que dispone un entorno empresarial proactivo y moderno son esenciales para transformar los modelos económicos y, en el caso de África, contribuir a corregir los problemas estructurales del propio sector: la baja productividad, la elevada informalidad, y la divergencia de sus economías regionales.

5. MADE BY AFRICA

África está llamada a adoptar un papel protagonista en el futuro escenario internacional. Es indispensable para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible por la relevancia de sus recursos, pero también como núcleo demográfico creciente. El sector privado es un actor clave para canalizar esta oportunidad.

En la transición energética. Se calcula que la demanda de minerales críticos para la transición energética¹² seguirá un crecimiento exponencial en los próximos 30 años, y que existirá un riesgo de déficit si no se amplía su suministro. África es un actor clave en este cometido al albergar el 30% de las reservas de estos minerales, incluido el 70% del cobalto mundial (Brookings Institution, 2025), 50% del manganeso y 23% de fosfatos, clave para la fabricación de baterías (International Trade Center, 2025). También resulta relevante la capacidad de fabricación de hidrógeno en países como Namibia, que podrían ser muy significativos en la transición energética del propio continente, y en el reemplazo progresivo de los combustibles fósiles a nivel global. Junto con la venta de créditos de carbono, el hidrógeno puede generar hasta 100 mil millones de dólares anuales hacia 2050 (McKinsey and Company, 2023)

No obstante, todo este potencial cuenta con dos factores limitantes: la concentración geográfica y política (menor flexibilidad) y la baja capacidad de refinado, procesamiento e infraestructu-

ra. En cuanto al segundo factor, la causa es la baja movilización de recursos, puesto que la canalización de la inversión, ya sean ahorros privados o mercado de capitales, sigue siendo un reto al no disponerse de la transparencia y gobernanza para generar la confianza de los inversores. En este punto, es indispensable la alianza público-privada para crear y dotar de solvencia a las entidades que deben proporcionar datos fiables y contrastables.

La transición energética global es, por tanto, una oportunidad para la propia transición del modelo económico en África, y no repetir los errores de alta dependencia y baja captura de valor de los hidrocarburos.

El gran cambio demográfico. África pronto acogerá a la mayor población en edad de trabajar del planeta¹³, con el potencial de llegar a los aproximadamente 2.500 millones de habitantes en 2050 (un aumento de 796 millones de personas que se unirán a la población activa mundial en prácticamente 30 años). No sólo representa una oportunidad para aprovechar talento en áreas que en el resto del mundo afrontan un declive demográfico, y haciéndolo sin necesidad de huida poblacional gracias a una mayor interconexión, sino que también continuará estimulando la demanda interna. El sector privado, a través de los mecanismos ya mencionados, debe ser capaz de canalizar la oferta de trabajo y aprovechar el potencial de las nuevas generaciones. El liderazgo e iniciativa de los empresarios africanos y las instituciones públicas

es determinante en este aspecto, puesto que son los mejor posicionados para entender el origen de las necesidades a satisfacer, y con ello la demanda.

El comercio y las cadenas de suministro. Situar África como un actor relevante en las cadenas de suministro globales pasa por profundizar en su cohesión territorial y promoción de su propio comercio interregional. En 2022 el comercio interregional en África era del 18%, mientras que en otras regiones como Asia y Europa se estima en 59% y 68% respectivamente. Desencadenar su potencial a través del acuerdo de libre comercio puede significar un aumento de 450 mil millones de dólares en su PIB para 2035 y, aún más importante, garantizar y asegurar una posición más fuerte y con mayor capacidad de negociación en el ámbito internacional.

En muchos informes, de hecho, se cita el AfCFTA como el mayor proyecto de desarrollo en el continente. Actualmente, el peso de África en el mercado internacional es pequeño, contando únicamente el 2,3% de las exportaciones globales. Sin embargo, un informe de 2022 de la ITC (International Trade Center) identifica 4 grandes cadenas de valor con un gran potencial para el comercio interregional que pueden proporcionar relevancia en los mercados internacionales: industria farmacéutica, industria del automóvil, industria textil, e industria alimentaria. (International Trade Center, 2022).

Insistir en la cohesión entre territorios es clave para dotar de mayor escala

los negocios que mueven las cadenas de valor, y generar el interés de los actores internacionales. No en vano, se da cada vez con mayor frecuencia el fenómeno de *nearshoring* o relocalización en el que empresas extranjeras re-exportan sus productos semiprocesados desde centros productivos y logísticos en África para atender mercados más cercanos.

Deviene crítico desarrollar la infraestructura logística adecuada para atender el potencial de exportación de los países africanos. Es el caso de TangerMed¹⁴ que ha ganado una gran relevancia internacional y contribuye a situar África como *hub* logístico para crear nodos de conexión global.

Como ocurre en otros ámbitos, los retos para materializar el potencial comercial están relacionados con la lenta implementación debida a la inestabilidad política, y la falta de capacitación e infraestructura. Para mitigar el coste diferencial de operar respecto a los estándares globales, varias empresas invierten en tecnología y digitalización, pero topan con uno de los más importantes cuellos de botella que África puede afrontar en el futuro próximo: el déficit en infraestructura de datos y los estándares y capacidades para explotarlos de forma provechosa.

6. CONCLUSIONES: LAS OPORTUNIDADES IRRENUNCIABLES

Existe un visible cambio de discurso en la literatura y estudios referentes al desa-

rollo en el África post-Covid, referido a la necesidad inminente de materializar su potencial, y en contraste con la habitual “visión a futuro”, en muchos casos abstracta. La capacidad de adopción demostrada en la revolución digital, los aprendizajes de la década 2010-2020 y la coyuntura regional e internacional invitan a la acción conjunta e inmediata para transformar el modelo económico hacia uno de mayor productividad y resiliencia. El sector privado es esencial en ese cometido, y en la sostenibilidad futura del modelo.

De entre las oportunidades que se presentan, existen varias que son irrenunciables y que constituyen las bases de los pilares de progreso. Éstas, deben tomar el formato adecuado en el cambio hacia la modernización, y sin renunciar a la esencia del continente:

- La consolidación del cambio en los sectores económicos, condicionado al incremento productividad a través de la digitalización y la capacitación.
- La captura de valor y relevancia en el contexto de la transición energética global, con la transparencia que proporcione la confianza de los inversores.
- El cumplimiento de la promesa de la AfCFTA como elemento clave para la regionalización y condicionado a la mejora de la infraestructura, la tecnología y la estabilidad política.

El desarrollo diferencial de África respecto a épocas anteriores y el aprovechamiento inminente del potencial del continente depende, en gran parte, de que el sector privado actúe como eje vertebrador en cada una de las oportunidades citadas. Los mecanismos de los que dispone son irremplazables y tienen un potencial único para generar el círculo virtuoso que conduzca a mayor prosperidad.

1. En 2023 la deuda local ya alcanzaba el 39% del total de deuda.
2. En tecnología móvil, pagos móviles y uso de la nube avanza más rápido en África que en algunos países desarrollados.
3. Egipto, Nigeria, Marruecos, Angola y Argelia
4. Sólo el 10% de la población se matricula en educación terciaria, y de éstos únicamente el 20% se gradúa en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (AfDB, 2024)
5. Saham Finances, compañía líder en seguros fundada en 2005, opera en 23 países en África y fatura ya más de 1.000 millones de dólares. Construyó un estándar propio de formación para poder expandir su negocio.
6. <https://www.alxafrica.com>
7. Sin actividad en educación, empleo o formación por sus siglas en inglés (Not in Education, Employment or Training).
8. Core del Sur mejoró su productividad a un ritmo del 6-8% anual entre las décadas de 1970 y 1990, multiplicando aproximadamente por 10 su PIB real per cápita en 30 años
9. Sólo el 10% de las importaciones totales en África provienen de otro país africano.
10. Zona franca y centro logístico de África Occidental para empresas multinacionales industriales y offshore.
11. Por ejemplo, The Third Eye Project usa drones con IA para monitorizar las condiciones del suelo, detectar pesticidas e identificar enfermedades en los cultivos. (Brookings Institution, 2025)

12. Motivado principalmente por el aumento de vehículos eléctricos, energías rentables y sistemas de almacenamiento energéticos en todo el mundo.
13. Se estima que el 40% de los jóvenes del planeta serán africanos.
14. TangerMed es un ejemplo claro de como la apuesta por la inversión pública y privada han capitalizado su ubicación estratégica para convertirlo en un modelo de transbordo altamente eficiente y a través de la automatización en su logística.

Bibliografía

- Kuyoro, M., Flötoto, M., & Gathinji, C. (2024). Redefining Success: A new playbook for African fintech leaders. McKinsey and Company. From https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/redefining-success-a-new-playbook-for-african-fintech-leaders?utm_source=chatgpt.com
- International Labour Organization. (2024). Global employment trends for youth. ILO.
- Brookings Institution. (2025). Foresight Africa - Top priorities for the continent 2025-2030. Washington, D.C.: Brookings institution .
- International Trade Center. (2025). The 'Made by Africa' Initiative. ITC.
- Google and IFC. (2020). e-Conomy Africa 2020. Google.
- (ILOSTAT), International Labour Organization. (2025). Statistics in Africa. From <https://ilostat.ilo.org/data/africa/>
- AfDB. (2025). African Economic Outlook. African Development Bank.
- AfDB. (2024). The ten-year strategy. Côte d'Ivoire.
- African Union. (n.d.). Goals & Priority Areas of Agenda 2063. From African Union: <https://au.int/en/agenda2063/goals>
- Chironga, M., Desvaux, G., & Leke, A. (2019). Leadership lessons from Africa's trailblazers. McKinsey and Company.
- Jayaram, K., Kendall, A., Somers, K., & Bouchene, L. (2021). Africa's green manufacturing crossroads. McKinsey and Company.
- Flötoto, M., Gold, E., Jeenah, U., Kuyoro, M., & Olanrewaju, T. (2022, August 30). Fintech in Africa: The end of the beginning. McKinsey and Company. From https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/fintech-in-africa-the-end-of-the-beginning?utm_source=chatgpt.com
- McKinsey and Company. (2023). Manufacturing Africa's future: jobs, growth and sustainability. McKinsey and Company.
- McKinsey and Company. (2023). The path to greater productivity and prosperity in Africa. McKinsey and Company.
- International Trade Center. (2022). Made by Africa. Ginebra: ITC.

Epílogo: Estrategia África y desarrollo tras la Cumbre de Sevilla

por Vicente Palacio

DIRECTOR DE POLÍTICA EXTERIOR DE FUNDACIÓN ALTERNATIVAS

En este último año, han sido numerosos los nubarrones y malos augurios para el desarrollo africano. La retirada de Estados Unidos del sistema de cooperación internacional y el desmantelamiento de USAID ya está provocado impactos directos y víctimas entre la población de algunos países. La buena noticia es que al mismo tiempo se ha producido una reacción rápida por parte de un sector amplio de la comunidad internacional, con el lanzamiento de varias iniciativas cargadas con buenas intenciones. Podemos hablar no solo de drama, sino también de oportunidad para aplicar un revulsivo que cambie el marco de las acciones para el desarrollo.

Este momento de grave crisis coincide con un momento de alineamiento total de España con los planes y objetivos de Naciones Unidas y con su Secretario General Antonio Guterres. En diciembre de 2024, el gobierno español lanzaba la Estrategia España-África 2025-2028, uno de cuyos objetivos es impulsar un desarrollo africano inclusivo y sostenible. Anteriormente, en 2023, España ya había cumplido los Programas de Conversión de Deuda por Salud, con Camerún, Etiopía y la República Democrática del Congo (RDC). Más tarde, la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FFD4) celebrada 30 de junio a 3 de julio de 2025 en Sevilla, ha

marcado un nuevo hito en la larga historia en el sistema de financiación del desarrollo surgido tras la segunda guerra mundial en el siglo xx.

¿Qué queda hacer a partir de aquí? Como queda claro en nuestro Informe África 2026 de Fundación Alternativas, la salida a la trampa de la deuda, la pobreza y la desigualdad en África Occidental y en el Sahel pasa por abordar sectores prioritarios como las energías renovables, las infraestructuras, la educación o la salud. El propio SG Guterres ha afirmado: "Los países en desarrollo gastan 1,4 billones de dólares anuales en el servicio de la deuda. Y 3.400 millones de personas viven en países que gastan más en el servicio de la deuda que en salud o educación".

A nivel nacional, el elevado nivel de endeudamiento reduce la capacidad de los estados africanos para impulsar políticas de desarrollo. Según el BAfD, en 2024 los países de la región aportaron un total de 163.000 millones de dólares en concepto de costos del servicio de la deuda, una cifra que casi multiplica por tres los 61.000 millones de 2010.

La crisis de la deuda africana, con países que entraron en default desde 2020 tras el COVID19, ha tenido un efecto dramático sobre la población de los países más afectados, en sectores como la sanidad o la agricultura. Desde Zambia, a Kenia, Eritrea, Sudán, Cabo Verde o Ghana, se repite un mismo patrón: el endeudamiento, la presión fiscal, o la inflación, están agravando crisis sociales y políticas en poblaciones que sufren precios elevados y la precariedad de los servicios públicos, amenazando con crear un efecto de "generación perdida"

El verdadero reto ahora es dotar de continuidad y resultados a los mecanismos puestos en marcha, forjando alianzas a nivel nacional, europeo, y global, y por supuesto con nuestros socios africanos. Debemos evitar que las agendas de los donantes externos tradicionales (Europa o EEUU) o nuevos (China, Turquía), condicionen negativamente una recuperación sostenida y un crecimiento sostenible. Dicho crecimiento debe ir apuntalado por nuevos planteamientos por parte de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), o los bancos regionales de desarrollo.

El “Compromiso de Sevilla” supone hoja de ruta ambiciosa. El Foro de Países Deudores, por ejemplo, puede mancomunar esfuerzos de países deudores y dotarles de una voz propia. El Foro de Sevilla sobre la Deuda, constituido en octubre de 2025, pretende promover préstamos más justos, reestructuraciones más rápidas y en definitiva una reforma profunda de la arquitectura global de la deuda – hoy obsoleta y fragmentada – que incluya mayor transparencia y rendición de cuentas. La creación de la Agencia de Calificación Crediticia de África es otro paso que podría ayudar en este sentido.

Sevilla ha servido de detonante para muchas iniciativas conectadas entre sí y que merece la pena mencionar. Por ejemplo, el Foro Internacional sobre el Apoyo Oficial Total al Desarrollo Sostenible (TOSSD), presidido por la Comisión Europea en Madrid, en octubre de 2025, y centrada en la recopilación de datos sobre flujos de cooperación. O la Cumbre Africana de Financiación de Infraestructuras celebrada en Angola en ese mismo mes. O la reciente 39ª Cumbre de la Unión Africana (UA), en febrero de 2026, en Addis Abeba (Etiopía). Allí ha quedado de manifiesto que la turbulencia geopolítica amenaza con reducir la inversión externa necesaria para promover las políticas de desarrollo de la Agenda 2063 de la UA. Se calcula que existe un déficit de inversiones de 100.000 millones de dólares anuales, lo que dificulta la participación de las pymes africanas en las cadenas de valor regionales. Por este motivo, a finales de este año 2026 está prevista la celebración en Angola de la primera Cumbre Global de Inversión en África. Además, el presidente del Banco Africano de Desarrollo (BAfD), Sidi Ould Tah, ha anunciado una Nueva Arquitectura Financiera Africana (NAFA), todavía por materializarse.

La declaración pactada en Sevilla ha marcado un nuevo camino. Por ejemplo, el punto 9 (transformación socioeconómica positiva en África); el 14 (binomio desarrollo- paz); el 15 (acceso a financiación); el 17 (desastres naturales); el 18 (principios de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo); el 29 (flujos financieros ilícitos); o el 35 (cooperación internacional para el desarrollo). En cuanto a este último, es importante destacar

que la cooperación Sur-Sur constituye un complemento, no un sustituto, de la cooperación Norte-Sur. El sistema de cooperación internacional (y posiblemente el europeo también) ha quedado desfasado frente a la velocidad de los cambios y las nuevas necesidades de los países en desarrollo, especialmente aquellos en situaciones de conflicto y pos-conflicto.

La financiación climática es un asunto crucial que guarda una estrecha relación con el problema de la deuda. África subsahariana necesita 143.000 millones de dólares anuales en financiación climática (un 7% de su PIB total) si queremos que se materialice la “transición verde”. Pero los flujos de financiación climática hacia la región alcanzan apenas una cuarta parte de esa cifra. Además, a la luz de los actuales desequilibrios climáticos, resulta urgente para muchos países africanos tomar la iniciativa de incorporar cláusulas de pausa en los acuerdos de deuda en caso de desastres naturales. Como ha señalado Hailemariam Desalegn (ex primer ministro de Etiopía y miembro de la African Leaders Debt Relief Initiative), a diferencia de 1996, cuando se condonó la deuda a través de la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados del FMI y el BM, el siglo XXI exige una respuesta más audaz. No es “compasión” lo que necesitamos ahora, sino un mecanismo de alivio de la deuda vinculado al clima.

Ahora bien, como nos recuerda el economista de Harvard Kenneth Rogoff, un porcentaje significativo de la deuda externa de África está en manos de prestadores privados, así como de China. Una medida útil podría ser trasladar las disputas de la deuda a las cortes de los países deudores para una mayor efectividad. Igualmente, los programas de ayuda externa podrían centrarse más en subvenciones que en unos préstamos para el desarrollo que hasta ahora han agravado la deuda.

A partir de Sevilla, pues, existen múltiples frentes sobre los que se puede actuar, y en los que Europa y España pueden empujar de manera coherente con sus planteamientos. Adicionalmente, puede mencionarse la infra-representación africana en las instituciones financieras internacionales (IFI's). Una buena noticia es la reciente creación de una 25ª silla en el Directorio Ejecutivo del

Fondo Monetario Internacional dedicada a África Subsahariana; pero hace falta más. Otro frente fundamental sería revertir el declive del sistema de comercio abierto internacional a resultas de los vientos proteccionistas que llegan de Washington. En un momento de relativo distanciamiento de Europa (de-risking) respecto a EEUU, hay que tender la mano de la cooperación a aquellos países africanos con dificultades para integrarse en las cadenas de valor de bienes y servicios. Existe un potencial que Europa tiene que aprovechar para mejorar el valor agregado en productos básicos y minerales, y revertir los déficits digitales de esas economías.

Biografías

Andrea Chamorro

Andrea Chamorro González es graduada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Salamanca y posee el máster en Relaciones Internacionales y Estudios Africanos por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente, está llevando a cabo una tesis doctoral en la Universidad de Salamanca sobre las relaciones China-África Occidental. Desde hace ocho años trabaja en Descifrando la Guerra como analista del continente africano especializada en la región del Sahel. A su vez colabora con Casa África en la elaboración de artículos de análisis. Colabora activamente con la Fundación Alternativas en el proceso de elaboración y coordinación del Informe África anual.

Olga Margret M. Namasembe

La Dra. Olga Margret M. Namasembe es doctora en Estudios de la Mujer y Emprendimiento Empresarial Africano por la Universidad de Granada. Es una académica distinguida con una sólida trayectoria en investigación sobre género, desarrollo y emprendimiento. Entre sus reconocimientos destacan la Beca del Grupo Coimbra para Investigadores Africanos y la Beca Learn Africa de la Fundación Mujeres por África. Ha colaborado activamente con la Fundación Mujeres por África en el diseño y fortalecimiento de sus programas. En este marco, ha impulsado iniciativas de empoderamiento económico dirigidas a mujeres africanas tanto en España como en el continente africano. Su trabajo se centra en la promoción del emprendimiento como herramienta de transformación social y desarrollo sostenible. Es autora de diversas publicaciones académicas en revistas especializadas y obras colectivas. Su producción científica integra el rigor metodológico con un enfoque aplicado y orientado a resultados. Ha participado en proyectos de cooperación internacional vinculados al desarrollo empresarial con perspectiva de género. Su trayectoria profesional combina investigación y cooperación internacional.

Étienne Fakaba Sissoko

Étienne Fakaba Sissoko es economista e investigador del Centro de Investigación de Análisis Político, Económico y Social (CRAPES-Mali). Se especializa en políticas públicas, gobernanza económica y sostenibilidad financiera en África Occidental. Su investigación se centra en la disciplina fiscal, la soberanía monetaria y la transformación estructural de las economías sahelianas. Autor de varios libros y artículos académicos publicados en revistas internacionales, contribuye activamente a los debates sobre deuda, vulnerabilidad institucional y estrategias de resiliencia en tiempos de crisis. Como consultor para organizaciones regionales e internacionales, aboga por un enfoque africano del desarrollo basado en la rendición de cuentas, la transparencia y la innovación. Además, es un escritor comprometido que explora en sus ensayos y crónicas las intersecciones entre economía, democracia y dignidad humana.

Luis García Blanch

Luis Garcia Blanch, nacido en Valencia en 1986, ingeniero superior por la Universitat Politècnica de Catalunya y con un Máster en Diplomacia y Función Pública por el CEI (Centro de Estudios Internacionales), ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en multinacional, y en particular en operaciones en el Norte de África y África Occidental. Principalmente dedicado a la transformación de las operaciones de las empresas, a la gestión de inversiones en entornos industriales y multiculturales enfocado al desarrollo y crecimiento. Graduado con un PDD por IESE, sus principales intereses se ubican en la convergencia entre el desarrollo económico y social, y la empresa. También ha trabajado en consultoría en España y Francia, y actualmente dirige las operaciones de una empresa ubicada en la provincia de Barcelona dedicada a la producción y comercialización de bebidas. Entre 2021 y 2024 vivió en Marruecos, y África ha sido su principal destino de viajes profesionales, siendo testigo de la transformación que el continente atraviesa y la esencia de los africanos para liderar el cambio.

Jaume Portell

Jaume Portell (Vilassar de Dalt, 1992) es periodista especializado en economía y relaciones internacionales, con un énfasis especial en el continente africano. Sus principales intereses incluyen el vínculo entre la deuda y la soberanía alimentaria, o cómo las dietas o los productos que utilizamos sirven para explicar cómo funciona el mundo. Ha trabajado en Senegal, Gambia, Guinea Conakry y otros países de África occidental, y ha colaborado con medios como Ara, France 24, Context, Revista 5W, The Guardian, El Salto Diario o la revista Panenka. En 2018 ganó el X Premio de Ensayo de la Casa África con Un grano de cacao, una reflexión sobre la agricultura africana y su rol en la industrialización del continente. En 2023 publicó “Per què no es queden a l'Àfrica?”, un ensayo que explica qué motivos han conducido a los senegaleses y a los gambianos a abandonar sus países de origen. En 2025 recibió la beca DevReporter para investigar sobre cómo la transición energética está afectando a dos países de África occidental.

Pablo José Martínez Osés

Pablo José Martínez Osés, licenciado en filosofía y doctor en ciencia política y relaciones internacionales. Trabaja hace 3 años y medio en Oxfam Intermón como responsable de investigación e incidencia política en Cooperación Internacional. Más de 30 años trabajando en cooperación internacional, en Centroamérica una década y en el decenio 2005-2015 como secretario ejecutivo de un espacio de investigación y conocimiento aplicado a la transformación de políticas públicas de desarrollo. Ha sido profesor asociado en la UAM y en la UC3M, así como docente en una decena de másteres oficiales en diferentes universidades españolas. También trabajó como asesor para asuntos globales y cooperación en el Ayuntamiento de Madrid y fue Director General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas.

Jose Javier Sastre Aparisi

Jose Javier Sastre Aparisi es ingeniero agrónomo, máster en Políticas y Procesos de Desarrollo y especialista en Responsabilidad Social Corporativa por la Universitat Politècnica de València. Desde hace seis años trabaja en Oxfam Intermón, donde ha centrado su labor en la financiación de proyectos de la Unión Europea, la conexión con el Sahel y la justicia climática. En sus más de quince años de experiencia profesional en cooperación al desarrollo, ha ejercido como investigador y profesor invitado en la Universitat Politècnica de València, y ha trabajado en organismos como la AECID, FIIAPP o el PNUD, tanto en el estado español como en países de África y América Latina.

Roméo Gbaguidi

Roméo Gbaguidi es presidente y director de investigación del Think Tank LemAfriQ (Laboratorio del Estudio de las Migraciones Africanas). Profesor de Universidades, es experto en procesos migratorios, geoestrategia y pragmática intercultural. Fue director y mediador intercultural del CEPI Hispano-Africano de la Comunidad de Madrid. Doctor en Humanidades por la Universidad Carlos III de Madrid (España), licenciado en Estudios Hispánicos y Afro-iberoamericanos y Técnico Superior en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad de Abomey-Calavi (Benín). Es Miembro del Consejo Asesor de la Estrategia España-África 2025-2028 del Gobierno español y miembro del Comité Científico de varias instituciones internacionales.

Agossa Paul Ogboya

Agossa Paul Ogboya es intérprete-traductor y diplomático en servicio en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Benín. Especialista en estrategia, seguridad y defensa, ejerce también como director regional para África Occidental del Think Tank LemAfriQ (Laboratorio del Estudio de las Migraciones Africanas). Es licenciado en letras y civilización españolas por la Universidad de Abomey-Calavi y Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de Madrid. Cuenta con

reconocida experiencia en el estudio de las dinámicas migratorias africanas y los desafíos de la seguridad internacional. Ha recibido formación en derecho internacional de la migración, desarrollo y mantenimiento de la paz. Es ponente habitualmente invitado para hablar sobre diplomacia, geopolítica y seguridad.

Ninguna parte ni la totalidad de este documento puede ser reproducida, grabada o transmitida en forma alguna ni por cualquier procedimiento, ya sea electrónico, mecánico, reprográfico, magnético o cualquier otro, sin autorización previa y por escrito de la Fundación Alternativas.

Dirección

Vicente Palacio

Coordinación

Andrea Chamorro

Edición de textos

© los autores

Documentación

© los autores

Diseño Gráfico

Álvaro López Moreno de Cala

© de los textos: sus autores

© de esta edición: Fundación Alternativas, 2026

© de las imágenes: sus autores

© Jaume Portell, Andrea Chamorro, Romeo Gbaguidi, Agossa Paul Ogboya, Olga Namasembe, Jose Javier Sastre Aparisi, Pablo Martinez Oses y Luis García Blanch

ISBN: 979-13-87842-23-9

Depósito legal: M-5721-2026